

Edición
en lengua española

Comunicaciones e informaciones

<u>Número de información</u>	Sumario	Página
	<i>I Comunicaciones</i>	
	Comisión	
2001/C 185/01	Tipo de cambio del euro	1
2001/C 185/02	Estados financieros de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero a 31 de diciembre de 2000	2
2001/C 185/03	Ayudas estatales — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre la ayuda C 18/2001 (ex N 123/2000) — Tasa del cambio climático ⁽¹⁾	22
2001/C 185/04	Ayudas estatales — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 5 del artículo 6 de la Decisión nº 2496/96/CECA de la Comisión, de 18 de diciembre de 1996, por la que se establecen normas comunitarias relativas a las ayudas estatales en favor de la siderurgia, en relación con la ayuda C 20/2001 (ex NN 77/2000) destinada a varias empresas del País Vasco (España) — I+D — Acero CECA ⁽¹⁾	41
2001/C 185/05	Ayudas estatales — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre la ayuda C 62/2000 (ex NN 142/99) — Ayuda en favor de Kahla Porzellan GmbH y Kahla/Thüringen Porzellan GmbH — Alemania ⁽¹⁾	45
2001/C 185/06	Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado CE — Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones ⁽¹⁾	57
2001/C 185/07	Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado CE — Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones	59
2001/C 185/08	Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado CE — Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones	60
2001/C 185/09	Notificación de una empresa en participación (asunto COMP/E-2/38.176 — DuBay) ⁽¹⁾	60

I

(Comunicaciones)

COMISIÓN

Tipo de cambio del euro ⁽¹⁾**29 de junio de 2001***(2001/C 185/01)*

1 euro	=	7,4444	coronas danesas
	=	9,2125	coronas suecas
	=	0,6031	libras esterlinas
	=	0,848	dólares estadounidenses
	=	1,2927	dólares canadienses
	=	105,37	yenes japoneses
	=	1,5228	francos suizos
	=	7,8865	coronas noruegas
	=	88,92	coronas islandesas ⁽²⁾
	=	1,6735	dólares australianos
	=	2,1045	dólares neozelandeses
	=	6,83323	rands sudafricanos ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fuente: Tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.

⁽²⁾ Fuente: Comisión.

ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBÓN Y DEL ACERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2000

(2001/C 185/02)

El balance de la CECA, las cuentas de pérdidas y ganancias y el estado de distribución de resultados del ejercicio que concluye a 31 de diciembre de 2000 se presentaron a la Comisión para su aprobación por medio del procedimiento escrito nº E/306/2001 de 20 de junio de 2001 y se recogen en el presente Informe financiero tal como los aprobó la Comisión.

Balance de la CECA a 31 de diciembre de 2000

(Importes expresados en euros)

— Antes de la distribución de resultados —

ACTIVO

	31 de diciembre de 2000	31 de diciembre de 1999
Depósitos en bancos centrales (nota C1)	84 650	95 385
Créditos sobre entidades de crédito		
— a la vista	8 331 435	4 975 072
— a plazo o con preaviso (nota C2.1)	25 381 261	71 316 975
— préstamos (nota C2.2)	611 297 253	931 643 446
Total	645 009 949	1 007 935 493
Créditos sobre clientes (nota C3)		
— préstamos	1 459 488 702	1 541 269 262
— exacciones	61 041	63 217
— multas	38 950 716	37 195 283
— bonificaciones de intereses que se han de recuperar	3 304 216	4 539 978
Total	1 501 804 675	1 583 067 740
Obligaciones y otros títulos de renta fija (nota C4)		
— de emisión pública	973 765 678	1 214 680 318
— otras fuentes de emisión	705 940 156	503 230 250
Acciones y otros títulos de renta variable (nota C5)	44 040 538	50 318 525
Total	1 723 746 372	1 768 229 093
Terrenos y construcciones (nota C6)	0	710 287
Otros activos (nota C7)	5 170 347	9 025 480
Cuentas de regularización (nota C8)	96 173 610	106 529 763
TOTAL ACTIVO	3 971 989 603	4 475 593 241
Compromisos no contabilizados en el balance (nota C23)	430 881 628	427 969 333

— Antes de la distribución de resultados —

PASIVO

	31 de diciembre de 2000	31 de diciembre de 1999
DEUDAS CON TERCEROS		
Deudas a entidades de crédito (nota C9)		
— a la vista	352 822	0
— a plazo o con preaviso	981 277 746	1 408 815 543
Total	981 630 568	1 408 815 543
Débitos representados por títulos (nota C10)	1 062 076 396	1 027 547 730
Otros pasivos (nota C11)	7 494 034	23 630 708
Cuentas de regularización (nota C12)	91 947 305	89 402 188
Total de compromisos con terceros	2 143 148 303	2 549 396 169
PRESUPUESTO OPERATIVO CECA (nota C13)	835 516 282	949 154 370
PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS		
Fondo de garantía (nota C14.1)	565 000 000	553 000 000
Provisiones para grandes riesgos (nota C14.2)	17 000 000	18 000 000
Otras provisiones (nota C14.3)	158 663 347	155 196 643
Total del inmovilizado	740 663 347	726 196 643
RESERVAS Y RESULTADOS (nota C15)		
Reserva especial	176 055 284	176 055 284
Antiguo fondo de pensiones	74 577 321	72 959 662
Resultados de ejercicios anteriores	213 454	666 841
Resultado del ejercicio (nota C16)	1 815 612	1 164 272
Total reservas y resultados	252 661 671	250 846 059
TOTAL PASIVO	3 971 989 603	4 475 593 241
Compromisos no contabilizados en el balance (nota C23)	426 626 265	415 913 293

Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio concluido a 31 de diciembre de 2000

(Importes expresados en euros)

CARGAS

	Ejercicio 2000	Ejercicio 1999
Intereses y cargas asimiladas (nota C17)	170 536 669	179 314 809
Comisiones pagadas	439 219	439 353
Pérdidas procedentes de operaciones financieras		
— diferencia de cambio (nota B2)	862 006	1 429 678
— minusvalías en obligaciones y otros títulos de renta fija	6 703 555	3 940 390
— correcciones de valor en obligaciones y otros títulos de renta fija (nota C4)	2 960 265	36 720 808
— correcciones de valor en acciones y otros títulos de renta variable (nota C5)	13 920 110	0
Total	24 445 936	42 090 876
Gastos generales administrativos (nota C18)	5 000 000	5 000 000
Correcciones de valor en terrenos y construcciones (nota C6)	166 180	328 378
Otras cargas de explotación (nota C19)	315 884	308 312
Correcciones de valor en créditos y provisiones para posibles pasivos y para compromisos:		
— corrección de valor en créditos	12 590 342	13 479 465
— dotación para el fondo de garantía (nota C14.1)	12 000 000	23 000 000
— dotación a las otras provisiones para riesgos y cargas (nota C13 y C14.3)	17 134 135	2 874 287
Total	41 724 477	39 353 752
Cargas excepcionales	270 668	2 984 370
Compromisos jurídicos del ejercicio (nota C13)	129 942 347	145 553 799
Dotación a las provisiones para la financiación del presupuesto operativo CECA (nota C13)	0	34 000 000
TOTAL DE CARGAS	372 841 380	449 373 649
Resultado del ejercicio (nota C16)	1 815 612	1 164 272
TOTAL	374 656 992	450 537 921

RENDIMIENTOS

	Ejercicio 2000	Ejercicio 1999
Intereses y rendimientos asimilados (nota C20) (intereses de títulos de renta fija: 73 696 657 en 2000 y 64 332 666 en 1999)	248 795 316	254 449 772
Comisiones percibidas	93 400	0
Beneficios procedentes de operaciones financieras		
— plusvalías en obligaciones y otros títulos de renta fija	2 158 217	17 405 532
— rectificación de correcciones de valor en obligaciones y otros títulos de renta fija	16 334 306	0
— rectificación de correcciones de valor en acciones y otros títulos de renta variable (nota C5)	7 951 984	7 483 752
Total	26 444 507	24 889 284
Rectificaciones de correcciones de valor en créditos y sobre provisiones para posibles pasivos y para compromiso:		
— rectificación de correcciones de valor en créditos	13 155 711	13 760 280
— rectificación de las provisiones para grandes riesgos (nota C14.2)	1 000 000	5 000 000
— rectificación de la reserva para contingencias presupuestarias (nota C14.3)	0	21 000 000
— rectificación en las demás provisiones por riesgos y cargas (nota C14.3)	0	26 131 467
Total	14 155 711	65 891 747
Otros resultados de explotación (nota C21)	2 122 461	455 630
Rendimientos excepcionales	2 427 191	14 166
Rendimientos vinculados al presupuesto operativo de la CECA (nota C22)	74 618 406	104 837 322
Rectificación de la provisión para la financiación del POC	6 000 000	0
TOTAL DE RENDIMIENTOS	374 656 992	450 537 921

Estados de distribución de resultados del ejercicio concluido a 31 de diciembre de 2000

(Importes expresados en euros)

	Ejercicio 2000	Ejercicio 1999
Resultado prorrogado al 1 de enero	213 454	666 841
Resultados del ejercicio pendiente de distribución	1 815 612	1 164 272
Total	2 029 066	1 831 113
Distribución destinada al antiguo fondo de pensiones (nota C15)	0	1 617 659
Resultado prorrogado al 31 de diciembre	2 029 066	213 454

NOTAS CORRESPONDIENTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2000

(Importes expresadas en euros)

A. LA CECA

La Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) se creó en virtud del Tratado de 18 de abril de 1951. Según este Tratado, la CECA tiene por misión contribuir al desarrollo económico de los Estados miembros a través de la creación de un mercado común del carbón y el acero. A causa de la expiración del Tratado CECA, que tendrá lugar el 23 de julio del 2002, la exacción fiscal CECA se situó en cero en 1998 (Decisión de la Comisión de 23 de diciembre de 1997) y la política de préstamos cesó prácticamente a partir de julio de 1997 (Decisión de la Comisión de 22 de junio de 1994). Por esa razón, ahora la CECA obtiene sus principales recursos del saldo neto (véase nota C16.2) de la gestión de las distintas reservas y provisiones.

Después del 23 de julio de 2002, se transferirán a la Comunidad Europea todos los elementos del patrimonio activo y pasivo de la CECA. El valor neto de ese patrimonio se considera un patrimonio destinado a la investigación en los sectores relacionados con la industria del carbón y del acero, denominado «Liquidación de la CECA».

B. PRINCIPIOS Y MÉTODOS CONTABLES APLICADOS

1. Presentación de los Estados financieros

Los Estados financieros se han elaborado conforme a los principios contables generalmente aceptados.

Los métodos contables y métodos de evaluación que se utilizan en las distintas partidas de los Estados financieros tienen en cuenta las restricciones y resoluciones aplicables a la CECA en virtud de los Tratados y otras decisiones adoptadas por las distintas instituciones de las Comunidades Europeas.

Los métodos contables tienen en cuenta la interrupción de las operaciones a partir del 23 de julio de 2002, fecha de expiración del Tratado CECA.

Los Estados financieros se presentan de conformidad con las Directivas 78/660/CEE y 86/635/CEE del Consejo ⁽¹⁾, relativas a las cuentas anuales y las cuentas consolidadas de los bancos y otros establecimientos financieros, en la medida en que estas últimas sean aplicables y sin perjuicio de las modificaciones que resulten necesarias.

2. Conversión de divisas

La moneda elegida por la CECA para presentar sus cuentas anuales es el euro («EUR»).

Las operaciones en monedas extranjeras efectuadas por la CECA se convierten en euros al tipo mensual comunicado por el Banco Central Europeo.

⁽¹⁾ DO L 222 de 14.8.1978 y DO L 372 de 31.12.1986.

Los elementos no monetarios se convierten en euros al tipo mensual vigente en la fecha de su adquisición o de su última evaluación.

En la fecha de elaboración del balance, los elementos monetarios se convierten en euros al tipo mensual vigente en dicha fecha. Las diferencias negativas se anotan como cargas en la cuenta de pérdidas y ganancias. Las diferencias positivas se difieren y se inscriben bajo la rúbrica «cuenta de regularización» en el pasivo del balance.

2.1. Tipos de conversión

Al final del año se han utilizado los siguientes tipos de conversión en euros de las cuentas de balance en divisas:

Zona del euro		
Franco belga y luxemburgués	40,3399	
Marco alemán	1,95583	
Franco francés	6,55957	
Marco finlandés	5,94573	
Florín neerlandés	2,20371	
Libra irlandesa	0,787564	
Lira italiana	1936,27	
Chelín austriaco	13,76030	
Peseta española	166,386	

Fuera de la zona del euro	31 de diciembre	
	2000	1999
Corona danesa	7,46310	7,44330
Corona sueca	8,83130	8,56250
Dracma griega	340,750	330,300
Libra esterlina	0,624100	0,621700
Franco suizo	1,5232	1,60510
Dólar estadounidense	0,93050	1,00460
Yen japonés	106,92	102,730

2.2. A 31 de diciembre de 2000, las distintas divisas mencionadas y el euro forman el balance de la CECA del modo siguiente:

(en euros)		
Divisa	Activo	Pasivo
Euro	1 650 343 022	1 796 054 968
Franco belga	69 192 651	26 208 740
Marco alemán	364 261 435	407 062 393
Escudo portugués	151 882 376	136 507 645
Franco francés	471 465 894	453 751 385
Marco finlandés	682 910	0
Florín neerlandés	2 331 523	1 038 635
Libra irlandesa	403 488	0
Franco luxemburgués	117 079 036	115 868 453
Lira italiana	169 856 195	106 701 393
Chelín austriaco	7 998 709	3 702 982
Peseta española	33 017 931	30 475 906
Subtotal	3 038 515 170	3 077 372 500
Corona danesa	735 979	0
Dracma griega	1 235 840	0
Corona sueca	298 417	0
Libra esterlina	633 165 746	594 608 120
Franco suizo	411 929	413 535
Dólar estadounidense	297 097 329	194 347 999
Yen japonés	529 193	105 247 449
Total	3 971 989 603	3 971 989 603

3. Colocación de tesorería y método de valoración de las obligaciones y otros títulos

Las normas cautelares internas de la CECA imponen que las inversiones de cartera se limiten a obligaciones de emisores de primer orden. No obstante, en 1998, y de manera excepcional, en el marco del acuerdo de reestructuración de la deuda de un deudor forzoso, la CECA se convirtió en propietaria de acciones y otras participaciones de renta variable de una empresa privada.

Las obligaciones, los otros títulos de renta fija y las acciones y demás títulos de renta variable se valoran tomando como referencia el valor más bajo del coste medio de adquisición o el valor de mercado vigente al final del ejercicio.

Esta norma no se aplica a los títulos considerados inmovilizaciones financieras, que se valoran tomando como referencia el valor más bajo del coste medio o el valor de amortización.

4. Presupuesto operativo CECA (POC)

Una parte de los fondos CECA se pone a disposición del presupuesto operativo CECA. La Comisión aprueba este presupuesto operativo anualmente, después de informar al Consejo y consultar con el Parlamento Europeo.

Los compromisos asumidos por el POC con terceros, así como las provisiones para la financiación del POC se muestran en la partida presupuesto operativo CECA (véase la nota C13).

5. Multas y bonificaciones de intereses

Las multas y las bonificaciones de intereses cuyo reembolso se haya solicitado sólo se consideran recursos de la CECA una vez que han sido efectivamente cobradas. Las multas impuestas que aún no se han cobrado y las bonificaciones de interés cuyo reembolso se ha solicitado se constituyen desde ese momento en provisión (véase la nota C14.3.a).

6. Presentación de cifras de 1999 comparables

A raíz de un cambio introducido en la presentación de los estados financieros de 2000, se reelaboraron las cifras de 1999 para que resultaran comparables.

C. NOTAS EXPLICATIVAS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE Y LAS CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Depósitos en bancos centrales

Esta partida representa los activos de la CECA en los bancos centrales de algunos Estados miembros.

2. Créditos sobre entidades de crédito

2.1. A plazo o con preaviso

El plazo residual de estos créditos se desglosa del modo siguiente:

	31 de diciembre	
	2000	1999
Hasta tres meses	25 381 261	60 700 922
Entre tres meses y un año	—	10 616 053
Total	25 381 261	71 316 975

(en euros)

2.2. Préstamos

El plazo residual de estos créditos se desglosa del modo siguiente:

	31 de diciembre	
	2000	1999
Hasta tres meses	40 095 286	60 655 213
Entre tres meses y un año	215 609 298	250 263 601
Entre uno y cinco años	284 383 600	538 569 222
Más de cinco años	71 209 069	82 155 410
Total	611 297 253	931 643 446

(en euros)

3. Créditos sobre clientes

3.1. Préstamos

Los préstamos concedidos a las entidades de crédito figuran en la partida de «Créditos sobre entidades de crédito» (véase la nota C2).

Los demás préstamos se desglosan del modo siguiente:

(en euros)		
31 de diciembre		
	2000	1999
1. Préstamos concedidos con cargo a fondos de empréstitos		
— importe pendientes de cobro	1 546 451 118	1 622 783 270
— correcciones de valor	- 143 192 092	- 143 847 841
Subtotal	1 403 259 026	1 478 935 429
2. Préstamos concedidos con cargo a la reserva especial para la financiación de viviendas sociales	19 509 794	21 862 834
Total intermedio	1 422 768 820	1 500 798 263
El plazo residual de estas operaciones se desglosa del modo siguiente a 31 de diciembre		
	2000	1999
— Hasta tres meses	131 767 190	41 007 561
— Entre tres meses y un año	315 397 548	63 949 913
— Entre uno y cinco años	593 899 440	1 015 442 411
— Más de cinco años	524 896 734	524 246 220
3. Préstamos concedidos con cargo al antiguo Fondo de pensiones concedidos a los funcionarios de las Comunidades Europeas para la construcción de viviendas	36 087 234	39 218 203
4. Vencimiento de préstamos con demora e intereses de demora	632 648	1 252 796
Total general	1 459 488 702	1 541 269 262

Nota: Los préstamos están, por lo general, garantizados por los Estados miembros, por bancos y empresas o mediante hipotecas.

3.2. Exacción

El tipo de la exacción de 1998, 1999 y 2000 fue del 0 % y los créditos a 31 de diciembre de 2000 se refieren, por tanto, a años anteriores.

Esta partida se desglosa del modo siguiente:

31 de diciembre		
	2000	1999
Importe bruto	5 621 065	6 061 793
Correcciones de valor	- 5 560 024	- 5 998 576
Importe neto	61 041	63 217

Incluye, en particular, una suma de 5 551 715 euros en concepto de procedimientos judiciales (5 281 288 euros a 31 de diciembre de 1999).

3.3. Multas

En esta partida se incluyen los créditos de la Comisión sobre empresas a las que se ha impuesto una multa en aplicación de las normas del Tratado.

Tras las correcciones de valor, se eleva a 38 950 716 euros (37 195 283 euros a 31 de diciembre de 1999).

Esta partida corresponde principalmente a dos procedimientos.

La Comisión ha impuesto multas que ascienden a un total de 104 364 350 euros [Decisión 94/215/CECA ⁽¹⁾ de 16 de febrero de 1994] a empresas siderúrgicas por incumplimiento de las normas de competencia en el ámbito de la comercialización de vigas de acero. El Tribunal de Primera Instancia, por sentencia de 11 de marzo de 1999, redujo la cuantía total de las multas en 24 774 000 euros, hasta 79 590 350 euros. Hasta el 31 de diciembre de 2000 se ingresaron pagos por valor de 50 631 350 euros. Siete empresas interpusieron un recurso contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

La Comisión ha impuesto multas que ascienden a un total de 27 380 000 euros [Decisión 98/247/CECA ⁽²⁾ de 21 enero de 1998] en aplicación del artículo 65 del Tratado a empresas siderúrgicas por concertación sobre la fórmula de cálculo del extra de aleación. Se han realizado pagos por un total de 14 740 000 euros y dos tercios de las empresas implicadas han presentado un recurso contra esta Decisión ante el Tribunal de Primera Instancia.

3.4. Bonificaciones de intereses que se han de recuperar

En esta partida se recogen los créditos sobre empresas que han disfrutado de un préstamo bonificado a las que la Comisión se ha visto obligada a pedir la devolución total o parcial de la bonificación de intereses ya pagada.

4. Obligaciones y otros títulos de renta fija

4.1. Composición

Las obligaciones y otros títulos de renta fija se desglosan del modo siguiente:

(en euros)			
	Correcciones de valor sobre obligaciones y otros títulos de renta fija Dotación (rectificación)	31 de diciembre	
		2000	1999
De emisores públicos:			
Valor bruto		995 016 008	1 223 352 880
Correcciones de valor	(10 670 434)	- 21 250 330	- 31 920 764
Valor neto		973 765 678	1 191 432 116
Obligaciones propias:			
Valor bruto		0	23 359 671
Correcciones de valor	(111 469)	0	- 111 469
Valor neto		0	23 248 202
De otros emisores:			
Valor bruto		710 521 782	510 404 016
Correcciones de valor	(2 592 140)	- 4 581 626	- 7 173 766
Valor neto		705 940 156	503 230 250
Total obligaciones:			
Valor bruto		1 705 537 790	1 757 116 567
Correcciones de valor	(13 374 043)	- 25 831 956	- 39 205 999
Valor neto		1 679 705 834	1 717 910 568

⁽¹⁾ DO L 116 de 6.5.1994.

⁽²⁾ DO L 100 de 1.4.1998.

4.2. Vencimiento en 2001

Los títulos depositados en cartera que tienen su vencimiento final en el transcurso de 2001 ascienden a los importes siguientes:

(en euros)	
— Emisores públicos:	170 282 570
— Otros emisores:	177 832 751
Total	348 115 321

4.3. Inmovilizaciones financieras (véase la nota B.3)

Se consideran inmovilizaciones financieras los títulos que permanecen en cartera hasta su vencimiento final. Se trata principalmente de papel a corto y medio plazo con vistas a garantizar el servicio de los empréstitos.

Al 31 de diciembre de 2000, las inmovilizaciones financieras ascienden a 48 519 675 euros.

El valor de amortización de estos títulos es inferior al precio medio de compra por un importe total de 1 548 471 euros.

4.4. Tasa de rentabilidad

Las inversiones de la tesorería tienen en cuenta las dificultades de vencimiento y liquidez de las operaciones financieras de la CECA. Se someten a criterios estrictos por lo que se refiere a la calidad financiera de la contrapartida.

La tasa de rentabilidad de las inversiones (calculada según el método de la *Association of Investment Management and Research*) fue del 4,72 % en 2000.

5. Acciones y otros títulos de renta variable

Las acciones y otros títulos de renta variable evolucionaron de la manera siguiente:

(en euros)			
	Correcciones de valor sobre acciones y otros títulos de renta variable Dotación (rectificación)	31 de diciembre	
		2000	1999
Valor bruto		98 139 651	98 449 511
Correcciones de valor	5 968 127	– 54 099 113	– 48 130 986
Valor neto		44 040 538	50 318 525

Estas acciones y títulos de renta variable los recibió la CECA en el marco de la firma del plan de reestructuración de un deudor forzoso (véase la nota B3).

Una parte de uno de estos títulos, que supone un valor neto de 8 287 500 euros fue objeto de un contrato de préstamo con una entidad de crédito (vencimiento a 1 de julio de 2004 con opción de compra a 1 de julio de 2002).

6. Terrenos y construcciones

(en euros)

	Fecha de adquisición	Valor de adquisición	31.12.1999 Valor neto	Movimientos del ejercicio			Valor neto a 31.12.2000
				Adquisiciones	Valor neto contable de las cesiones	Correcciones de valor	
Edificio de Lisboa	1986-1993	2 670 796	590 301		459 114	131 187	0
Derecho de superficie del inmueble de Milán	1986	879 882	119 986		84 993	34 993	0
Total			710 287		544 107	166 180	0

Los distintos edificios en propiedad de la CECA fueron, en su día, objeto de un convenio de cesión a la Comunidad Europea, con pago de un alquiler en concepto de remuneración de los fondos invertidos por la CECA.

Los convenios de cesión permitieron que la Comisión reembolsase completamente en 1994 y 1995 el capital adeudado a la CECA, con vistas a la transmisión de estos edificios a la Comunidad Europea.

La transmisión de los edificios de Lisboa y Milán se completó en 2000.

Esta operación arroja a la CECA una plusvalía en concepto de cesión por valor de 1 987 121 euros, que se obtiene de restar al importe de la cesión (2 531 228 euros) el valor neto contable (544 107 euros) en la fecha de cesión comprendido en la rúbrica «Otros resultados de explotación» de la cuenta de pérdidas y ganancias.

7. Otros activos

Los otros activos se dividen del modo siguiente:

(en euros)

	31 de diciembre	
	2000	1999
— Retenidas a la fuente e IVA que debe recuperarse	2 374 098	2 530 182
— Préstamos a funcionarios	2 763 544	6 467 479
— Varios	32 705	27 819
Total	5 170 347	9 025 480

8. Cuentas de regularización del activo

Las cuentas de regularización del activo se dividen del modo siguiente:

(en euros)

	31 de diciembre	
	2000	1999
— Intereses devengados sobre préstamos y swaps	74 306 162	76 126 468
— Intereses devengados sobre depósitos y cartera de valores	25 819 166	30 998 437
— Gastos de emisión y primas de reembolso pendientes de amortización	2 750 794	4 743 361
	102 876 122	111 868 266
— Correcciones de valores acumulados	– 6 702 512	– 5 338 503
Total	96 173 610	106 529 763

9. Deudas con entidades de crédito

El plazo residual de estas operaciones se desglosa del modo siguiente:

	31 de diciembre	
	2000	1999
A la vista	352 822	0
A plazo o con preaviso:		
— Empréstitos		
Hasta tres meses	59 539 460	100 388 336
Entre tres meses y un año	374 269 101	293 297 086
Entre uno y cinco años	543 151 231	976 419 166
Más de cinco años	4 317 954	38 710 955
Total	981 277 746	1 408 815 543

10. Débitos representados por un título

Esta partida comprende los créditos con pagaré.

Durante el ejercicio 2001 expira una parte de los empréstitos en curso a 31 de diciembre de 2000, por importe de 240 430 841 euros.

11. Otros pasivos

Los otros pasivos se desglosan del modo siguiente:

	31 de diciembre	
	2000	1999
Cuenta corriente del presupuesto operativo de la CECA	7 431 189	20 542 964
Adelantos sobre transmisión de inmuebles ⁽¹⁾	0	2 531 228
Otros	62 845	556 516
Total	7 494 034	23 630 708

⁽¹⁾ De acuerdo con la posibilidad prevista en la Decisión de 11 de junio de 1992, la Comisión procedió durante los ejercicios 1994 y 1995 a realizar adelantos sobre transmisión de los inmuebles cedidos por la CECA (nota C6).

12. Cuentas de regularización del pasivo

Las cuentas de regularización del pasivo se desglosan del modo siguiente:

	31 de diciembre	
	2000	1999
Intereses devengados en empréstitos y líneas de crédito	76 202 004	79 638 283
Comisiones devengadas en préstamos	132 307	146 412
Prima de emisión pendiente de amortización	3 684 239	4 739 972
Diferencias positivas de cambio diferidas	11 928 755	4 877 521
Total	91 947 305	89 402 188

13. Presupuesto operativo de la CECA

En esta partida se registran los compromisos del POC, por un valor total de 434 516 282 euros (556 154 370 euros a 31 de diciembre de 1999) y las provisiones vinculadas a la financiación del POC, por un valor total de 401 000 000 de euros (393 000 000 de euros a 31 de diciembre de 1999).

En 2000, los compromisos para el presupuesto operativo evolucionaron de la manera siguiente:

(en euros)

	Importes a 31.12.1999	Nuevos compromisos jurídicos	Pagos	Anulaciones	Importes a 31.12.2000
Readaptación	151 518 884	30 766 000	37 348 300	14 035 007	130 901 577
Investigación	194 306 352	80 464 744	88 184 208	1 983 944	184 602 943
Bonificaciones del artículo 54	2 172 448	—	332 579	1 702 324	137 545
Bonificaciones del artículo 56	85 175 105	—	11 191 524	33 467 792	40 515 789
Capítulo social acero	49 858 038	—	14 811 683	15 129 714	19 916 641
Capítulo social carbón (Rechar)	73 123 543	18 711 603	28 084 535	5 308 824	58 441 787
Total	556 154 370	129 942 347	179 952 830	71 627 605	434 516 282

La provisión para la financiación de los presupuestos operativos posteriores y la provisión para contingencias presupuestarias evolucionaron del modo siguiente:

(en euros)

	Importe a 31.12.1999	Dotación	Reanudación 2000	Importes a 31.12.2000
Provisión para la financiación de presupuestos posteriores ⁽¹⁾ :	334 000 000		6 000 000	
— Provisión POC 2001 ⁽²⁾				108 000 000
— Provisión POC 2002 y provisión para dispositivo de iniciación/alisado del Fondo de investigación del carbón y del acero				220 000 000
Provisión para contingencias presupuestarias ⁽³⁾	59 000 000	14 000 000		73 000 000
Total	393 000 000	14 000 000	6 000 000	401 000 000

⁽¹⁾ La Autoridad Presupuestaria dispuso esta provisión cuando se aprobó el presupuesto operativo de la CECA de 1997. Se inscribe dentro del ajuste a cero de la exacción desde 1998 y la necesidad de prever la financiación regular de los presupuestos operativos posteriores hasta el 2002.

Además, el mecanismo de financiación del Fondo de investigación del carbón y del acero, que se implantará después del 23 de julio de 2002, prevé un dispositivo de iniciación/alisado, que utilizará esta provisión [Decisión de la Comisión de 6 de septiembre de 2000 (COM(2000) 518 final y 519 final)].

⁽²⁾ Decisión n° 2749/2000 de la Comisión de 13 de diciembre de 2000.

⁽³⁾ Esta provisión está destinada a garantizar los compromisos previstos de la CECA para los recursos del POC 2001 y del POC 2002.

14. Provisión para riesgos y gastos

14.1. Fondo de garantía

El fondo de garantía se destina a cubrir operaciones de obtención y concesión de préstamos. Tras recibir una dotación de 12 millones de euros, el fondo de garantía se eleva a 565 millones de euros a 31 de diciembre de 2000. Este refuerzo del fondo de garantía se inscribe en la perspectiva de la expiración del Tratado CECA.

En efecto, la Comisión confirmó el 11 de septiembre de 1996 su voluntad de mantener un nivel de reservas hasta el 100 % del importe de los préstamos pendientes de pago después del 23 de julio de 2002 y desprovistos de la garantía de un Estado miembro, lo que exige aumentar progresivamente el fondo de garantía para alcanzar un nivel cercano a los 572 millones de euros (calculado al tipo de conversión de 31 de diciembre de 2000). A 31 de diciembre de 2000, la cobertura se alcanza al 98,8 % siempre que no haya demoras en los préstamos que expiran antes del 23 de julio de 2002.

El fondo de garantía evolucionó del modo siguiente:

(en euros)		
31.12.1999	Dotación 2000	31.12.2000
553 000 000	12 000 000	565 000 000

14.2. Provisión para grandes riesgos

En el contexto de la expiración del Tratado CECA en 2002 y de la disminución gradual del saldo de los préstamos concedidos, aumenta la concentración del riesgo sobre ciertos préstamos de volumen importante (estos grandes riesgos se definen de conformidad con la Directiva 92/121/CEE, de 21 de diciembre de 1992, sobre supervisión y control de las operaciones de gran riesgo de las entidades de crédito).

La provisión para grandes riesgos concierne por tanto a los préstamos concedidos sin una garantía de primer orden y que sobrepasen el 25 % de los fondos propios de la CECA.

Está destinada a cubrir específicamente este riesgo de concentración y a hacer frente a la incidencia de un posible incumplimiento.

Calculada sobre la base de la incidencia de tales grandes riesgos a 31 de diciembre de 2000 y según una metodología recomendada por un equipo de expertos internacionales, esta provisión se elevó a 17 millones de euros (18 millones a 31 de diciembre de 1999).

14.3. Otras provisiones

Esta partida recoge las provisiones por multas y bonificaciones a recuperar por un importe total de 42 272 249 euros (41 735 261 a 31 de diciembre de 1999) y las otras provisiones de un importe total de 116 391 098 euros (113 461 382 a 31 de diciembre de 1999).

a) Las provisiones por multas y bonificaciones a recuperar (véase nota B.5):

(en euros)			
	31 de diciembre de 1999	Movimiento del balance 2000	31 de diciembre de 2000
Provisión para multas y recargos por demora que se han de cobrar posteriormente	37 195 283	1 755 433	38 950 716
Provisión para bonificaciones que se han de recuperar	4 539 978	- 1 218 445	3 321 533
Total	41 735 261		42 272 249

b) Las otras provisiones:

(en euros)

	31 de diciembre de 1999	Movimientos del año 2000			31 de diciembre de 2000
		Dotación	Rectificación	Variación de cambio	
Provisión para riesgos sobre los tipos de interés ⁽¹⁾	53 157 495	484 115	—	– 204 419	53 437 191
Provisión para gastos específicos vinculados a las actividades bancarias ⁽²⁾	200 000	—	—	—	200 000
Provisión para recursos contra la Decisión 94/215/CECA ⁽³⁾	51 598 263	2 342 351	—	—	53 940 614
Provisión para recursos contra la Decisión 98/247/CECA ⁽⁴⁾	8 505 624	307 669	—	—	8 813 293
Total	113 461 382	3 134 135	—	– 204 419	116 391 098

⁽¹⁾ Cuando un deudor no puede cumplir sus compromisos, las obligaciones emitidas por la CECA a largo plazo (vencimiento posterior al 2002) y a interés fijo dejan de adosarse a elementos activos que produzcan un tipo de interés equivalente.

En el marco del principio de prudencia y de la expiración del tratado CECA en el 2002, se ha constituido una provisión para cubrir de forma completa los riesgos de los tipos de interés.

⁽²⁾ Se ha constituido esta provisión para cubrir los gastos de asistencia y otros gastos imprevistos. Dicho riesgo existe, especialmente, en el ámbito jurídico debido a que la CECA, en el marco de sus operaciones recurre con menos frecuencia a agentes nacionales que corran con todos los gastos de intervención vinculados a las operaciones de préstamo.

⁽³⁾ Se ha constituido esta provisión a partir de los cobros de las multas en el marco de la Decisión 94/215/CECA, de 16 de febrero de 1994, para cubrir el posible reembolso de los importes cobrados en el caso de que el Tribunal de Justicia falle a favor de las empresas que recurrieron contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de marzo de 1999 (nota C3.3).

⁽⁴⁾ Se ha constituido esta provisión a partir de los cobros de las multas en el marco de la Decisión 98/247/CECA de 21 de enero de 1998 para cubrir el posible reembolso de los importes cobrados en el caso de que el Tribunal de Primera Instancia falle a favor de las empresas que presentaron un recurso contra dicha Decisión (nota C3.3).

15. Reservas

(en euros)

	Reservas a 31.12.1999 después de la distribución	Dotación (rectificación)	Reservas a 31.12.2000 antes de la distribución	Distribución a 31.12.2000	Reservas a 31.12.2000 después de la distribución
Reserva especial	176 055 284	0	176 055 284	0	176 055 284
Antiguo fondo de pensiones	74 577 321	0	74 577 321	0	74 577 321
Total	250 632 605	0	250 632 605	0	250 632 605

La reserva especial se destina a la concesión de préstamos con cargo a los recursos propios de la CECA para la financiación de viviendas sociales.

El antiguo fondo de pensiones representó el total de las obligaciones de pensión constituidas en provisión por la CECA hasta el 5 de marzo de 1968. A partir de esta fecha, los Estados miembros asumieron los compromisos de pago de las pensiones de los funcionarios a través del presupuesto general. Este fondo se utiliza para financiar préstamos a la construcción destinados a funcionarios de las Comunidades Europeas. También se ha utilizado para conceder préstamos especiales en las industrias del carbón y del acero.

16. Análisis de los resultados del ejercicio

El resultado global de la CECA depende simultáneamente del resultado de sus operaciones no presupuestarias (préstamos y empréstitos — inversiones de tesorería — variaciones de los tipos de cambio) y del resultado de la ejecución del presupuesto operativo de la CECA.

16.1. Operaciones no presupuestarias

(en euros)

Resultado	31 de diciembre	
	2000	1999
Resultado de explotación antes de los movimientos sobre las provisiones		
— Operaciones préstamos y empréstitos	2 179 046	2 065 277
— Intereses en cuentas bancarias	2 604 998	6 319 306
— Operaciones en títulos en cartera	78 095 255	50 243 418
— Variación de cambio	- 862 006	- 1 429 678
— Varios	1 691 025	- 2 855 568
Total	83 708 318	54 342 755
Movimientos netos sobre las provisiones		
— Provisión para riesgos y gastos ⁽¹⁾	- 3 134 135	23 257 179
— Provisión para grandes riesgos ⁽²⁾	1 000 000	5 000 000
— Correcciones de valor en créditos	565 369	280 815
Resultado de las operaciones no presupuestarias	82 139 552	82 880 749
Importe destinado a la financiación del POC ⁽³⁾	- 54 323 940	- 79 716 477
Resultado una vez deducido el saldo neto destinado al presupuesto operativo	27 815 612	3 164 272

⁽¹⁾ Véase la nota C14.3b.

⁽²⁾ Véase la nota C14.2.

⁽³⁾ En aplicación del cambio de método contable que tuvo lugar el 31 de diciembre de 1992, los ingresos percibidos en el ejercicio de 1999 se han asignado a la financiación del presupuesto operativo de 1999 (saldo neto, véase la nota C16.2).

16.2. Ejecución del presupuesto operativo de la CECA

(en euros)

	31 de diciembre	
	2000	1999
Ejecución del presupuesto		
Gastos		
— Gastos administrativos (nota C18)	5 000 000	5 000 000
— Compromisos jurídicos (nota C11)	129 942 347	145 553 799
— Financiación de futuros presupuestos	0	34 000 000
Total	134 942 347	184 553 799
Ingresos (importes netos)		
— Exacción (nota C22)	—	—
— Multas (nota C22)	—	16 605 836
— Reembolso de bonificaciones de intereses	1 955 203	2 557 049
— Varios (nota C22)	1 035 599	320 008
— Anulaciones de compromisos jurídicos (nota C22)	71 627 605	85 354 429
— Financiación de futuros presupuestos	6 000 000	—
— Saldo neto del ejercicio (nota C16.1)	54 323 940	79 716 477
Total	134 942 347	184 553 799
Resultado de la ejecución del presupuesto	0	0

16.3. Determinación del resultado del ejercicio

(en euros)

	31 de diciembre	
	2000	1999
Resultados de las operaciones no presupuestarias una vez deducido el saldo neto destinado al presupuesto operativo (nota C16.1)	27 815 612	3 164 272
Resultado de la ejecución del presupuesto (nota C16.2)	0	0
Total	27 815 612	3 164 272
Rectificación de las provisiones para la financiación del presupuesto operativo/contingencias presupuestarias (nota C14.3a)	- 14 000 000	21 000 000
Dotación del fondo de garantía (nota C14.1)	- 12 000 000	- 23 000 000
Resultado antes de la distribución	1 815 612	1 164 272

17. Intereses y gastos asimilados

(en euros)

	31 de diciembre	
	2000	1999
Intereses de empréstitos y swaps	168 492 330	177 112 390
Intereses bancarios	51 772	44 317
Gastos de emisión y primas de reembolso	1 992 567	2 158 102
Total	170 536 669	179 314 809

18. Gastos generales administrativos

Se han entregado 5 millones de euros al presupuesto general de la Comisión de las Comunidades Europeas para cubrir de manera global los gastos administrativos de la CECA.

19. Otras cargas de explotación

(en euros)

	31 de diciembre	
	2000	1999
Gastos de empréstitos	128 969	98 417
Gastos SWIFT/Reuters	158 354	192 031
Otros	28 561	17 864
Total	315 884	308 312

20. Intereses percibidos y rendimientos asimilados

(en euros)

	31 de diciembre	
	2000	1999
Intereses de préstamos y swaps	168 699 495	179 588 983
Primas de pago y reembolso	2 072 568	2 208 051
Intereses bancarios	2 696 044	6 637 370
Intereses de obligaciones y otros títulos de renta fija	73 603 257	64 332 665
Intereses de acciones y otros títulos de renta fija	1 723 951	1 682 703
Total	248 795 316	254 449 772

21. Otros rendimientos de explotación

(en euros)

	31 de diciembre	
	2000	1999
Ingresos de cupones y obligaciones prescritos	5 456	12 681
Otros rendimientos de la actividad de préstamos	1 961	—
Varios	2 115 044	442 949
Total	2 122 461	455 630

22. Rendimientos vinculados al presupuesto operativo

(en euros)

	31 de diciembre	
	2000	1999
Exacción ⁽¹⁾	—	—
Multas ⁽²⁾	—	16 605 836
Varios	1 035 598	320 008
Anulación de compromisos jurídicos (nota C13)	71 627 605	85 354 429
Reembolso de bonificaciones de intereses (notas B5 y C3.4) ⁽³⁾	1 955 203	2 557 049
Total	74 618 406	104 837 322

⁽¹⁾ El Tratado autoriza a la CECA a imponer una exacción sobre la producción de carbón y acero de las empresas de la Comunidad. Dicha exacción se calcula a partir de los valores medios comunitarios de los diferentes productos sujetos a exacción. Para los años 1998 a 2000, la Comisión Europea decidió fijarla en un 0 %.

⁽²⁾ Esta partida incluye los ingresos procedentes del cobro de multas impuestas por la Comisión conforme a los artículos 58 y 65 del Tratado de la CECA y los recargos por demora.

⁽³⁾ Esta partida incluye los rendimientos resultantes de la recuperación de bonificaciones de intereses cuyo reembolso la Comisión se ha visto obligada a solicitar.

23. Compromisos no contabilizados en el balance**23.1. Compromisos recibidos**

(en euros)

	31 de diciembre	
	2000	1999
Compromisos procedentes de operaciones de swaps		
— Compromisos en capital nocional vinculados a operaciones de swaps de tipo de intereses	229 991 973	222 436 108
— Compromisos en capital vinculados a operaciones de swaps de divisas y tipo de interés	200 889 655	205 533 225
Total	430 881 628	427 969 333

23.2. Compromisos realizados

(en euros)

	31 de diciembre	
	2000	1999
a) Compromisos procedentes de operaciones de swaps		
Compromisos en capital nocional vinculados a operaciones de swaps de tipo de intereses	229 991 973	222 436 108
b) Compromisos en capital vinculados a operaciones de swaps de divisas y tipo de interés	196 628 836	193 464 504
c) Ingresos de cupones y obligaciones vencidos	5 456	12 681
Total	426 626 265	415 913 293

En observancia de sus compromisos, la CECA ha efectuado tradicionalmente el pago de los cupones incluso después de haber vencido.

24. Evolución de la situación financiera del ejercicio concluido a 31 de diciembre de 2000

	<i>(en millones de euros)</i>	
	2000	1999
Origen de los fondos		
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	1,8	1,2
Partidas que no implican movimientos de fondos		
— Amortización de gastos de emisión y prima de reembolso	2,0	2,2
— Correcciones de valor de valores mobiliarios (rectificaciones)	- 7,4	29,2
— Correcciones de valor de inmovilizaciones materiales	0,2	0,3
— Correcciones de valor en créditos, netas	0,7	15,7
— Disminución de la partida de provisión para compromisos jurídicos	- 121,6	- 139,5
— Incremento (disminución) de la partida de provisión para la financiación del presupuesto operativo de la CECA	8,5	- 41,3
— Incremento (disminución) de las cuentas de regularización del pasivo	- 4,5	- 9,4
— Disminución de las cuentas de regularización del activo y gastos de emisión o prima de reembolso	7,0	11,3
— Incremento (disminución) de la partida de otros pasivos	- 12,1	- 1,8
— Incremento de otras partidas del activo	7,4	41,3
— Dotación (rectificación) de la provisión para riesgos y gastos	2,9	- 9,4
— Dotación (rectificación) de la provisión para grandes riesgos	- 1,0	- 5,0
— Dotación (rectificación) de la provisión para variación del tipo del euro	- 0,7	16,9
— Ajuste del tipo de cambio en empréstitos y préstamos	- 12,6	20,8
— Dotación del fondo de garantía/reserva especial	12,0	23,0
Total de los fondos	- 117,4	- 44,5
Otros recursos		
— Rendimiento de empréstitos	—	—
— Reembolso de préstamos	425,4	463,5
— Cesiones de inmuebles	0,5	0,3
— Disminución de los activos bancarios y de la cartera de valores	94,8	91,8
Total de los recursos	403,3	511,1
Aplicación de los fondos		
— Pago/aumento crédito de préstamos	3,8	—
— Reembolso de empréstitos	399,5	511,1
Total de las aplicaciones	403,3	511,1

AYUDAS ESTATALES

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre la ayuda C 18/2001 (ex N 123/2000) — Tasa del cambio climático

(2001/C 185/03)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 28 de marzo de 2001, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó al Reino Unido su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con una parte de la ayuda medida antes citada.

La Comisión decidió no formular objeciones con respecto a otras medidas, descritas en la carta que sigue al presente resumen.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la medida respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta que figura a continuación, enviándolas a:

Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Dirección G-2
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Fax (32-2) 296 12 42.

Dichas observaciones serán comunicadas al Reino Unido. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

RESUMEN

1. Descripción de la medida/ayuda con respecto a la cual la Comisión incoa el procedimiento

Las autoridades británicas se proponen introducir a partir de 1 de abril del 2001 el «Climate Change Levy (CCL)» (impuesto sobre el cambio climático) que gravará el uso no doméstico de la energía que es, en general, el uso como combustible para calefacción, iluminación o para vehículos. El CCL es una consecuencia de la política del Gobierno sobre impuestos medioambientales y forma parte central del programa gubernamental sobre el cambio climático, que establece las propuestas del Gobierno para que el Reino Unido cumpla el objetivo jurídicamente vinculante de una reducción del 12,5 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (Protocolo de Kioto) para el período 2008-2012 y para acercarse al objetivo nacional del gobierno de una reducción del 20 % en las emisiones de dióxido de carbono antes del 2010.

El fundamento jurídico para el impuesto es la Ley de finanzas 2000, sección 30 y perspectivas 6 y 7.

Los hidrocarburos no serán afectados por el impuesto porque están ya sujetos al impuesto especial de conformidad con las Directivas 92/81/CEE y 92/82/CEE del Consejo ⁽¹⁾.

Se espera que los tipos impositivos en el ejercicio 2001-2002 sean:

Producto energético	Tipo (peniques por kilovatio/hora)
Electricidad	0,43
Gas	0,15
Carbón y otros combustibles sólidos	1,17 p/kg (equivalente a 0,15 p/kWh)
Gas de petróleo licuado	0,07

Se propone que los productos energéticos afectados estén exentos cuando la persona a quien se suministra el producto alegue que va a utilizarlo no como combustible. La noción de «combustible» no se define en la Ley de finanzas 2000. Sin embargo, según las autoridades del Reino Unido cubre en general el uso de productos energéticos para vehículos y calefacción. Se propone que cuando un producto energético se utilice en parte como combustible y en parte para otros usos («aplicaciones mixtas») quede exento por completo del impuesto.

Las autoridades británicas consideran esta disposición como una medida general y como parte de la lógica del sistema impositivo. Según el Reino Unido esta disposición de «doble uso» se aplica a la siderurgia, a la producción de aluminio, hierro, plomo, cobre, cinc, baterías y algunas sustancias químicas.

⁽¹⁾ DO L 316 de 31.10.1992, pp. 12 y 19, respectivamente.

2. Evaluación de la medida/ayuda:

a) Existencia de la ayuda en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE

La postura del Reino Unido es que la exención para el uso doble es una medida general que no constituye una ayuda estatal. Alega que el CCL es un impuesto aplicado al uso de productos energéticos utilizados como combustible y que la exención coincide con la Directiva 92/81/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la armonización de las estructuras del impuesto especial sobre hidrocarburos ⁽²⁾ («la Directiva sobre hidrocarburos») así como con la propuesta de Directiva del Consejo que reestructura el marco comunitario para los impuestos de los productos energéticos ⁽³⁾ («la propuesta»), siempre que sólo afecte al uso de productos energéticos para el desplazamiento de vehículos y para calefacción.

Según las autoridades británicas el propósito de la extensión de esta exención a las aplicaciones mixtas es garantizar con certeza y claridad al contribuyente, que es el proveedor de combustible, al respecto de si, sobre la base de los conocimientos científicos, todo uso de una mercancía por el cliente está exenta de impuestos. Las autoridades del Reino Unido no consideran que sea técnicamente posible repartir objetivamente con la suficiente exactitud las aplicaciones como combustible y como no combustible de los productos energéticos en ciertos procesos.

La Comisión considera que la exención da a las empresas beneficiarias una ventaja financiada mediante fondos estatales. Para evaluar si esta exención es una medida general, como las autoridades del Reino Unido afirman, o si constituye una ayuda estatal, la Comisión considera necesario evaluar si los efectos favorecerían a determinadas empresas o producciones. La Comisión observa que, según la información proporcionada por las autoridades del Reino Unido, la exención favorecerá a la producción de determinadas mercancías, tales como determinados metales (aluminio, hierro, plomo, cobre y coque), así como a las baterías y a algunas sustancias químicas. La Comisión por lo tanto tiene dudas de que la exención puede considerarse como una medida general.

La Comisión observa que debe evaluarse si la exención puede justificarse sobre la base de la naturaleza y la lógica del sistema impositivo. La Comisión toma nota de la afirmación hecha por las autoridades del Reino Unido en el sentido de que la aplicación del impuesto solamente a la energía utilizada para combustible es coherente con las disposiciones de la Directiva y con la propuesta de Directiva del Consejo por la que se reestructura el marco comunitario sobre la fiscalidad de los productos energéticos.

La Comisión observa que el CCL es un impuesto aplicable al uso no doméstico de la energía, que cubre en general el uso como combustible para calefacción, iluminación o para impulsar motores. El impuesto no se aplicará a los combustibles usados para otros propósitos distintos. Dicha definición del alcance del impuesto, que no se aplica a todos los usuarios, podría corresponder a la lógica del sistema establecido en la Directiva sobre hidrocarburos y en la propuesta de Directiva del Consejo por la que se reestructura el marco comunitario sobre la fiscalidad de los productos energéticos.

En primer lugar, la excepción puede no tratar de la misma manera situaciones comparables, en la medida en que algunos

procesos de doble uso están exentos de la tasa, mientras que otros, que también pueden considerarse de doble uso, no están exentos.

En segundo lugar, el Reino Unido establece una exención global de la tasa para los combustibles, incluso si sólo se utilizan parcialmente con fines no energéticos, según se ha definido anteriormente.

Sin embargo, la exención propuesta para el uso doble va más allá de la definición del alcance del impuesto.

1. La Comisión observa que, incluso si la propuesta de Directiva del Consejo relativa a la reestructuración del marco comunitario sobre impuestos de los productos energéticos aún no entró en vigor y no puede utilizarse completamente como referencia para establecer la lógica y naturaleza general del sistema impositivo, puede proporcionar ciertas directrices sobre si la disposición sobre doble uso puede considerarse como una medida general aunque el apartado 1 del artículo 13 se refiere a los combustibles utilizados principalmente para reducción química. La Comisión tiene dudas, sin embargo, de que la exención sea completamente coherente con la propuesta pues no se amplía a la energía utilizada en todos los procesos metalúrgicos, como se requeriría de conformidad con la letra a) del apartado 1 del artículo 13 de la propuesta. La Comisión observa que según las autoridades del Reino Unido un proceso metalúrgico es un proceso que conlleva la producción de metal, por ejemplo, de mena. La Comisión tiene dudas sobre si esta interpretación es coherente con la noción del proceso metalúrgico utilizada en la propuesta. Para ser coherente con la propuesta, la energía utilizada en todos los procesos metalúrgicos, a saber, en cualquier proceso de producción de metal, estaría exenta del impuesto.
2. La Comisión toma nota de la afirmación del Reino Unido de que no es posible calcular las proporciones de uso como combustible y como no combustible de los productos energéticos con exactitud, por razones de claridad y certeza, por lo que una exención completa del impuesto sería necesaria para las aplicaciones mixtas. La Comisión tiene dudas, sin embargo, de que las autoridades británicas no puedan establecer un mecanismo para calcular el porcentaje de ambas aplicaciones para determinados procesos y aplicar el impuesto en consecuencia.

La Comisión añade que si la parte de la energía en el uso doble estuviera completamente exento, el resultado podría no coincidir con el objetivo del impuesto de reducir el CO₂.

Por estas razones la Comisión tiene dudas de que la exención para los productos energéticos utilizados no como combustibles pueda ser considerada como una medida general y no como una ayuda estatal.

b) Compatibilidad de la ayuda

Asumiendo que la exención para el uso doble de los combustibles constituye una ayuda estatal, la Comisión tiene dudas sobre su compatibilidad con las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (DO C 37 de 3.2.2001, p. 3):

1. La disposición exige el consumo de energía para algunos procesos que provocan considerables emisiones de CO₂ y, por lo tanto, podría contradecir el objetivo del impuesto de reducir las emisiones de CO₂.

⁽²⁾ DO L 316 de 31.10.1992, p. 12.

⁽³⁾ DO C 139 de 6.5.1997, p. 14.

2. La exención no es temporal y no se concede con el fin de permitir a las empresas adaptarse al nuevo impuesto (punto 48 de las Directrices).
3. La exención no está supeditada a la celebración de acuerdos para alcanzar objetivos de protección del medio ambiente, ni el impuesto está sujeto a condiciones que tengan las mismas repercusiones que los acuerdos [punto 51.1 a) de las Directrices].
4. El Reino Unido no ha demostrado que las empresas que pueden acogerse a la exención deban sin embargo abonar una parte significativa del impuesto nacional [punto 51.1 b) de las Directrices].

CARTA

«The Commission wishes to inform the United Kingdom that, having examined the information supplied by your authorities on the measures referred to above, it has decided:

- not to raise objections on the tax exemptions from the climate change levy (CCL) for electricity from renewable sources, for CHP, for public transport and rail freight and on the tax reductions for companies entering into climate change agreements,
- to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty on the tax exemption for dual-use fuels.

PROCEDURE

By letter dated 14 February 2000, the UK authorities notified the 'climate change levy', following previous informal discussions on the subject in autumn 1999 and on 4 February 2000. The notification was discussed at a meeting on 8 March 2000 and additional information was subsequently submitted by letter of 26 April 2000 (registered A/33666, 3 May 2000). A second meeting was held on 4 May 2000, followed by additional information sent by letter of 14 July 2000 (registered A/36041, 19 July 2000) and of 8 September 2000 (registered A/31909, 14 September 2000). Further meetings were held on 20 October 2000 and 9 November 2000 (mainly on the agreements), and additional information was submitted by letter of 31 October (registered 6 November, A/39034), 14 November 2000 (registered on 17 November, A/39509) and by letter of 23 November (registered 27 November, A/39845). Preliminary sector targets were presented by the UK at a meeting on 1 December 2000. The letter by the Commission of 30 November was answered by letter of 13 December (A/40698, registered 18 December 2000). At a meeting on 14 December the exemption for double use fuels was discussed. Additional information on targets was sent on 15 January (registered A/30396, 16 January 2001). At a meeting on 29 January 2001 outstanding

questions on CHP and renewables were discussed. Additional information on dual-use fuels was sent on 1 February (A/30986, registered 2 February 2001). Additional information was sent on 7 February 2001, confirming several commitments made orally at meetings, giving additional information on double use fuels and modifying the scope of the exemption for electricity from renewable sources. Information on double use fuels was also sent on 1 and 9 February 2001 in the context of the examination of State aid N 197/2000.

Further clarification on the exemption for CHP was provided by e-mail on 14 February 2000 and confirmation of the facts was given by letter dated 21 February 2001 (registered on 22 February, A/31532). Detailed information on targets was last submitted on 5 March 2001. Additional information on CHP was provided on 7 March 2001.

CHARACTERISTICS OF THE CLIMATE CHANGE LEVY

The UK authorities intend to introduce from 1 April 2001 the climate change levy on the non-domestic use of energy, which is broadly the use as heating fuel, lighting or for motive power. The climate change levy package takes forward the government's policy on environmental taxation and is a central part of the government's climate change programme, which sets out the government's proposals for meeting the UK's legally binding target of a 12,5 % reduction in greenhouse gas emissions (Kyoto Protocol) averaged over 2008-2012 and for moving towards the government's domestic goal of a 20 % reduction in carbon dioxide emissions by 2010.

The levy is expected to raise GBP 1 billion in its first full year (2001/2002).

1. **Environmental impact of the CCL:** This new levy is introduced in order to help meet the UK's international greenhouse gas abatement obligations and to progress towards the domestic goal of reducing CO₂ emissions. This new environmental instrument is estimated to save around 5 M tonnes of carbon per year by 2010. Of this it is estimated that at least 2,5 M tonnes of carbon savings per year will be achieved through climate change levy agreements with energy-intensive sectors.

(estimates in MtC for the entire CC package)

Negotiated agreements		2,5
Levy package	Price effect of levy	1
	Renewables exemption	0,5
	CHP exemption	0,5
	Energy efficiency measures	0,5
Total		5

2. **The legal base** for the levy is the Finance Act 2000, Section 30 and Schedules 6 and 7, which received Royal Assent on 28 July 2000. The levy is scheduled to come into effect on 1 April 2001. If no Commission approval is given before 1 April 2001, the UK authorities have the option of amending their proposals in the Finance Bill before this.

3. Scope of the levy

The levy covers non-domestic use of primary and/or secondary fuel for lighting, heating, motive power and power for appliances by consumers in industry (including fuel industries), commerce, agriculture, public administration and other services.

The tax will be levied at the point of sale to the final consumer. In order to avoid double taxation the levy will not apply where a taxable commodity is used to produce another taxable commodity.

Mineral oils will not be brought within the scope of the tax because they are already subject to excise duty in accordance with Council Directives 92/81/EEC and 92/82/EEC ⁽⁴⁾.

The levy will apply also to imported commodities when used in the UK. It will not be applied to commodities which are intended to be burnt outside the UK.

4. The rates of the levy

The rates of levy in 2001-2002 are expected to be:

Energy product	Levy rate (pence per kilowatt hour)
Electricity	0,43
Gas	0,15
Coal and other solid fuels	1,17 p/kg (equivalent to 0,15 p/kWh)
Liquified petroleum gas	0,07

DESCRIPTION OF THE AID

The UK Government notified several exemptions or reduced rates from the tax, for a period of **10 years** ⁽⁵⁾. The duration of 10 years is meant to allow business to plan the necessary investments in energy savings and to gain legal certainty for their investment planning and actual decisions.

Subject of the notification in question are:

1. Exemption for electricity, gas and coal used in public transport and railfreight.
2. Exemption for input fuels and electricity generated by good quality CHP.
3. Exemption for electricity generated from some energy sources.
4. Reductions for facilities entering into climate change agreements.

The UK Government announced its intention of entering into climate change agreements with industry until 2013, that is a

period for tax benefits of 12 years. However, the UK Government seeks approval of the tax reduction linked to climate change agreements for an initial period of 10 years. Also the legal provisions for the other exemptions are by nature unlimited, but notified for a period of 10 years.

The UK authorities confirmed that although the entitlement to reductions and exemptions is contained in legislation, they will review their policy before the end of the 10-year approval and either renotify or amend the legislation and/or agreements as necessary so as to respect State aid obligations.

5. Exemption for dual-use fuels

The tax law exempts dual-use fuels from the levy. The UK authorities consider this exemption to be a general measure and in the nature of the tax scheme.

The levy exemption for dual-use fuels amounts to around 0,1 % of the turnover for each sector.

BUDGET OF THE SCHEME

Expenditure on the scheme is not expected to exceed GBP 420 million in the first year 2001/2002 against a net yield of GBP 1 billion of the levy. The cost and benefit is expected to fall in subsequent years as the impact of measures taken to meet the targets in the agreements are taken. The amount of revenue forgone will depend on future rates of levy; the success of the policy in encouraging more environmentally friendly forms of electricity generation; the scale of reduction in energy consumption by energy intensive users; and the development of rail transport.

The total costs for the exemption for public transport will be GBP 15 million, the exemption for railfreight will cost about GBP 1 million.

The exemption for CHP will cost GBP 40 million at current take-up. Part of this benefit will accrue to customers drawing electricity or heat directly from these plants.

The cost for exemption for renewable sources depends on the success of the policy in encouraging the development of new capacity. At current capacity an exemption will cost GBP 15 million.

The cost of the reduced rate for companies entering into climate change agreements has been calculated at GBP 350 million in the first full year.

1. Exemption for electricity, gas and coal used in public transport and railfreight

The UK Government is proposing to exempt energy used in public transport and rail freight from the CCL. Because diesel and petrol are not within the scope of the tax (being subject to excise duties) this means the main beneficiaries would be mainline railways, light railways, London Underground and rail freight companies using electricity.

⁽⁴⁾ OJ L 316, 31.10.1992, pp. 12 and 19.

⁽⁵⁾ The notification does not cover tax exemptions and reductions for Annex I products and for the ECSC sector, which will be dealt with as separate notifications (Annex I products: State aid N 9/2001 (intensive pig and poultry rearing) N 10/2001 (food, drinks and fisheries), N 44/2001 (horticulture), ECSC: State aid N 197/2000). An exemption for natural gas used in Northern Ireland was notified separately (State aid N 660/2000) and will also be subject of a separate decision.

In July 2000, the UK published its integrated transport White Paper 'A new deal for transport: better for everyone'. The plan aims to transform the UK transport system by helping reduce road congestion and pollution, providing better and more reliable public transport and significantly improving transport in London. Key targets of this plan are:

- to increase rail use by 50 %, measured in passenger kilometres, by 2010 from 2000 levels,
- to increase rail freight by 80 % by 2010, increasing its share of the freight market to 10 %,
- to double light rail use in England by 2010 from 2000 levels,
- to reduce road congestion on the inter-urban network and in large urban areas in England to below current levels by 2010,
- to cut journey times on London Underground services by increasing capacity and reducing delays.

Without the exemption for 10 years, the costs of the levy could be passed on to the government through the franchise renegotiations. This would create an additional support requirement that would consequently reduce the amount of support available for the new enhancements envisaged in the 10-year plan. Alternatively, the cost of the levy could be passed on to the customer in the form of higher fares/charges; this would also run counter to the objectives of the 10-year plan.

Meeting the targets in the plan will require increased investment in infrastructure and rolling stock which may be jeopardised if rail operators have to meet the costs of the CCL. It is estimated that these could add approximately GBP 15 million a year to rail operators' costs.

Securing the exemption from the climate change levy for 10 years will provide the certainty needed by industry to make the necessary investment to meet the plan targets, and is consistent with the introduction of the 10-year plan as a long-term strategy.

In addition, the exemption of rail freight from the levy would be consistent with the Commission's proposal, adopted on 26 July, regarding regulation concerning the granting of aid for the coordination of transport by rail, road and inland waterways. This proposes a comprehensive exception for State aid in the freight sector benefiting users of rail, inland waterways and combined transport infrastructure on the grounds — in the interests of sustainable mobility and to overcome existing distortions between modes — that it compensates them for the unpaid external costs (environmental, congestion, etc.) of road transport.

Of course, the levy exemption would be just one of many policies put in place to help achieve the targets in the 10-year plan. Other measures include a substantial increase in investment, both private and public, with an emphasis on promoting private and public partnerships. Total private and public investment in transport over the next 10 years will be

GBP 180 billion. A number of multi-modal studies will be undertaken, which aim to identify solutions to problems on key transport corridors by looking at the contribution that all modes of transport might make, moving away from a one-dimensional approach. On railways, the Strategic Rail Authority (SRA) will take the targets in the 10-year plan into account when considering replacement of the current train operator franchises.

The plan sets out the government's commitment to monitor and evaluate progress towards the targets, including those mentioned above. The UK will be reporting regularly on the results, together with other key indicators.

The UK will be monitoring closely how this package of policies is contributing to the expansion of rail travel as an alternative to road travel, and its role in promoting more sustainable transport practices.

2. Exemption for outputs of good quality combined heat and power plants (CHP)

CHP makes significant fuel and emissions savings over conventional, separate forms of power generation and heat-only boilers. The generation and supply of electricity from power stations is generally at an efficiency in the range 25-50 %, based on the gross calorific value (GCV) of the fuel and including transmission and distribution losses. This means that 50-75 % of the energy content of the fuel is not usefully employed. This unutilised energy content is rejected as heat directly to the atmosphere or into seas or rivers. The generation of electricity and the recovery of heat in CHP schemes typically achieve overall efficiencies of 60-80 % and sometimes more.

Unlike conventional methods of electricity generation, some of the heat cogenerated in a CHP scheme is used typically in industrial processes or for heating and hot water in buildings. The heat used in this way displaces heat that would otherwise have to be supplied by burning additional fuel and so leads directly to a reduction in emissions. The development of CHP provides a particularly environmentally-effective approach for reducing CO₂ emissions.

The UK Government has a target of increasing the installed capacity of CHP from its current level of 4,5 GW to at least 10 GW by 2010. This will lead to additional reductions in carbon dioxide emissions of about 4 million tonnes per annum.

However, in the absence of any incentives to promote the development of CHP, it is estimated that CHP capacity will only increase to 7 GW or possibly less by 2010.

The economic viability of CHP is critically dependent on the differential between electricity and gas prices. Over the last five years, electricity prices have fallen by 3 % in real terms, while gas prices have increased by 30 %. These factors together have resulted in an extremely adverse effect on CHP economics. Without any exemption for CHP, the climate change levy (CCL) will exacerbate this problem, as it will increase gas prices proportionately more than electricity prices.

It is important to recognise that the cost-effectiveness of CHP is marginal in many instances. The proposed CHP exemption will help to tip the balance in favour of investment of CHP in many of these cases. The exemption will address market imperfections and help to counteract the effect of the trend in energy prices over recent years, which has reduced the cost-effectiveness of many CHP schemes. These issues apply just as much in the business sector as within any other sector of the economy.

The government has therefore proposed that good quality CHP should be exempt from the climate change levy. The definition of good quality CHP ⁽⁶⁾ is based on threshold criteria, which must be met or exceeded in order for the whole of the scheme to qualify as 'good quality'.

The CHPQA programme provides for a rigorous assessment of the energy efficiency and environmental performance of CHP schemes. It is much more rigorous in this respect than simply assessing the overall efficiency of a CHP scheme. In particular, the weighting given to the efficiency of power generation in the assessment procedures recognises the environmental benefits of using CHP rather than conventional energy generation technologies. In comparison, a conventional boiler system with a small amount of electrical power generation could achieve relatively high 'headline' energy conversion efficiencies, but offers much reduced environmental benefit compared to good quality CHP.

Threshold criteria are set for quality index and power efficiency.

Power efficiency (η_{power}) is the proportion of input energy which is converted to electrical or mechanical power (total annual power output divided by the total annual fuel input).

The quality index (QI) is a measure of the overall efficiency of a CHP scheme, taking account of the efficiency of production of both heat and power. In the definition of the quality index, the quantity of power produced is weighted relative to the quantity of heat, given the greater energy and environmental cost involved in generating power.

The general definition for $QI = (X \times \eta_{\text{power}}) + (Y \times \eta_{\text{heat}})$ ⁽⁷⁾

Quality index (QI) definitions for various sizes and types of CHP schemes:

Size of scheme	QI definition
$\leq 1 \text{ MW}_e$	$QI = 230 \times \eta_{\text{power}} + 125 \times \eta_{\text{heat}}$
$> 1 \text{ to } \leq 10 \text{ MW}_e$	$QI = 220 \times \eta_{\text{power}} + 125 \times \eta_{\text{heat}}$
$> 10 \text{ to } \leq 25 \text{ MW}_e$	$QI = 205 \times \eta_{\text{power}} + 125 \times \eta_{\text{heat}}$
$> 25 \text{ to } \leq 50 \text{ MW}_e$	$QI = 190 \times \eta_{\text{power}} + 125 \times \eta_{\text{heat}}$
$> 50 \text{ to } \leq 100 \text{ MW}_e$	$QI = 185 \times \eta_{\text{power}} + 125 \times \eta_{\text{heat}}$
$> 100 \text{ to } \leq 200 \text{ MW}_e$	$QI = 180 \times \eta_{\text{power}} + 125 \times \eta_{\text{heat}}$
$> 200 \text{ to } \leq 500 \text{ MW}_e$	$QI = 170 \times \eta_{\text{power}} + 125 \times \eta_{\text{heat}}$
$> 500 \text{ MW}_e$	$QI = 160 \times \eta_{\text{power}} + 125 \times \eta_{\text{heat}}$

⁽⁶⁾ Established by the UK's CHP quality assurance programme (CHPQA).

⁽⁷⁾ X is a coefficient related to alternative power supply options. Similarly Y is a coefficient for heat generation, related to alternative heat supply options. The values for X and Y vary for different sizes and types of scheme.

Special cases	QI definition
Fuel cell schemes	$QI = 180 \times \eta_{\text{power}} + 125 \times \eta_{\text{heat}}$
Reciprocating engine schemes (including those in combined cycle applications) $\leq 25 \text{ MW}_e$	$QI = 200 \times \eta_{\text{power}} + 125 \times \eta_{\text{heat}}$
Transitional arrangements for existing steam turbine and reciprocating steam engine schemes to April 2005	$QI = 240 \times \eta_{\text{power}} + 125 \times \eta_{\text{heat}}$
Alternative fuel schemes	
Alternative fuel gases	$QI = 240 \times \eta_{\text{power}} + 125 \times \eta_{\text{heat}}$
Biogas, waste gas or waste heat	$QI = 300 \times \eta_{\text{power}} + 140 \times \eta_{\text{heat}}$
Biomass or solid or liquid waste	$QI = 400 \times \eta_{\text{power}} + 140 \times \eta_{\text{heat}}$

Threshold criteria for good quality CHP

For fuel inputs under annual and initial operation:

Normally, a scheme that qualifies as good quality CHP for its entire energy inputs is one where the power efficiency equals or exceeds 20 %.

For power outputs under annual operation:

A scheme that qualifies as good quality CHP for its entire annual energy output is one where the quality index equals or exceeds 100.

For power outputs under initial operation:

A scheme that qualifies as good quality CHP for its entire annual energy output is one where the quality index equals or exceeds 95.

For power generation capacity under annual operation:

The threshold criterion for existing good quality CHP capacity is that the CHP scheme achieves a QI of at least 100 at its maximum heat output under normal operating conditions.

For proposed new power generation capacity, threshold criteria for proposed new good quality CHP scheme capacity, at design, specification, tendering and approval stages, are:

either $QI \geq 105$ and power efficiency $\geq 20 \%$, both under annual operation,

or $QI \geq 110$ at max heat and power efficiency $\geq 35 \%$ under annual operation.

The QI definitions shall be subject to periodic review to ensure that the values of X and Y remain applicable and appropriate for each size and type of CHP scheme, that certified good quality CHP will continue to provide significant environmental benefits compared with conventional energy supply alternatives and that the QI definitions provide a challenging threshold for all CHP schemes and promote continuous improvement of CHP plant.

Simplified arrangements will operate for small-scale CHPs (less than 2 MWe) as regards metering, monitoring and reporting.

The extent of the exemption on fuel input and energy output depends on the proportion of good quality CHP

A scheme meeting or exceeding the threshold quality index and power efficiency criteria will qualify as good quality CHP for its entire capacity, annual energy inputs and annual energy outputs.

A CHP scheme that does not meet the threshold criteria for good quality CHP will not be eligible for CCL exemption on its entire fuel input or power output, but only for a part of it, corresponding to good quality portion of the overall CHP scheme ⁽⁸⁾.

Regular monitoring

It is a requirement of CHPQA that CHP schemes are assessed against the standard each year to ensure continued performance in relation to the good quality CHP threshold criteria. If there is a change in the level of performance, eligibility for exemption from the climate change levy shall be adjusted appropriately.

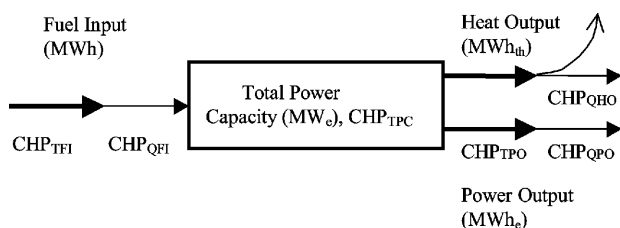
3. Exemption for electricity generated from some energy sources

The government proposes to exempt from the levy electricity sold by electricity suppliers which can be matched with

⁽⁸⁾ For such schemes, if the power efficiency is less than the threshold power efficiency criterion, the qualifying fuel input must be calculated. The qualifying fuel input (CHP_{QFI}) is the portion of total fuel input that would achieve the threshold power efficiency, given actual annual average power output. In this way, the fuel input to the good quality CHP power output is recognised and the threshold criterion does not represent a 'cliff-edge'.

If the quality index is less than the threshold quality index criterion, the qualifying power output (CHP_{QPO}) must be calculated. The qualifying power output is the portion of total power output that would achieve the threshold quality index, given actual annual average heat utilisation. In this way, the good quality CHP power output is identified and recognised whilst any additional power output is regarded as conventional power generation.

It is the qualifying fuel input and qualifying power output, as the fuel input and power output meeting the threshold criteria, that are used to determine CCL exemption for schemes that do not meet the threshold criteria for their total fuel inputs and outputs. In this way, benefits are only ever given to the good quality portion of any overall CHP scheme.



CHP scheme

purchases from an eligible generator. The technologies eligible for exemption will be: wind energy, hydro power up to 10 MW, tidal power, wave energy, photovoltaics, photoconversion, geothermal hot dry rock, geothermal aquifers, the biodegradable fraction of municipal and industrial wastes, landfill gas, agriculture and forestry wastes, energy crops and sewage gas.

Suppliers will be able to exempt sales of electricity from the levy if the supplier has contracted with a generator or generators of eligible electricity from the defined sources to purchase such electricity; the supplier agrees to independent audit by the authorities; and the generator(s) agree to the same conditions.

This exemption is also applicable to imported electricity from the same energy sources.

4. Reductions for facilities entering into climate change agreements

The government also recognises the need for special consideration to be given to the position of energy intensive industries given their energy usage, the requirements of the integrated pollution prevention and control regime and their exposure to international competition. Consequently, the government will provide an **80 % discount from the levy** for those sectors that can agree targets for improving their energy efficiency or reducing carbon emissions ('agreements').

Beneficiaries: The government defines an 'energy intensive' sector as one which operates processes which will be covered by Annex I of Council Directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and control ⁽⁹⁾. This criterion applies throughout the UK and has been chosen because sites operating such processes will be subject to a legal requirement to use energy efficiently — other sites are not subject to this requirement. Small sites which fall below IPPC size thresholds (with the exception of thresholds relating to combustion plant), but which would otherwise be covered by the proposed regulations, will also be eligible for the relevant sector agreement.

Duration: The agreements cover a period of 12 years (2001-2013). The UK Government seeks Commission approval for a period of 10 years and confirmed that it would terminate the agreements with sectors after 10 years if no Commission decision allows their prolongation (commitment see above).

⁽⁹⁾ These sites and installations will, in due course, be subject to a regulatory requirement, in terms of having to operate in an energy efficient manner. The activities in question include activities of energy industries, production and processing of metals, mineral industry, chemical industry, waste management and some other activities.

Form of agreements: Two options are envisaged for these agreements

1. Sector level agreements ('umbrella agreements') between the industrial sector associations⁽¹⁰⁾ and the relevant Secretary of State under which sector targets would be set. Individual entities participating in the scheme would additionally agree individual targets and would enter into separate agreements with the Secretary of State ('participation agreements'). The reduction in levy would be available either if the sector as a whole met its target or, failing that, if an individual entity met its target (in which case, only that individual entity would qualify for a levy reduction).

Most eligible sectors and participants are choosing to use these forms of agreements.

2. In this option, the sector level agreement is also between the government and the sector association. But the participant level agreement is between the sector association and each participant in respect of their facility or facilities. The UK Government has to agree the model agreement used by the sector and will also approve each individual agreement before they will be permitted to come into effect.

The levy is only payable by those operators carrying out economic activity in the UK. All of those are equally eligible to enter climate change agreements, no matter what their origin. Any business setting up a new establishment in the UK will be eligible to enter an agreement on equivalent terms to those agreed with their sector in existing agreements. Provided an equivalent target can be agreed for qualifying activities, DETR will include the establishment within the relevant sector agreement and the establishment will become eligible for the 80 % discount.

Targets: The targets consist of quantitative energy use and carbon emissions reductions outcomes, defined in absolute terms or per unit output. Milestone targets are set for two-year periods.

Targets are reviewed twice, in 2004 and 2008 in order to ensure that they continue to represent the potential for cost effective energy savings taking into account any changes in technical or market circumstances.

The UK Government will make sector targets transparent by reporting to the UK Parliament, and as appropriate, to the devolved legislatures.

Tolerance bands allow small overshoots of the milestone target to be accepted for those participants who otherwise demonstrated satisfactory performance in view of additional qualitative criteria (such as good environmental management). The tolerance band facility will not be available after the third milestone.

Over the period envisaged for the agreements participants will wish to be free to choose whether to respond to market demand for new products or a different mix of products from that on which their original energy/CO₂ savings targets were based. This may lead to an increase or decrease of energy per unit of production. The scheme foresees an adjustment procedure in order to adapt the targets to a change in the

product mix until 2006. A potential extension of this possibility will depend on the successful introduction of a carbon emission trading scheme. Participants with absolute targets would not be permitted to use this procedure. The product mix approach is not available for those participants who choose a tolerance band approach.

If the beneficiary is unable to meet a milestone target due to a relevant constraint or requirement, progress made towards meeting the targets is taken as being satisfactory. These constraints or requirements are:

- constraint or requirements imposed by or under town and country planning, environmental, health and safety or food hygiene legislation,
- certain constraints or requirements imposed on the construction or operation of a CHP plant under the Energy Act 1976 or Electricity Act 1989,
- unforeseen major disruptions to a dedicated energy supply of more than 240 consecutive hours.

The scheme foresees the possibility to meet agreed targets by carbon emission trading among entities committed to a climate change agreement. Emission trading should later on be possible also with participants in a wider emission trading scheme subject to approval of such a linkage by the Commission. Details of such a scheme are not yet available. The UK authorities undertake that unless the Commission agrees otherwise, carbon trading will only be allowed between participants in climate change agreements, and then only where the selling party has verified surplus carbon to sell. This restriction is contained in the climate change agreements.

Recuperation: A beneficiary who does not meet a milestone target will lose the levy reduction for the next two years. If he then meets the next milestone target, he will be allowed the levy reduction for the following two years.

While the mechanism of such a 'forward penalty' is different from a clawback provision for levy rebates received over the past years, the UK Government claims that the risk of losing the levy reduction for the future is a stronger incentive for beneficiaries to meet their targets than a proportionate clawback mechanism would provide⁽¹¹⁾.

⁽¹¹⁾ An example for a beneficiary not meeting the target in year 2 and is back on target thereafter:

	Year 2	Year 4
Energy target agreed	900	800
Energy use	925	800
Levy to be paid:		
Forward penalty	$100 \times 20 \% = 20$	$90 \times 100 \% = 90$
Proportionate clawback	$100 \times 20 \% = 20$	Clawback $\frac{1}{4}$ of 80 previous rebate = 20 + $90 \times 20 \% = 18$ = 38

⁽¹⁰⁾ Or an organisation especially set up by the sector association for this purpose.

For the last milestone target, for which the prospective loss of levy reduction may not create a sufficient incentive, the UK authorities undertook that they will introduce a provision to recover levy reduction granted to participants for the last two years of a 10-year State aid approval in proportion to the extent, if any, to which their last milestone targets were not met. The UK authorities consider it probable that this provision will require a change to the legislation, which will be brought forward at the appropriate time. As yet the framework for recovery has not been settled, but will be considered in the prevailing circumstances.

Level of the targets: When negotiating the targets with the sectors concerned, the principal benchmark used by the UK authorities to assess whether these targets are demanding is the UK's study of the potential for savings achievable

through the implementation of all energy saving measures which are cost effective ⁽¹²⁾.

During the negotiations, several assumptions of the study were corrected or refined. Agreements are being finalised with most of the sectors concerned. While all negotiations are not yet finalised, the UK authorities informed the Commission on the likely outcome of the negotiations. The UK informed the Commission that they do not intend to weaken the targets in the final phase of the negotiations, but may on the contrary even enforce them for some sectors. The latest estimates being reviewed with the sector associations are:

⁽¹²⁾ The study has been published as 'Industrial sector CO₂ emissions: projections and indicators for the UK 1990-2020, April 1999 (EPSC 20616001/Z/1)'. The assessment of the potential savings, sector by sector, has assumed unlimited availability of capital and management time and therefore is an upper potential limit with known technologies.

First wave climate change levy: Target as agreed and carbon savings as estimated by sector associations (as of 5 March 2001)

Sector association	Type of target relative/absolute carbon/energy	Base year	Target (change from base year to 2010)	Additional carbon savings (in 1 000 t above BAU between 2000 and 2010)	Status of agreements
Non-Ferrous Alliance	Relative energy	1990	- 22,0 %	50	Agreed
Chemical Industries Association	Relative energy	1990	- 34,0 %	790	Agreed
Aluminium Federation	Relative carbon equivalent	1990	- 32,1 %	150	Agreed
Food and Drink Federation ⁽¹³⁾	Relative energy	1995	- 13,8 %	420 (including estimate for CHP)	Agreed
Paper Federation of Great Britain	Relative energy	1990	- 40,0 %	430	Agreed
British Cement Association	Relative energy	1990	- 25,6 %	170	Agreed
British Glass Manufacturers Association	Relative energy	1999	- 9,2 %	20	Agreed
British Ceramics Confederation	Relative energy	2000	Pottery - 12,4 % Heavy clay - 10,22 % Fletton bricks - 8,1 % Refractories - 10,33 % Cer. materials - 10,1 %	44	Agreed
Foundries: target 2010	Relative energy	2000	- 11,0 %	20	Agreed

⁽¹³⁾ Partly Annex I products.

Second wave climate change levy: Carbon savings estimated by sector associations (as of 5 March 2001)

Sector association	Type of target relative/absolute carbon/energy	Base year	Target (change from base year to 2010)	Carbon savings (1 000 t) from target	Status of agreements
British Rubber Manufacturers Association	Relative energy	1999	– 10,0 %	23,0	Provisionally agreed
Slag Grinders Association	Relative energy	1999	– 10,0 %	2,0	Agreed
Gypsum Products Development Association	Relative energy	2000	– 7,16 %	7,2	Agreed
British Lime Association	Relative energy	1998	– 7,9 %	6,0	Agreed
Wallcovering Manufacturing Association of GB Ltd	Relative energy	1999	– 9,0 %	2,0	Agreed
Brewers and Licensed Retailers Association	Relative energy	1999	– 11,6 %	16,0	Agreed
Maltsters Association of Great Britain	Relative energy	1999	– 7,8 %	5,0	Agreed
National Association of Master Bakers	Relative energy	1999	Scratch bakeries – 9 % Bake-off facilities – 4,5 %	2,0	Provisionally agreed
Scotch Whisky Association Gin and Vodka Association	Relative energy	1999	– 4,5 %	6,5	Agreed
UK Agricultural Supply Trade Association	Relative energy	1999	– 7,1 %	7,9	Agreed
UK Renderers Association	Relative energy	1999	– 9,0 %	4,5	Agreed
British Apparel & Textile Confederation	Relative energy	1999	– 9,0 %	Finalising data	
British Leather Confederation	Relative energy	1999	– 9,68 %	0,6	Agreed
Confederation of British Metalforming	Relative energy	2000	– 7,0 %	Finalising data	
Eurisol	Relative energy	1999	– 14,9 %	6,7	Agreed
Metal Packaging Manufacturers Association	Relative carbon	1999	– 9,0 %	2,5	Agreed
National Microelectronics Institute (Semiconductors)	Relative energy	2000	– 59,0 %	220,0	Agreed
National Microelectronics Institute (CRTs)	Relative energy	2000	– 21,0 %	7,4	Agreed
Society of British Aerospace Companies	Absolute energy	2000	– 8,5 %	0,5	Agreed
Society of Motor Manufacturers and Traders	Relative energy	1995	– 15,3 %	19,2	Agreed
Surface Engineering Association	Relative energy	1999	– 12,01 %	2,5	Agreed
Vehicle Builders and Repairers Association	Relative energy	2000	– 10,0 %	Finalising data	
British Printing Industry Federation	Relative energy	2000	– 12,0 %	4,2	Agreed
Wood Panel Industries Federation	Relative energy	1999	– 7,34 %	1,9	Agreed
Boat Builders	—	—	—	Late entrant	
Supermarkets					
Environmental Service Association (incineration)	—	—	—	Late entrant	

The UK authorities will send final versions of the agreements to the European Commission.

The UK authorities assume that the cost of meeting the milestone targets will be around GBP 2 500 million over the period 2000-2010. The diversity of investment cycle across the various industries means that there is no reason to assume that averaged over the sectors investment will be anything other than linear over the 10-year period. Therefore, averaged over the lifetime of the agreements the annual costs of investment will be GBP 250 million.

Companies will not be allowed to receive aid under this scheme and also other aid for the investments necessary to fulfil the agreements. They can however benefit from enhanced capital allowances for energy efficient investment, a measure which does not constitute State aid under Article 87(1) of the EC Treaty ⁽¹⁴⁾.

The UK authorities undertook to provide the Commission with progress reports after each two-year review.

5. Exemption for dual-use fuels

It is proposed that energy products falling within the scope of the levy will be exempt from it where the person to whom the product is supplied intends it to be used for other purposes than as fuel. The notion of 'fuel' is not defined in the Finance Act 2000. However, according to the United Kingdom authorities it broadly covers use of energy products for motor and heating purposes. It is proposed that where an energy product is used for partly fuel and partly non-fuel purposes ('mixed uses') it will be fully exempt from the levy.

The United Kingdom authorities consider this provision as a general measure, and as part of the logic of the tax system. According to the United Kingdom, this 'dual-use' provision applies to the steel sector, to the production of aluminium, iron, lead, copper, zinc, batteries and some chemicals.

ASSESSMENT

I. EXISTENCE OF AID

1. Exemption for transport

Article 87(1) of the Treaty provides that any aid granted by a Member State or through State resources in any form whatsoever, which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects trade between Member States, be incompatible with the common market.

State aid, within the meaning of Article 87(1) of the Treaty also covers measures that, in various forms, mitigate the charges which are normally included in the budget of an undertaking and which have the same effect as cash grant subsidies. Consequently, a system under which the public authorities

grant to certain undertakings a tax exemption that relieves them of some of their costs and confers on them financial advantages which improve their competitive position constitutes State aid within the meaning of Article 87(1) of the Treaty if the aid is capable of affecting trade between Member States and distorting competition.

As described above, the UK Government will offer an exemption from the climate change levy for electricity, coal and gas used in public transport and railfreight. Since mineral oils and gases used by road vehicles are not within the scope of the levy, the benefit deriving from the tax exemption will accrue to railways and light railways using electricity, such as the London Underground and the Manchester Metro.

The exemption from the levy for rail freight will relieve the beneficiaries from costs they should normally bear due to the new tax and hence confers on them a financial advantage, which improves/safeguards their competitive position vis-à-vis other modes of transport and other operators. It thus distorts or threatens to distort competition. The advantage involves State resources as, through the exemption, the State suffers a loss of tax revenue. Road haulage operations, including cabotage, are completely liberalised within the European union and the measure therefore affects trade between Member States. Accordingly, the exemption constitutes aid within the meaning of Article 87(1) of the Treaty.

Also with regard to public transport, the tax exemption confers upon the beneficiaries a financial advantage that improves their competitive situation compared with their main competitors, e.g. undertakings providing public transport by road. The tax exemption thus favours certain undertakings and distorts or threatens to distort competition within the meaning of Article 87(1) of the Treaty.

Access to the international passenger transport market and the right to provide passenger transport cabotage has been liberalised through Community legislation ⁽¹⁵⁾. With regard to cabotage rights, the legislation has opened up the market to competition in respect of special regular services and of national regular services, which are provided in the course of an international regular service. The Commission recalls that urban and suburban transport services are not covered by this right to provide passenger cabotage. However, both the Community's public procurement rules and, in particular, national legislation in most Member States enhance an EU-wide market access in this respect. The Commission notes that public transport contracts in many cases takes the form of a concession contract between a transport operator and a public authority and that the detailed procedural rules

⁽¹⁴⁾ Notified N 797/2000, Commission decision on 13 February 2001.

⁽¹⁵⁾ Council Regulation (EEC) No 684/92 on common rules for the international carriage of passengers by coach and bus and Council Regulation (EC) No 12/98 laying down conditions under which non-resident carriers may operate national road passenger transport within a Member State.

contained in the public procurement directives impose only limited obligations in relation to works concessions and do not apply in the case of service concessions ⁽¹⁶⁾. However, although a service concession is not directly covered by the detailed rules on public procurement and work concessions are subject to only limited obligations, public entities concluding such contracts are bound to comply with the fundamental rules of the Treaty, in particular the principle of non-discrimination on the ground of nationality ⁽¹⁷⁾. In some cases public transport contracts may amount to public service contracts which are subject to the detailed procedural requirements of Directive 92/50/EEC on the award of public service contracts. However, where such contracts are for the provision of 'non-priority' services listed in Annex 1B of that Directive, the public authority is subject to only limited obligations in relation to the award of such contracts. The Commission however, notes that a number of Member States, of which the UK is one, have introduced EU-wide open, transparent and non-discriminatory procedures for public transport services ⁽¹⁸⁾. Furthermore, statistical data show that where the markets have been accordingly opened, international operators have stepped in alongside national ones. By early 2000 at least nine companies, from the public and private sectors, were acting as public transport operators in more than one Member State ⁽¹⁹⁾.

Given the fact that transport undertakings in the passenger field show an increasing interest in entering domestic public transport markets, the Commission cannot exclude that the UK tax exemption for public transport is liable to affect trade between Member States. Accordingly, the Commission considers that the exemption for public transport from the climate change levy constitutes an aid within the meaning of Article 87(1) of the Treaty.

2. Exemption for CHP

The benefits and beneficiaries of the exemption are assessed by comparing (1) the treatment of a good quality CHP system, respectively the qualifying portions of it, with the electricity production from conventional sources, and (2) by comparing heat or steam production in good quality CHP with conventional heat or steam production.

⁽¹⁶⁾ See Commission's interpretative communication on concessions under Community law (OJ C 121, 29.4.2000).

⁽¹⁷⁾ European Court of Justice judgment of 7 December 2000, C 324/98 (TeleAustria).

⁽¹⁸⁾ Today 11 Member States have introduced legislation or administrative arrangements that provide for competition in at least part of the bus, coach or urban rail markets. See the Commission's proposal for a regulation on action by Member States concerning public service requirements and the award of public service contracts in passenger transport by rail, road and inland waterway, COM(2000) 7 final.

⁽¹⁹⁾ 2000 data from the International Union of Public Transport (UITP). 1998 data from 'Major European players in public transport — new developments in the European Union, 1997', UITP-EuroTeam, 1998.

(1) Comparison of electricity production good quality CHP — conventional power station

Conventional electricity generator:

Fuel input not taxed	Conventional power generator	
	Output taxed if used on-site or sold to a known end-user	Output sold to grid, consumer pays levy on electricity

Good quality CHP:

Fuel input not taxed	CHP system	
	Output not taxed if used on-site or sold to a known end-user	Output sold to grid, consumer pays levy on electricity

Operators of good quality CHP systems do not pay levy on the input fuel. This is in line with the general rule of the tax law, which does not tax the input fuel for electricity production in order to avoid double taxation.

I. Operators of good quality CHP systems do not pay levy on the electricity they produce from a good quality CHP for their own use.

II. Known end-users do not pay levy on electricity they purchase from a good quality CHP for their own use.

This gives operators of good quality CHP systems an advantage compared with conventional power generators who pay a levy on electricity used on site and gives known end-users an advantage compared with end-users who buy electricity from the grid for their own use. This relieves them of charges that are normally borne from their budgets and gives the recipient firms an advantage over other firms. The advantage is granted through state resources as the State suffers a loss of tax revenues. The recipients exercise an economic activity on markets on which there is or could be trade between Member States or on which firms from other Member States might wish to establish themselves. The scheme thereby distorts or threatens to distort competition and could affect trade between Member States.

The Commission assessed in particular if the exemption (a) is aid to certain undertakings, or (b) is aid to the production of certain goods.

I. Operators of good quality CHP systems

(a) *Does the exemption constitute aid to certain undertakings?*

The exemption is applied in all UK, granting automatic rights if objective quality criteria are fulfilled. The exemption for good quality CHP applies to all autogenerator CHP systems, independent of their type or size.

CHP is a technology to increase energy efficiency in the context of a wide variety of economic activities. It is strongly used in the manufacturing sectors, there in so different subsectors as refineries, chemical industry, paper and printing; food products, beverages and tobacco; metal products, machinery, equipment; mining and agglomeration of solid fuels; extraction of crude oil and natural gas; coke ovens; extraction and processing of nuclear fuels; iron and steel industry; non-ferrous metals; non-metallic mineral products extraction; textile, clothing and leather. It is also used in other industrial branches, in transport, in the service sector and for public supply (district heating).

While use in the service sector is by far not as developed as in manufacturing, CHP is also there increasingly used, e.g. for hotel (spa) facilities, and in the health sector. The exemption is even meant to have the effect to spread the use of CHP also in those sectors, where it is currently not that widely used, but which would have the potential to use it.

The application of CHP across different economic sectors

Output of CHP potential model from 1999 — capacity and sites

	Capacity		Sites	
	(MWe)	%	No	%
Chemicals	3 548	24,8 %	448	3,0 %
Food	1 834	12,8 %	742	4,9 %
Paper	1 349	9,4 %	107	0,7 %
Textiles	359	2,5 %	709	4,7 %
Other industry	466	3,3 %	634	4,2 %
Engineering	4 224	29,6 %	1 226	8,1 %
Warehouses	324	2,3 %	1 150	7,6 %
Retail	355	2,5 %	3 249	21,4 %
Public buildings	128	0,9 %	526	3,5 %
Offices	478	3,3 %	2 801	18,5 %
Hotels	119	0,8 %	659	4,3 %
District	291	2,0 %	400	2,6 %
Health	756	5,3 %	2 468	16,3 %
Education	54	0,4 %	50	0,3 %
	14 285	100 %	15 168	100 %

The following table shows the distribution of CHP systems in the UK in 1999 and the distribution of applications for good quality CHP certification:

	1999 UK CHP statistics				6 March 2001 CHPQA applications			
	Capacity		Sites		Capacity		Sites	
	MWe	%	No	%	MWe	%	No	%
Chemicals	1,180	28 %	52	4 %	1,301	38 %	38	6 %
Food	392	9 %	44	3 %	382	11 %	35	5 %
Paper	471	11 %	31	2 %	537	16 %	31	5 %
Textiles	2	0 %	3	0 %	—	0 %	0	0 %
Other industry	1,583	37 %	215	16 %	916	27 %	68	10 %
Engineering	302	7 %	16	1 %	71	2 %	3	0 %
Warehouses	—	0 %	0	0 %	—	0 %	0	0 %
Retail	6	0 %	6	0 %	14	0 %	1	0 %
Public buildings	68	2 %	350	27 %	31	1 %	181	27 %
Offices	16	0 %	40	3 %	66	2 %	23	3 %
Hotels	28	1 %	260	20 %	19	1 %	144	22 %
District heating	68	2 %	47	4 %	26	1 %	17	3 %
Health	99	2 %	204	16 %	64	2 %	111	17 %
Education	24	1 %	45	3 %	24	1 %	17	3 %
	4,239	100 %	1 313	100 %	3,451	100 %	669	100 %

The UK informed the Commission that the range of CHP applications is continuing to increase as new technology is commercialised. The electrical capacity of CHP schemes currently available ranges from 15 kWe to over 200 MWe, sized to meet the energy requirements of a very wide range of organisations. Schemes over 1 MWe are mainly found on larger industry sites, large commercial buildings, hospitals and district heating schemes, etc. These schemes are normally custom built, tailored to the energy needs of the host(s).

Schemes under 1 MWe are found in smaller industrial sites, commercial and public buildings, hotels, leisure centres, blocks

of flats and residential homes etc. These schemes are manufactured as a package with standard equipment and control systems installed within an enclosure. Standard packaged units are available in the following electrical outputs: 15, 30, 38, 54, 60, 75, 95, 110, 145, 185, 206, 220, 300, 400, 600 and 800 kWe. There are 34 CHP schemes below 1 MWe on smaller industrial sites, with an average capacity 400 kWe.

There is no minimum size for CHP systems in order to be eligible as good quality CHP and the development of the use of small-scale CHP shows that the exemption will also be of interest for SMEs.

Thus all companies throughout a wide range of sectors of the economy are beneficiaries, independent of their size, location or economic activity. The criteria for defining 'good quality' CHP are objective and not designed in a way that would limit the benefit of the exemption to specific sectors. The majority of existing CHP systems already fulfil the standard. Stations not yet fulfilling the standard can upgrade to fulfil the criteria at least for a considerable portion of their production.

(b) *Is 'good quality CHP electricity' a specific product?*

The product 'good quality CHP electricity' can be produced by a large number of companies in various sectors. In most of these sectors, CHP is not used to produce electricity as a core product of the business, but the technology is used to produce the different products of the companies more efficiently, by increasing the energy efficiency of the production process. Insofar, in the case of most of the good quality CHP operators, 'good quality CHP electricity' is not a specific product.

This may be different for a certain type of CHP system operators, namely power stations, using CHP technology for producing electricity to feed into the grid⁽²⁰⁾. For such companies, the production of electricity is their core business, and the electricity produced is in direct competition with the same product from conventional electricity producers. However, electricity from CHP systems is not exempt, if it is sold via the grid. The exemption includes only good quality CHP electricity used on site. With respect to this electricity, CHP power stations are in the same situation as any other autogenerator in any other sector of the economy which produces good quality CHP for use on site.

Therefore, it can be concluded that the exemption for good quality CHP electricity used on site is not selective.

II. Known end-users do not pay levy on electricity they purchase from a good quality CHP for their own use

Known end-users are users, whose main business is not the production of heat or power. They could produce heat and power for use on their own site, but outsource this production (because it is not their core business) to a separate entity delivering mainly to a group of known end-users (closed system). Known end-users are not 'formally' producing their own power, but practically they are in the same situation as an autogenerator, who produces power for use on site. It should also be noted that such 'closed systems' are comparable to a 'use on site situation' as regards the energy efficiency of electricity transfer compared with electricity transfer via the grid.

⁽²⁰⁾ In its decision on a temporary tax exemption for certain combined cycle power plants in the context of the continuation of the ecological tax reform in Germany (SG(2000) D109283 of 14.12.2000), the Commission argued that 'the relevant gas and steam turbine plants are being used quite predominantly to generate electricity for feeding into the grid. The technology (CHPs excluding heat extraction) is not one which can be used virtually indiscriminately in all sorts of firms in all branches of industry. Since it can accordingly be assumed that the effects of the tax exemption will be felt, if not exclusively, then at least quite predominantly in a certain sector, the measure favours certain undertakings or the production of certain goods within the meaning of Article 87(1)'. In fact there were only very few stations using this type of technology in Germany.

The Commission considers that the same arguments apply as under point 1 (use of CHP as technology available throughout the sectors) and that the measure is not selective.

(2) Consumption of a taxable commodity for heat production (without producing electricity from it first) by a good quality CHP

Conventional production of heat:

Fuel <u>input</u> taxed	Conventional production of heat or steam (= boiler)
	Heat <u>output</u> not taxed (not a taxable commodity)

Good quality CHP:

Fuel <u>input</u> not taxed	CHP system
	Heat <u>output</u> not taxed (not a taxable commodity)

Operators of good quality CHP do not pay a levy on input fuels to produce heat. This favours them in comparison with the conventional production of heat, where the input fuel is taxed. Again, the measure does not favour certain undertakings, as CHP is a technology available in a wide range of sectors.

The Commission therefore concludes that the exemption on CHP does not constitute State aid according to Article 87(1) of the EC Treaty.

3. Exemption for electricity generated from some energy sources

Firms purchasing electricity generated from some energy sources as defined in the description are fully exempt from the levy on the electricity. This relieves them of charges that are normally borne from their budgets and gives the recipient firms an advantage over other firms. The advantage is granted through state resources as the State suffers a loss of tax revenues. The recipients exercise an economic activity on markets on which there is or could be trade between Member States or on which firms from other Member States might wish to establish themselves. The scheme thereby distorts or threatens to distort competition and could affect trade between Member States. However, any company in any sector of the economy is able to purchase electricity from these sources. Thus, the tax exemption does not favour certain undertakings or the production of certain goods and is therefore not selective.

But it has to be also considered that the exemption will favour at the same time the generators of electricity from these sources feeding the electricity into the grid. It thus favours this type of electricity producer compared with producer of conventional and CHP electricity. In this respect, the exemption is selective.

However, the preliminary objective of the tax is an environmental one, namely the reduction of CO₂. The levy is introduced to penalise the use of energies producing long-cycle CO₂, as these emissions are responsible for climate change.

A tax aiming at reducing CO₂ could have been structured in a way so that it reflects the *carbon content* of different fuels. However, there are good reasons to base the calculation of the levy rates on the energy content of different fuels: Firstly, targeting emissions via the energy content of fuels is an appropriate way to reduce them as this approach increases the energy efficiency of fuel use⁽²¹⁾. Secondly, given the current structure of the electricity and distribution industries, it is only possible to determine the carbon content of electricity as a broad average. On that basis, the additional fuel switching that would be induced by such an approach is likely to be limited. Thirdly, structuring the levy with regard to the *energy content* of different fuels has the advantage of simplicity.

None of the sources of energy listed in the notification contributes negatively to long-cycle CO₂ emissions. They hence are not fuels for which a penalisation in form of the levy is intended.

However, the exemption is not extended to all energy sources which do not contribute negatively to long-cycle CO₂ emissions and in particular does not apply to nuclear power and to hydro power of more than 10 MW. This choice is justified for the following reasons: While nuclear power does not contribute to CO₂ emissions, it has a number of other effects which are not desirable from an environmental point of view. With regard to large hydro power, it should be considered that the CCL scheme is targeting environmentally friendly energy sources with significant development potential. As the potential of large hydro plants has already been largely developed, it does not fall into the target group of the scheme. The Commission also notes that its proposal on a directive on the promotion of electricity from renewable sources also includes only hydroelectric installations below 10 MW⁽²²⁾.

The Commission therefore considers that as none of the exempted energy sources contributes to long-cycle CO₂ emissions, which is fully in line with the objective of the levy, the exemption for electricity from the energy sources notified by the UK Government is justified by the nature or general scheme of the tax system. The Commission considers that the exemption therefore does not constitute State aid within the meaning of Article 87(1) of the EC Treaty and Article 61(1) of the EEA Agreement.

However, even if the exemption would constitute State aid, it could be declared compatible with Article 87(3) of the EC Treaty.

4. Tax reduction for companies entering into climate change agreements

Firms entering into climate change agreements are exempted for 80 % of the levy. This relieves them of charges that are normally borne from their budgets and gives the recipient firms an advantage over other firms. The advantage is granted through State resources as the State suffers a loss of tax revenues. The recipients exercise an economic activity on markets on which there is or could be trade between Member States or on which firms from other Member States might wish to establish themselves. The scheme thereby distorts or

threatens to distort competition and could affect trade between Member States. Only companies fulfilling specific criteria can enter into climate change agreements. Thus, the tax exemption favours certain undertakings or the production of certain goods and is therefore selective.

It is not a measure which would be in the nature of the tax law.

The levy reduction for companies entering into climate change agreements therefore constitutes State aid under Article 87(1) of the EC Treaty.

5. Exemption for dual-use fuels

The United Kingdom's position is that the dual-use exemption is a general measure that does not constitute State aid. They claim that the CCL is a tax imposed on the use of energy products used *as fuel* and that the exemption is in line with Council Directive 92/81/EEC of 19 October 1992 on the harmonisation of the structures of excise duties on mineral oils⁽²³⁾ ('the Mineral Oils Directive') as well as the Proposal for a Council Directive restructuring the Community framework for the taxation of energy products⁽²⁴⁾ ('the proposal'), in so far as only the use of energy products for motor and heating purposes falls within its scope.

According to the United Kingdom authorities, the purpose of the extension of this exemption to mixed uses is to provide certainty and clarity for the taxpayer, who is the fuel supplier, as to whether or not, on the basis of scientific advice, any use of a commodity by the customer is exempt from the levy. The United Kingdom authorities do not consider it to be technically feasible to objectively apportion with sufficient accuracy the fuel and non-fuel uses of energy products within certain processes.

The Commission considers that the exemption gives the benefiting companies an advantage, which is financed through State resources. In assessing whether this exemption is a general measure, as the United Kingdom authorities claim, or whether it constitutes State aid, the Commission considers it necessary to assess whether the effects would favour certain undertakings or the production of certain goods. The Commission notes that, according to the information provided by the United Kingdom authorities, the exemption will favour the production of certain goods, namely some metals (including aluminium, iron, lead, copper and coke) as well as batteries and some chemicals. The Commission therefore has doubts that the exemption can be considered as a general measure.

The Commission notes that it falls to be assessed whether the exemption can be justified on the basis of the nature and logic of the tax system. The Commission notes the claim made by the United Kingdom authorities that the imposition of the levy solely on energy used for fuel is consistent with the provisions of the Mineral Oils Directive and the Proposal for a Council Directive restructuring the Community framework for the taxation of energy products.

⁽²¹⁾ The approach of taxing harmful emissions approximately via the energy content of fuel is, for example, also used for car emissions.

⁽²²⁾ COM(2000) 279 final.

⁽²³⁾ OJ L 316, 31.10.1992, p. 12.

⁽²⁴⁾ OJ C 139, 6.5.1997, p. 14.

The Commission notes that the climate change levy is a tax on the non-domestic use of energy, which broadly covers use as heating fuel, lighting or for motive power. The levy will not apply to fuels used for other than these purposes. Such a definition of the scope of an energy tax, whereby not all uses of fuels are taxed, may be in the logic of a system such as that established in the Mineral Oils Directive and in the Proposal for a Council Directive restructuring the Community framework for the taxation of energy products.

However, the proposed exemption for dual-use fuels goes beyond such a definition of the scope of the levy.

Firstly, the exemption may not treat comparable situations equally, in so far as some dual-use processes are exempt from the levy, while other processes, which may also fall to be considered as dual-use, are not exempted.

Secondly, the UK exempts fuels entirely from the levy, even if they are only partially used for non-energy purposes as defined above.

1. The Commission notes that the Proposal for a Council Directive restructuring the Community framework for the taxation of energy products is not in force and cannot be automatically relied upon as a reference point to establish the logic and general nature of the tax system. However, it may provide some indication of whether the dual-use provision can be considered as a general measure, although Article 13(1) refers to fuels used *principally* for the purposes of chemical reduction. The Commission has doubts, however, that the exemption is fully consistent with the proposal, as it does not extend to energy used in all *metallurgical* processes, as would be required under Article 13(1)(a) of the proposal. The Commission notes that according to the United Kingdom authorities, a metallurgical process is a process which results in the production of metal, for example, from ore. The Commission has doubts that this interpretation is consistent with the notion of metallurgical process in the proposal. In order to be consistent with the proposal, it appears that energy used in all metallurgical processes, namely in any metal production process, would be exempt from the levy.
2. The Commission further notes the United Kingdom's claim that it is not possible to apportion the fuel/non-fuel use amounts of energy products in certain processes with accuracy; and that for reasons of clarity and certainty, a full exemption from the levy is necessary for mixed uses. The Commission has doubts, however, that the United Kingdom authorities cannot establish a mechanism whereby an estimation of fuel/non-fuel uses for certain processes can be made and levy imposed accordingly.

The Commission further notes that, if the energy part in the dual-use were to be fully exempted, the result may be not in line with the objective of the levy to reduce CO₂.

For the reasons given above, the Commission has doubts that the exemption for energy products used for purposes other than as fuel can be considered as a general measure and not as State aid.

II. LEGALITY OF THE AID

By notifying its intention to introduce the tax scheme, the UK has complied with its obligation under Article 88(3) of the EC

Treaty to inform the Commission, in sufficient time to enable the latter to submit its comments, of any plans to grant or alter aid.

III. COMPATIBILITY OF THE AID

The aid's compatibility with the common market under Article 87(3)(c) of the EC Treaty has been assessed on the basis of the Community guidelines on State aid for environmental protection (OJ C 37, 3.2.2001, p. 3).

1. Exemption for transport

According to Article 87(3)(c) of the Treaty, aid may be considered compatible with the common market if the aid will facilitate the development of certain economic activities or certain economic areas, where such aid does not adversely affect trading conditions to an extent contrary to the common interest.

As described above, the UK has adopted a substantial transport plan, the aim of which is to improve the UK transport system by way of reducing road congestion and pollution and providing better and more reliable public transport. One key target of this plan is to increase the use of rail and to create a sustainable mobility. However, to meet the plan's target, substantial investments in rail infrastructure and rolling stock will be necessary. The UK Government has estimated that in addition to these investments, the cost of the climate change levy could add approximately GBP 15 million per year to rail operators' costs.

The Commission has for some time pursued a policy of achieving a sustainable mobility through a balanced intermodal transport system and a central aim of the Common Transport Policy is the promotion of a modal shift from road to other more environmentally friendly modes of transport.

For instance, the Commission communication on the future development of the common transport policy⁽²⁵⁾ proposes a Community framework for sustainable mobility which Member States, together with the Community, have to implement by measures ensuring that the development of transport system lead to a 'sustainable pattern of development by respecting environment and, in particular, by contributing to the solution of major environmental problems, such as the limitation of CO₂'. The communication also makes it clear that state aid does have a role to play, not only in modifying the cost relationship of modes, but also in rendering certain modes more competitive⁽²⁶⁾.

Moreover, a sustainable public transport system is liable to contribute to economic development and employment as it helps to clean up the environment by using less energy, making less noise and producing fewer pollutants. It also reduces social exclusion by allowing people without the use of a car to gain access to jobs, schools, shops, medical facilities, etc.⁽²⁷⁾.

⁽²⁵⁾ Commission Communication COM(92) 494 final, 2 December 1992, 'The future development of the common transport policy'.

⁽²⁶⁾ See Commission Decision of 21 April 1999, Case N 588/98 (Environmental subsidy for the transport of goods by rail) (OJ C 166, 12.6.1999, p. 6).

⁽²⁷⁾ See Commission Communication COM(1998) 431 final of 10 July 1998, 'Developing the citizen's network'.

The Commission considers, that, although the levy is introduced for long-term environmental reasons, it could in the short or medium term jeopardise or hamper the overall UK transport strategy to promote rail as a mode of transport and to attain a sustainable and environmentally friendly transport system, a goal that is shared by the Community as a whole.

It is however also true that, in view of the climate change levy, the beneficiaries of the tax exemption will be relieved of expenditure that they normally would have to bear and which hence gives them a competitive advantage. However, the Commission also notes that the beneficiaries' main competitors, operators providing road transport service, will not be subject to the new levy. Therefore, the *de facto* effect of the aid will only be that the competitive situation between the beneficiaries and their main competitors will be maintained at the same level as it was before the levy was introduced.

The Commission notes that without the tax exemption, the beneficiaries are likely to suffer a loss of competitiveness since their main competitors — undertakings providing road transport services — will not be subject to the climate change levy. It is thus considered that the aid under scrutiny is likely to facilitate the development of a sustainable public transport and rail freight. As described above, the development of these sectors is in line with the policy pursued by the Community as a whole and is thus in the common interest. Furthermore, as the *de facto* result of the aid will only be that the competitive situation between the beneficiaries and their main competitors will be maintained at the same level as it was before the levy was introduced, the Commission finds — on balance — that the aid will not affect trading conditions to an extent contrary to the common interest.

In addition, according to Article 73 of the Treaty, aid shall be compatible with the Treaty if it meets the needs of coordination of transport. Article 3(1)(b) of Council Regulation (EEC) No 1107/70, which implements Article 73 of the Treaty, allows that, until the entry into force of common rules on the allocation of infrastructure costs, aid may be granted to undertakings that have to bear expenditure relating to the infrastructure used by them, while other undertakings are not subject to a like burden.

Different modes of transport impose different levels of external costs, which, in the absence of harmonised levels on infrastructure charging, are not adequately reflected in the price that users pay for the use of a particular infrastructure. This situation is further liable to distort competition between different transport modes with a negative environmental impact. It is, in particular noted that users of rail infrastructure do not fully benefit from the relatively low external costs they impose on society as compared with other modes with relatively higher external costs⁽²⁸⁾. The Commission considers, under such circumstances, that users of rail infrastructure are operating under conditions that need to be coordinated within the meaning of Article 73 of the Treaty, read in conjunction with Article 3(1)(b) of Regulation (EEC) No 1107/70⁽²⁹⁾.

⁽²⁸⁾ Commission White Paper COM(1998) 466 final, 'Fair payment for infrastructure use: A phased approach to a common transport infrastructure charging framework in the EU'.

⁽²⁹⁾ See Commission Decision ... N 47/1999.

The Commission accordingly holds also the exemption provided for in Article 3(1)(b) of Regulation (EEC) No 1107/70 to be relevant for the tax exemption in question, in so far as the UK climate change levy for electricity, gas and coal used for rail freight and public transport may entail additional costs connected to the use of railway and light railway infrastructure as compared with, in particular, road transport.

In view of the foregoing considerations, the Commission concludes that the notified tax exemption for public transport and rail freight shall be deemed compatible with the common market.

2. Exemption for electricity generated from some energy sources

Even if, contrary to the assumption made above, the exemption for electricity generated from the sources notified by the UK Government is not justified by the nature or general scheme of the levy system, and therefore constitutes State aid, the Commission considers that such aid must be deemed compatible with the common market in accordance with Article 87(3)(c) of the EC Treaty.

By virtue of point 51(1)(a), second indent, of the environmental aid guidelines, when, for environmental reasons, a Member State introduces a new tax in a sector of activity or on production in respect of which no Community tax harmonisation has been carried out, exemption decisions covering a 10-year period may be justified where a Member State makes a tax reduction subject to conditions that have the same effect as agreements relating, among other things, to reduction in emissions.

The climate change levy is a new tax introduced in a sector which is not yet covered by Community tax harmonisation. As stated above, the UK authorities have undertaken to renotify or amend the relevant legislation after an initial period of 10 years. The tax exemption is only granted for electricity produced from the notified sources which do not contribute negatively to long-cycle CO₂ emissions. Therefore, in the present case, the exemption is subject to the condition that emissions are indeed avoided. The result of this exemption is thus actually better than what can possibly be achieved under a CCL agreement. The fact that the levy is charged on electricity produced from other sources which do not contribute to long-cycle CO₂ emissions is not relevant in this context, since the Member State may decide, for justified reasons linked *i.a.* to its environmental or energy policy, to reserve such a benefit to a particular category of energy sources.

For these reasons, the conditions set out in the environmental aid guidelines are fully met and, if the exemption in favour of electricity generated from the notified sources constitutes State aid, it must be considered compatible with the common market.

3. Tax reduction for companies entering into climate change agreements

The climate change levy is a new environmental tax on products in respect of which no Community tax harmonisation has been carried out.

Although companies will have to make investments in order to achieve the targets of the agreements, the tax reduction is not directly linked to and expressed as a percentage of eligible investment costs. The tax reduction thus constitutes operating aid.

The UK introduces these tax reduction in order not to endanger the competitiveness of energy-intensive industrial sectors, for which the full rate of the levy would be a high increase of their costs and for which the levy is a competitive disadvantage in particular as there is not tax harmonisation on energy consumption at the Community level.

Points 47 and 48 of the environmental aid guidelines consider that when adopting taxes that are to be levied on certain activities for reasons of environmental protection, Member States may deem it necessary to make provision for temporary exemptions for certain firms notably because of the absence of harmonisation at European level or because of the temporary risks of a loss of international competitiveness.

If the tax is to be levied as the result of an autonomous decision on the part of a Member State, the firms affected may have some difficulty in adapting rapidly to the new tax burden. In such circumstances there may be justification for a temporary exemption enabling certain firms to adapt to the new situation.

In general, tax measures in question should make a significant contribution to protecting the environment. Care should be taken to ensure that the exemptions do not, by their very nature, undermine the general objective pursued (point 50 of the environmental aid guidelines).

The climate change levy taxes the energy consumption. By increasing the costs for energy, it will contribute to a more efficient use of energy, and thereby to the reduction of CO₂ emissions and will thus make an important contribution to environmental protection. The tax reduction are conditional on climate change agreements. These agreements establish emission reduction targets or energy efficiency targets, which will contribute to the same objective as the tax itself. They thus do not undermine the general objective of the tax pursued.

In this situation, tax exemptions may be justified for a 10-year period with no degressivity if the Member State concerned and the recipient firms or associations of firms undertake to achieve environmental protection objectives during the period for which the exemptions apply.

Such agreements may relate, among other things, to a reduction in energy consumption or a reduction in emissions (point 51(1)(a) of the environmental aid guidelines). The tax reductions are conditional on the associations of firms or companies entering into climate change agreements, which pursue the objectives required by the guidelines.

Point 51(1)(a) of the environmental aid guidelines allows such agreements to be concluded not only at the level of individual firms, but also at the level of associations of firms. The climate change agreements are firstly concluded at the level of associations, with underlying agreements setting targets for individual companies. As long as the sector target is

achieved, underperforming companies within the same sector may also benefit from the levy reduction. However, any free-rider-benefit is most likely to be limited by sector discipline exercised internally in the associations. In any case, underperforming companies run the risk that the sector target will not be met, in which case only the underperforming companies of the sector will have to pay the levy.

The Commission assessed these agreements for the sectors concerned by this notification as required in point 51(1)(a) of the guidelines and concludes on the basis of the targets as they are set out in draft form, that they contribute considerably to increased energy efficiency and directly or indirectly to CO₂ reductions. This positive assessment is based on the most recent available information described above and on the appraisal of the UK authorities that these targets would not be lowered in the final phase of the negotiations. The Commission therefore reminds the UK authorities that in case the environmental benefit of the final targets would be lower than of the envisaged targets, the tax reduction for these agreements would not be covered by the present Commission decision.

For some sectors, the UK authorities were not yet in a position to provide even provisional information on targets. The Commission is therefore not in a position to assess the value of these agreements and cannot express an opinion on them. These agreements are therefore not covered by this decision.

The loss of levy reduction for the future while the company has at the same time to catch up on the targets is an efficient mechanism to keep companies in the agreement and to lead to the fulfillment of the targets. Together with the recuperation mechanism proportional to non-achieved targets at the end of the agreement period is a penalty mechanism which fulfils the requirements of the environmental aid guidelines.

The scheme allows carbon emission trading among entities committed to a climate change agreement. This will allow overperforming entities to sell carbon emission certificates to underperforming companies in order for them to meet their targets.

This may be seen as an allocation of a limited number of transferable emission permits to overperforming companies. The State thus provides them with an intangible asset, which can be sold on a market to be created. It can be assumed that the permits will actually have a value to an extent, as the underperforming companies would either have to invest themselves or would otherwise lose the levy reduction.

Having regard to these circumstances, to the fact the permits are allocated for free, and in line with points 69 to 71 of the Community guidelines on State aid for environmental protection, the Commission cannot exclude that the arrangements constitute aid granted by a Member State or through State resources in any form whatsoever.

Theoretically, a company able to sell its permits at a certain price may use the resulting cash-flow to improve its competitive position in the UK or in other Member States.

It cannot be excluded that there is a potential distortion of competition between companies covered under climate change agreements and other companies in other Member States. There may also be a potential effect on trade between Member States. In view of all this, the Commission cannot exclude that the possibility for carbon emission trading may constitute State aid in the meaning of Article 87(1).

According to point 71 of the abovementioned guidelines, the Commission has a large margin of discretion in order to assess emission trading systems. In the present case, the Commission considers any aid from this arrangement to be compatible with Article 87(3)(c) of the EC Treaty for the following reasons:

- trading is limited to entities committed to climate change agreements,
- trading is only allowed for verified surplus carbon,
- trading allows to achieve the targets in a cost-effective way and put sectors in a position to offer ambitious targets,
- the value of the permits will be limited by the alternatives open to the companies in the climate change agreements, thus, the potential distortion of competition must be considered to be limited,
- companies will have to invest beyond the investments needed to fulfil their own targets in order to obtain permits. Thus, there will be an effective and concrete counterpart from the benefiting companies.

A wider emission trading scheme, in which later on emission trading should also be possible with CCL companies, is going to be notified to the Commission soon.

In assessing the general terms of the agreements, the Commission did not find any element which, by itself, could cause participating undertakings or sector associations to restrict competition through emission trading in a way contrary to Articles 81 or 82. The UK undertook that it will keep under review the behaviour of participants in trading activity and note that competition rules apply to that behaviour.

4. Exemption for dual-use fuels

Assuming that the exemption for dual-use fuels constitutes State aid, the Commission has doubts on its compatibility with the environmental aid guidelines:

1. The provision exempts energy consumption for some processes causing considerable CO₂ emissions and thus may run counter to the objective of the tax to reduce CO₂ emissions.
2. The exemption is not temporary, and not granted with a view of enabling companies to adapt to the new tax (point 48 of the environmental aid guidelines).
3. The exemption is not made conditional on the conclusion of agreements in order to achieve environmental protection objectives, nor is the tax subject to conditions that have the same effect as agreements (point 51(1)(a) of the environmental aid guidelines).
4. The UK has not demonstrated that firms eligible for the exemption must nevertheless pay a significant proportion of the national tax (point 51(1)(b) of the environmental aid guidelines).

CONCLUSION

- The Commission therefore concludes that the levy reduction for companies covered by climate change agreements is compatible with the requirements of the environmental aid guidelines and Article 87(3)(c) of the EC Treaty,
- the Commission concludes that the tax exemption for public transport and rail freight is compatible with Article 87(3)(c) of the EC Treaty,
- in the light of the foregoing considerations, the Commission, acting under the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty, requests the United Kingdom to submit its comments and to provide all such information as may help to assess the **exemption on dual-use fuels**, within one month of the date of receipt of this letter. It requests your authorities to forward a copy of this letter to the potential recipient of the aid immediately.

The Commission wishes to remind the United Kingdom that Article 88(3) of the EC Treaty has suspensory effect, and would draw your attention to Article 14 of Council Regulation (EC) No 659/1999, which provides that all unlawful aid may be recovered from the recipient.»

AYUDAS ESTATALES

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 5 del artículo 6 de la Decisión nº 2496/96/CECA de la Comisión, de 18 de diciembre de 1996, por la que se establecen normas comunitarias relativas a las ayudas estatales en favor de la siderurgia, en relación con la ayuda C 20/2001 (ex NN 77/2000) destinada a varias empresas del País Vasco (España) — I+D — Acero CECA

(2001/C 185/04)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 28 de marzo de 2001 reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas que siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a España su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 5 del artículo 6 de la Decisión nº 2496/96/CECA de la Comisión en relación con las ayudas antes citadas.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente enviándolas a:

Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Secretaría de Ayudas Estatales
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel
Fax (32-2) 296 12 42.

Dichas observaciones serán comunicadas a España. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

RESUMEN

I. PROCEDIMIENTO

Por carta de 31 de julio de 2000, la Comisión solicitó a las autoridades españolas información sobre las ayudas destinadas a investigación y desarrollo (I+D) que el Gobierno vasco había concedido en 1999 a empresas CECA y no habían sido notificadas siguiendo el procedimiento establecido en el apartado 1 del artículo 6 de las Directrices sobre ayudas a la siderurgia. Mediante carta de 4 de octubre de 2000, las autoridades españolas enviaron parte de la información y la Comisión pidió información adicional mediante carta de 20 de noviembre de 2000. Por carta de 16 de enero de 2001, las autoridades españolas remitieron dicha información.

II. DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA

Las ayudas consisten en subvenciones concedidas al amparo del régimen de ayudas a I+D autorizado por la Comisión conforme al Tratado CE.

A continuación se especifican las empresas CECA beneficiarias, la descripción de los proyectos de I+D y la cuantía de la ayuda:

1. **Acería de Álava SA.** Proyecto: Desarrollo de una nueva línea de producción: acabado de redondos de acero inoxidable. Fase de I+D: desarrollo precompetitivo. Costes subvencionables: 2 368 949 euros. Subvención (5,4 %): 128 871 euros.
2. **Acería Compacta de Bizkaia SA y Aceralia Corporación Siderúrgica SA.** Proyecto: Desarrollo de aceros al carbono y microaleados mediante tecnología de colada

(*thin slab casting*). Fase de I+D: desarrollo precompetitivo. Costes subvencionables: 527 388 euros. Subvención (40 %): 210 955 euros.

3. **Aceros Inoxidables Olarra SA.** Proyecto: Optimización de la conformación en caliente de aceros austeníticos mediante simulación termomecánica. Fase de I+D: desarrollo precompetitivo. Costes subvencionables: 77 062 euros. Subvención (39,2 %): 30 177 euros.
4. **GSB Acero SA.** Proyecto: Optimización de los parámetros metalúrgicos en la forja en tibio de aceros microaleados. Fase de I+D: desarrollo precompetitivo. Costes subvencionables: 117 696 euros. Subvención (40 %): 47 077 euros.
5. **Nervacero SA.** Proyecto: Reciclado de polvos de acería a través del briqueteado y posterior introducción en el horno. Fase de I+D: desarrollo precompetitivo. Costes subvencionables: 48 832 euros. Subvención (41 %): 20 014 euros.
6. **Siderúrgica Aristrain Olaberriá SL.** Proyecto: Desarrollo de la tecnología de colada en formas semiacabadas para obtener aceros estructurales al carbono y microaleados. Fase de I+D: desarrollo precompetitivo. Costes subvencionables: 390 708 euros. Subvención (6 %): 23 526 euros.
7. **Esteban Orbeago SA.** Proyecto: Optimización de la fundición de chatarra de acero en un horno de arco voltaico mediante el control continuo de la escoria. Fase de I+D: Investigación industrial. Costes subvencionables: 168 283 euros. Subvención (6,6 %): 11 030 euros.

8. **Esteban Orbeago SA.** Proyecto: Control del proceso para la disminución de defectos de la laminación en caliente de palanquillas. Fase de I+D: desarrollo precompetitivo. Costes subvencionables: 317 839 euros. Subvención (7,3 %): 23 145 euros.
9. **Marcial Ucín Siderúrgica SL.** Proyecto: Mejora del comportamiento frente a la fatiga de aceros ondulados con propiedades antisísmicas. Fase de I+D: Investigación industrial. Costes subvencionables: 220 788 euros. Subvención (6,3 %): 13 951 euros.
10. **Tubos Reunidos.** Proyecto: Optimización y mejora de la productividad en las acerías. Fase de I+D: desarrollo precompetitivo. Costes subvencionables: 622 782 euros. Subvención (4,2 %): 26 338 euros.

En cuanto al efecto incentivador de las ayudas, las autoridades españolas han tenido en cuenta los siguientes factores: las ayudas no son recuperables, se conceden cada año, todas las empresas pueden acceder a ellas y todos los gastos contraídos por las empresas son susceptibles de acogerse a las mismas. En su carta del 16 de enero de 2001 y con objeto de presentar una nueva justificación del efecto incentivador, las autoridades españolas sostuvieron que dentro del sector industrial vasco existen sectores que tradicionalmente están compuestos principalmente por pequeñas y medianas empresas (PYME), que, como consecuencia de la reducción de las ayudas durante 1992, 1993 y 1994, los esfuerzos para desarrollar las empresas de I+D se redujeron en ese período y, por último, que el Gobierno vasco está fomentando en la actualidad los proyectos presentados por más de una empresa.

III. EVALUACIÓN DE LA AYUDA

Habida cuenta de que las sociedades anteriormente mencionadas son empresas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 80 del Tratado CECA, están sujetas a las disposiciones del Tratado y a las normas de las Directrices sobre ayudas a la siderurgia. Según el artículo 2 de las Directrices, las ayudas concedidas para sufragar los gastos de las empresas siderúrgicas y destinadas a proyectos de I+D pueden considerarse compatibles con el mercado común si se adaptan a las normas fijadas en el Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado para la investigación y el desarrollo (en lo sucesivo, «el Encuadramiento de I+D»).

Según lo estipulado en el Encuadramiento sobre las ayudas de I+D, para evaluar si las ayudas son compatibles con el mercado común, la Comisión deberá verificar la fase de la investigación, la intensidad de la ayuda, los costes subvencionables y asegurarse de que la ayuda tenga un efecto incentivador.

En cuanto a la fase de investigación y dado que las autoridades españolas no proporcionaron la información detallada que solicitó la Comisión en su carta de 20 de noviembre de 2000, no es posible determinar si la evaluación por ellas realizada se atiene a las definiciones del Encuadramiento sobre las ayudas de I+D. Las autoridades españolas no han proporcionado los detalles relativos al coste ni han identificado, para algunos proyectos, las entidades públicas encargadas de la investigación y su papel en la actividad de I+D. En estas circunstancias, la intensidad de la ayuda y su compatibilidad con el Encuadra-

miento sobre las ayudas de I+D no pueden determinarse de forma precisa.

En cuanto al efecto incentivador de las ayudas, según el Encuadramiento sobre las ayudas de I+D, la Comisión podrá aceptar que las ayudas proporcionan un incentivo necesario si el beneficiario es una PYME. Las autoridades españolas han reconocido que Acería Compacta de Bizkaia, Aceralia, Aceros Inoxidables Olarra, GSB Aceros y Nervacero no pertenecen a la categoría de las PYME. En cuanto a las restantes, la Comisión señala que no hay muchas PYME en el sector siderúrgico y que las autoridades españolas no han demostrado que estas empresas puedan considerarse PYME con arreglo a las definiciones comunitarias actuales. Por otra parte, cuando la Comisión aprobó el régimen conforme al Tratado CE, señaló que las autoridades españolas evaluarían el efecto incentivador de las ayudas en las grandes empresas en función de los siguientes indicadores: evolución del gasto en I+D, evolución del número de personas que se dedican a actividades de I+D y evolución del gasto en I+D en proporción al volumen de negocios total. Se ha de constatar que no se han tenido en cuenta estos factores y que sería pertinentes para evaluar el efecto incentivador en este caso.

IV. CONCLUSIÓN

La Comisión alberga dudas en cuanto al efecto incentivador de las ayudas, a la calificación de las actividades como I+D o a la fase de investigación en relación con las definiciones utilizadas en el anexo I del Encuadramiento sobre ayudas de I+D y en cuanto a la cuantía de los costes subvencionables. Por consiguiente, por el momento no se puede determinar con precisión la intensidad de la ayuda tal como se define en el Encuadramiento sobre ayudas de I+D.

CARTA

«Por la presente, la Comisión tiene el honor de comunicar a España que, tras haber examinado la información facilitada por sus autoridades sobre la ayuda arriba indicada, ha decidido incoar el procedimiento previsto en el apartado 5 del artículo 6 de la Decisión nº 2496/96/CECA de la Comisión, de 18 de diciembre de 1996, por la que se establecen normas comunitarias relativas a las ayudas estatales en favor de la siderurgia (¹) (en lo sucesivo, el Código de ayudas a la siderurgia), con respecto a las ayudas concedidas por el Gobierno vasco a varias empresas siderúrgicas CECA.

I. PROCEDIMIENTO

1. Por carta de 31 de julio de 2000, la Comisión pidió a las autoridades españolas que facilitaran información sobre las ayudas concedidas en 1999 por el Gobierno vasco a empresas CECA para actividades de investigación y desarrollo, que no habían sido notificadas con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 1 del artículo 6 del Código de ayudas a la siderurgia. Por carta de 4 de octubre de 2000, las autoridades españolas proporcionaron alguna información. Por carta de 20 de noviembre de 2000, la Comisión pidió datos complementarios. Por carta de 16 de enero de 2001, las autoridades españolas facilitaron algunos datos complementarios.

(¹) DO L 338 de 28.12.1996, p. 42.

II. DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA

2. Se trata de subvenciones concedidas en aplicación del régimen establecido por el Decreto 185/1997, de 29 de julio, por el que se establecen medidas de apoyo a las actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en la Comunidad Autónoma del País Vasco ⁽²⁾, régimen autorizado por la Comisión conforme al Tratado CE [carta SG(97) D/6942 de 12.8.1997].
3. Las empresas CECA beneficiarias, las características de los proyectos de I+D, así como el importe de las ayudas, son los siguientes:
4. **Acería de Álava, SA.** Proyecto: Desarrollo de una nueva línea de producción: acabado de redondos de acero inoxidable. Fase de I+D: desarrollo precompetitivo. Costes subvencionables: 2 368 949 euros. Subvención (5,4 %): 128 871 euros.
5. **Acería Compacta de Bizcaia, SA y Aceralia Corporación Siderúrgica, SA.** Proyecto: Desarrollo de aceros al carbono y microaleados mediante tecnología de colada (*thin slab casting*). Fase de I+D: desarrollo precompetitivo. Costes subvencionables: 527 388 euros. Subvención (40 %): 210 955 euros.
6. **Aceros Inoxidables Olarra, SA.** Proyecto: Optimización del conformado en caliente de aceros austenoferríticos mediante simulación termomecánica. Fase de I+D: desarrollo precompetitivo. Costes subvencionables: 77 062 euros. Subvención (39,2 %): 30 177 euros.
7. **GSB ACERO, SA.** Proyecto: Optimización de los parámetros metalúrgicos en la forja en tibio de aceros microaleados. Fase de I+D: desarrollo precompetitivo. Costes subvencionables: 117 696 euros. Subvención (40 %): 47 077 euros.
8. **Nervacero, SA.** Proyecto: Reciclado de polvos de acería mediante briquetado y posterior introducción en el horno. Fase de I+D: desarrollo precompetitivo. Costes subvencionables: 48 832 euros. Subvención (41 %): 20 014 euros.
9. **Siderúrgica Aristrain Olaberria, SL.** Proyecto: Aplicación y desarrollo de la tecnología de colada en formas semi-acabadas (*beam blanks*) para la obtención de aceros estructurales al carbono y microaleados. Fase de I+D: desarrollo precompetitivo. Costes subvencionables: 390 708 euros. Subvención (6 %): 23 526 euros.
10. **Esteban Orbegozo, SA.** Proyecto: Optimización del proceso de fusión de chatarra en un horno eléctrico de arco, en función del control en continuo de la escoria. Fase de I+D: Investigación industrial. Costes subvencionables: 168 283 euros. Subvención (6,6 %): 11 030 euros.
11. **Esteban Orbegozo, SA.** Proyecto: Control del proceso para la disminución de defectos producidos en la laminación en caliente de palanquillas de acero. Fase de I+D: desarrollo precompetitivo. Costes subvencionables: 317 839 euros. Subvención (7,3 %): 23 145 euros.

12. **Marcial Ucin Siderúrgica, SL.** Proyecto: Mejora del comportamiento a fatiga ologocíclica de aceros corrugados con propiedades antisísmicas. Fase de I+D: Investigación industrial. Costes subvencionables: 220 788 euros. Subvención (6,3 %): 13 951 euros.
13. **Tubos Reunidos.** Proyecto: Optimización y mejora de la productividad en acería. Fase de I+D: desarrollo precompetitivo. Costes subvencionables: 622 782 euros. Subvención (4,2 %): 26 338 euros.
14. En cuanto al efecto de incentivación de las ayudas, las autoridades españolas han tenido en cuenta los siguientes factores: que se trata de ayudas a fondo perdido, que se conceden con carácter anual, que están a disposición de todo tipo de empresas y que todos los gastos en los que incurra la empresa son subvencionables. En su carta de 16 de enero de 2001, alegaron, para justificar más el efecto de incentivación, que el sector industrial del País Vasco se compone fundamentalmente de PYME que operan en sectores tradicionales, que, como consecuencia de la disminución de las ayudas en los años 1992 y 1993, los esfuerzos de I+D de las empresas se redujeron en esos años, así como en 1994, y, por último, que ahora el Gobierno vasco está fomentando los proyectos presentados por más de una empresa.

III. EVALUACIÓN DE LA AYUDA

15. Las empresas mencionadas son empresas según el artículo 80 del Tratado CECA, de modo que están sujetas a este Tratado y a las normas del Código de ayudas a la siderurgia. Con arreglo al artículo 2 del Código, las ayudas concedidas para sufragar los gastos de las empresas siderúrgicas en proyectos de investigación y desarrollo pueden considerarse compatibles con el mercado común siempre y cuando se ajusten a las normas fijadas en el Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo, publicado en el DO C 45 de 17 de febrero de 1996 (en lo sucesivo, «el Encuadramiento de I+D»).
16. De conformidad con el Encuadramiento de I+D, la Comisión, cuando evalúa si una ayuda es compatible con el mercado común, debe verificar la fase de investigación, la intensidad de la ayuda y los costes subvencionables, además de asegurarse de que la ayuda tenga un efecto de incentivación.
17. En cuanto a la fase de investigación, como las autoridades españolas no han facilitado la información detallada que solicitó la Comisión en su carta de 20 de noviembre de 2000, ésta no puede determinar si los criterios empleados por las autoridades españolas se ajustan a las definiciones del Encuadramiento de I+D. No han proporcionado pormenores sobre los elementos de coste ni han indicado, en relación con algunos proyectos, cuáles son los organismos de investigación públicos que participan y qué papel desempeñan en las actividades de I+D. En estas circunstancias, no se pueden determinar con precisión la intensidad de las ayudas ni su conformidad con el Encuadramiento de I+D.

⁽²⁾ BOPV n° 1997/147 de 4.8.1997, p. 13174.

18. En cuanto al efecto de incentivación de las ayudas, la Comisión, con arreglo al Encuadramiento de I+D, puede presumir que la ayuda ofrece un incentivo necesario cuando el beneficiario es una PYME. Las autoridades españolas han reconocido que ACB, Aceralia, Aceros Inoxidables Olarra, GSB Aceros y Nervacero no son PYME. En cuanto a las demás empresas beneficiarias, la Comisión observa que no hay muchas PYME en el sector siderúrgico y que las autoridades españolas no han demostrado que estas empresas sean PYME en el sentido de las definiciones comunitarias actuales. Por otra parte, cuando la Comisión aprobó el régimen con arreglo al Tratado CE, tomó nota de que las autoridades españolas examinarían el efecto de incentivación de las ayudas a empresas grandes según los siguientes indicadores: evolución de los gastos asignados a I+D, evolución del número de personas dedicadas a las actividades de I+D, relación entre la ayuda concedida y los gastos totales en I+D de la empresa. En el presente caso, no parece (véase el punto 14) que se haya tenido en cuenta ninguno de estos factores y los mismos serían pertinentes para la evaluación del efecto de incentivación.
- IV. CONCLUSIÓN
19. Habida cuenta de las consideraciones expuestas, la Comisión, en esta fase del procedimiento, tiene dudas de que las ayudas cumplan con las normas establecidas en el Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo. Por tanto, ha decidido incoar el procedimiento previsto en el apartado 5 del artículo 6 de la Decisión nº 2496/96/CECA de la Comisión.
20. En consecuencia, la Comisión insta a España para que presente sus observaciones en un plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la presente. También insta a sus autoridades para que transmitan inmediatamente una copia de la presente a los beneficiarios de las ayudas.
21. Por otro lado, de acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia ⁽³⁾, cuando la Comisión compruebe que unas ayudas han sido concedidas o modificadas sin haber sido notificadas, podrá ordenar al Estado miembro interesado, mediante una decisión provisional, después de haberle requerido a presentar sus observaciones al respecto, y en espera del resultado del examen de las ayudas, que facilite a la Comisión, en el plazo que ésta determine, todos los documentos, informaciones y datos precisos para examinar la compatibilidad de las ayudas con el mercado común. La Comisión ha decidido en consecuencia instar a las autoridades españolas a facilitar en el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la presente, toda la información pertinente para la evaluación de la ayuda. Esta información deberá incluir, entre otros elementos, la descripción de las actividades reales de los proyectos, los resultados esperados y las perspectivas de su aplicación, el calendario, el estado actual de la técnica en cada sector y los riesgos técnicos y económicos que presentan los proyectos, así como datos pormenorizados sobre los elementos de coste y sobre los organismos públicos que participan en los proyectos de I+D y su función en los mismos. En su defecto, la Comisión adoptará una decisión sobre la base de los elementos de los que disponga.
22. La Comisión desea recordar a España que toda ayuda concedida ilegalmente podrá reclamarse a su beneficiario.»

⁽³⁾ Sentencia de 13 de abril de 1994 en los asuntos acumulados C-324 y 342/90 Alemania y Pleuger: Worthington contra Comisión (Recopilación 1994, p. I-1173).

AYUDAS ESTATALES

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre la ayuda C 62/2000 (ex NN 142/99) — Ayuda en favor de Kahla Porzellan GmbH y Kahla/Thüringen Porzellan GmbH — Alemania

(2001/C 185/05)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 9 de enero de 2001, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Alemania su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la ayuda respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Dirección H
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Fax (32-2) 299 27 58.

Dichas observaciones serán comunicadas a Alemania. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

RESUMEN

PROCEDIMIENTO

El 16 de noviembre de 1998 y el 24 de marzo de 1999 la Comisión recibió denuncias de competidores que alegaban la existencia de una ayuda estatal en favor de Kahla Porzellan GmbH y Kahla/Thüringen Porzellan GmbH. Se pidió información el 6 de enero 1999. Se presentó una información incompleta en abril y mayo de 1999. Se pidió más información en octubre de 1999. La información recibida el 5 de noviembre de 1999 era aún incompleta y el caso se registró como ayuda no comunicada NN 142/99. Se volvió a pedir información en noviembre de 1999 y se recibió más información parcial en enero y marzo de de noviembre de 2000.

DESCRIPCIÓN

Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (Kahla II) es la sucesora de Kahla Porzellan GmbH (Kahla I). Ambas personas jurídicas se dedican a la producción de platos y porcelana. Están situadas en una región que puede acogerse a ayudas de conformidad con la letra a) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE. Ni Kahla I ni Kahla II han sido nunca PYME.

Kahla I fue privatizada en 1991 mediante su venta, por 2 millones de marcos, a dos inversores privados. Kahla I sufrió siempre pérdidas desde su creación y fue declarada en quiebra en septiembre de 1993.

Las ayudas financieras públicas a Kahla I hasta su quiebra en 1993 parecen totalizar por lo menos 109,425 millones de marcos alemanes. La información proporcionada es sin embargo incompleta. Parte de estas medidas se adoptaron cuando ya había sido declarada la quiebra.

Alemania afirma que en noviembre de 1993 una nueva empresa, Kahla II, fue creada por un inversor privado, el Sr. Raithel. En enero de 1994 el Sr. Raithel adquirió los terrenos, la maquinaria, las instalaciones y los suministros de Kahla I, que estaba en quiebra, por 7,4 millones de marcos alemanes. Parte de la mano de obra, la cartera de clientes y los pedidos también fueron asumidos. El uso de los terrenos y de los bienes inmuebles fue gratuito hasta 1997. En marzo de 1994 Thüringer Industriebeteiligungs GmbH & Co. KG (TIB) se hizo con el 49 % de las acciones de Kahla II por 1,975 millones de marcos alemanes. Esta participación fue incrementada ese mismo mes mediante un préstamo en forma de participación en el capital de 6 millones de marcos alemanes. En diciembre de 1999 TIB transfirió sus acciones al Sr. Raithel y a su hijo por un importe de [. .] (*).

Las ayudas financieras concedidas a la supuesta Kahla II a partir del momento de su creación y hasta 1998 parecen totalizar por lo menos 38,636 millones de marcos alemanes, aunque la información proporcionada sea incompleta e incluso contradictoria.

(*) Información confidencial: entre 30-40 % más alto que el precio inicial pagado por TIB.

EVALUACIÓN

Las medidas financieras a favor de Kahla I constituyen una ayuda en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. Alemania afirma que las medidas en favor de Kahla II no constituyen ayuda porque se trataría de una nueva empresa que, desde su creación, no ha estado en crisis.

Después de una evaluación preliminar de la información disponible no está claro si Kahla I y Kahla II son empresas independientes ni si Kahla II puede ser considerada como empresa activa o *Auffanglösung*. Puesto que Kahla I no parece haber experimentado una reestructuración, no está excluido que Kahla II heredara los mismos problemas que llevaron a Kahla I a la quiebra. Los informes de actividad muestran pérdidas en 1994 y 1995 y sólo resultados equilibrados de 1996 a 1999. Finalmente, la información presentada describe las medidas de reorganización tomadas por Kahla II, que podrían explicar una reestructuración, de la cual no habría ninguna necesidad en caso de que la empresa no hubiera conocido dificultades.

Por lo tanto, hay dudas fundadas de que un inversor privado habría concedido ayudas financieras similares a la empresa. Por lo tanto se debe evaluar la ayuda de los poderes públicos a Kahla II por lo menos hasta 1996, cuando obtuvo un primer resultado equilibrado, como ayuda en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. Para una evaluación preliminar se tratará independientemente a Kahla I y II. Esta opinión podría revisarse en función de la información que debe ser proporcionada por Alemania.

Ayuda supuestamente cubierta por regímenes de ayuda aprobados

Alemania no ha alegado que la ayuda a Kahla I fuera concedida bajo regímenes de ayuda aprobados. Sin embargo, aunque ayudas por unos 70,6 millones de marcos alemanes puedan haber sido concedidas bajo regímenes de ayuda aprobados, la información presentada no es suficiente para aclarar este punto.

Se alega que se ha concedido una ayuda de 10,66 millones de marcos alemanes a Kahla II con arreglo a regímenes de ayuda aprobados. Aunque se debe efectivamente considerar que aproximadamente 1,13 millones de marcos alemanes corresponden a ayuda existente, la información presentada es insuficiente para determinar si los 9,53 millones restantes están cubiertos efectivamente por regímenes de ayuda aprobados.

Así pues, la Comisión ordena a Alemania sobre la base del apartado 3 del artículo 10 del Reglamento (CE) n° 659/1999 del Consejo, que presente toda la información necesaria para determinar si esta ayuda está cubierta efectivamente por regímenes de ayuda aprobados.

Ayuda *ad hoc*

La ayuda de por lo menos 38,8 millones de marcos alemanes en favor de Kahla I y la ayuda de por lo menos 27,975 millones en favor de Kahla II no fue concedida bajo regímenes de ayuda aprobados y por lo tanto debe evaluarse como ayuda *ad hoc*. Esta ayuda debe ser evaluada de conformidad con la letra

c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE y con las directrices comunitarias de 1994 sobre ayuda estatal para el salvamento y reestructuración de empresas en crisis.

Viabilidad a largo plazo

No se presentó ningún plan de reestructuración para Kahla I. Hay argumentos para creer que se utilizó la ayuda para cubrir pérdidas y para desarrollar actividades distorsionadoras del mercado no ligadas a una reorganización. Se observa que los denunciantes expresamente hacen referencia a actividades de dumping por parte de la empresa. Por lo que respecta a Kahla II, la documentación presentada describe los pasos de la reorganización que supuestamente formaron parte de un primer concepto empresarial desarrollado posteriormente. Aunque los informes financieros de Kahla II muestran que la empresa está generando ahora beneficios modestos, para establecer el cumplimiento de este criterio, la Comisión necesita saber exactamente qué pasos de reestructuración se emprendieron efectivamente.

Distorsión indebida de la competencia

La industria de la porcelana está saturada y sufre de exceso de capacidad. Sin embargo Alemania no ha facilitado ninguna información sobre el desarrollo de la capacidad de Kahla I y la información presentada no incluye ninguna medida dirigida a reducir la capacidad. En lo tocante a Kahla II, Alemania declara que su capacidad de producción de porcelana doméstica se redujo. Sin embargo empezó a fabricar porcelana para hoteles, aunque no se proporcionan datos sobre su capacidad de producción para este sector. No puede excluirse por ello que las capacidades de producción hayan simplemente cambiado a un sector diferente.

Proporcionalidad con los costes y beneficios de la reestructuración

En lo que respecta a Kahla I y a falta de un plan, los costes de reestructuración totales no pueden determinarse. Es por lo tanto imposible evaluar si la ayuda recibida es proporcional a los costes de reestructuración o si estuvo restringida al mínimo. En lo que respecta a Kahla II se han proporcionado algunos detalles sobre el coste de varias medidas de reorganización. Puesto que es confuso que estas medidas realmente fueran ejecutadas y no se ha presentado una contabilidad de los costes de reestructuración, no puede determinarse si la ayuda fue restringida al mínimo. Finalmente, no se ha facilitado ninguna indicación de una contribución de un inversor en Kahla I ni en Kahla II.

Por lo tanto la Comisión incoa el procedimiento formal de investigación conforme al apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE con respecto a cualquier ayuda *ad hoc* y ordena a Alemania, en virtud del artículo 10 del Reglamento (CE) n° 659/1999, que facilite toda la información necesaria para determinar la cantidad exacta de ayuda concedida a Kahla I y II así como su compatibilidad con el mercado común. De conformidad con el artículo 14 del Reglamento (CE) n° 659/1999, puede obligarse al beneficiario a reembolsar toda ayuda recibida ilegalmente.

CARTA

«Die Kommission teilt der Bundesrepublik Deutschland mit, dass sie nach Prüfung der von den deutschen Behörden über die vorerwähnte Beihilfe übermittelten Angaben beschlossen hat, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag einzuleiten.

I. VERFAHREN

- (1) Am 16. November 1998 und am 24. März 1999 gingen bei der Kommission Beschwerden von Wettbewerbern über den mutmaßlichen Missbrauch staatlicher Beihilfen ein, die das Land Thüringen zugunsten der Kahla Porzellan GmbH und der Kahla/Thüringen Porzellan GmbH in Thüringen, Deutschland, gewährt haben soll.
- (2) Auf ein entsprechendes Auskunftersuchen der Kommission vom 6. Januar 1999 hin übermittelte Deutschland nach Verlängerung der Stellungnahmefrist am 7. April 1999 ein förmliches Antwortschreiben. Weitere Angaben wurden am 3. und am 25. Mai 1999 übersandt. Nach zusätzlichen Informationen der Beschwerdeführer und einem Treffen zwischen den Dienststellen der Kommission und den deutschen Behörden am 23. September 1999 ersuchte die Kommission mit Schreiben vom 8. Oktober 1999 um Notifizierung des Falls. Mit Schreiben vom 5. November 1999 übersandte Deutschland weitere Informationen, lehnte eine Notifizierung der Beihilfe jedoch ab.
- (3) Am 2. Dezember 1999 setzte die Kommission Deutschland davon in Kenntnis, dass der Fall am 8. November 1999 als nicht angemeldete Beihilfe Nr. NN 142/99 registriert worden sei und erbat weitere Auskünfte. Mit Schreiben vom 14. Januar 2000 übermittelte Deutschland einen Teil der erbetenen Informationen und beantragte eine Verlängerung der Frist für die Erteilung weiterer Angaben. Nachdem die Frist zunächst bis zum 31. Januar 2000 und dann nochmals bis zum 31. März 2000 verlängert worden war, wurden am 3. April 2000 schließlich zusätzliche Informationen übersandt.

II. BESCHREIBUNG

2.1 Das Unternehmen

- (4) Bei der Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (Kahla II) handelt es sich um den Nachfolger der Kahla Porzellan GmbH (Kahla I). Wie aus den Ausführungen in den nachfolgenden Abschnitten hervorgeht, ist unklar, ob Kahla I und Kahla II selbständige Unternehmen sind bzw. bis zu welchem Grad Kahla II als die unternehmerische Kontinuität fortführendes Unternehmen oder als Auffanglösung einzustufen ist. Beide Unternehmen stellen Geschirr aus Porzellan und Feinkeramik her. Ihre Standorte befinden sich in einem Fördergebiet nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) EG-Vertrag ⁽¹⁾.

2.1.1 Kahla Porzellan GmbH (Kahla I)

- (5) Entsprechend der einschlägigen Verordnung ⁽²⁾ wurde die Gesellschaft am 1. März 1990 im Zuge der Umwandlung des VEB Vereinigte Porzellanwerke Kahla in zwei Gesellschaften mit beschränkter Haftung gegründet. Bei einer dieser Gesellschaften handelte es sich um Kahla I. Am 23. April 1991 privatisierte die Treuhandanstalt („THA“) das Unternehmen Kahla I durch Verkauf an die Herren Hoffmann (75,1 % der Geschäftsanteile) und Ueing (24,9 % der Geschäftsanteile) gegen Entrichtung eines Kaufpreises in Höhe von 2 Mio. DEM. Die Privatisierung erfolgte nicht im Rahmen eines offenen und unbeschränkten Ausschreibungsverfahrens. Vielmehr hatte die THA die beabsichtigte Veräußerung im Verzeichnis der von ihr zum Verkauf angebotenen Betriebe (Hoppenstedt) veröffentlicht und Anfragen an den Verband der keramischen Industrie und an die Handelskammern gerichtet.
- (6) Am 9. August 1993 meldete das Unternehmen Gesamtvollstreckung an. Über das Vermögen der Gesellschaft wurde am 29. September 1993 das Gesamtvollstreckungsverfahren eröffnet.
- (7) Kahla I war zu keiner Zeit als KMU einzustufen. Deutschland stellte der Kommission folgende Daten über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens zur Verfügung:

	1991	1992	1993
Beschäftigte	1 561	827	696
Umsatz (in Mio. DEM)	25,4	29,3	27,9
Betriebsergebnis (in Mio. DEM)	[. . .] (*)	[. . .] (*)	[. . .] (*)

(*) Betriebsgeheimnis, Verluste.

2.1.2 Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (Kahla II)

- (8) Im November 1993 gründete der private Investor G. Raithel mit dem Unternehmen Kahla II eine angeblich neue Gesellschaft. Im Januar 1994 veräußerte der Gesamtvollstreckungsverwalter die Grundstücke, Maschinen und Anlagen sowie das Vorratsvermögen des Unternehmens Kahla I i. GV für 7,4 Mio. DEM an G. Raithel. Darüber hinaus wurden ein Teil der Belegschaft, der Kundenstamm und der Auftragsbestand übernommen. Der Grundbesitz und das Anlagevermögen wurden zur unentgeltlichen Nutzung bis Ende 1997 überlassen. Der Kaufvertrag sah zudem eine Beteiligung der landeseigenen Thüringer Industriebeteiligungs GmbH & Co. KG („TIB“) an dieser angeblich neu gegründeten Gesellschaft vor. Die Veräußerung wurde am 18. Juli 1994 von der THA und am 19. Oktober 1995 von der BvS genehmigt.

⁽¹⁾ ABl. L 114 vom 5.5.1994.

⁽²⁾ „Verordnung zur Umwandlung von volkseigenen Kombinat, Betrieben und Einrichtungen in Kapitalgesellschaften (UmwandVO)“.

- (9) Kahla II ist nicht als KMU einzustufen. Deutschland stellte der Kommission folgende Daten über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens zur Verfügung:

	1994	1995	1996	1997	1998
Beschäftigte	380	369	327	323	307
Umsatz (in Mio. DEM)	23	29	32	39	34
Betriebsergebnis (in Mio. DEM)	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)

(*) Betriebsgeheimnis.

2.2 Finanzierungsmaßnahmen

2.2.1 Finanzierungsmaßnahmen zugunsten von Kahla I

- (10) Im Zusammenhang mit der Privatisierung und auch danach wurden folgende Finanzierungsmaßnahmen zugunsten von Kahla I durchgeführt:
- (11) Maßnahme A: Übernahme von Altschulden in Höhe von 68,8 Mio. DEM durch die THA. Der Kommission wurde nicht mitgeteilt, welche Schulden das betraf.
- (12) Maßnahme B: Bürgschaften der THA in einer Gesamthöhe von bis zu 29,4 Mio. DEM. Der Kommission wurde nicht mitgeteilt, für welche Kredite diese Bürgschaften übernommen wurden. Zur Deckung dieser Bürgschaften leistete die Gesellschaft mehrere Sicherheiten, auf deren Inanspruchnahme — wie in den nachfolgenden Randnummern dargestellt — die THA nach der Einleitung des Gesamtvollstreckungsverfahrens verzichtete. Als zusätzliche Sicherheit wurde der THA das Recht eingeräumt, die nicht unmittelbar betriebsnotwendigen Grundstücke des Unternehmens zu verwerten. Diese Grundstücke wurden mit 13,3 Mio. DEM bewertet. Die zu erzielenden Erlöse sollten für die Tilgung der von der THA verbürgten Kredite eingesetzt werden. Zwar erhielt die Kommission keine Auskünfte über die Höhe dieser Erlöse, doch räumt Deutschland ein, dass Kahla I 1993 3,4 Mio. DEM aus diesen Erlösen zur Verfügung gestellt wurden. Ferner gibt Deutschland an, dass die mit diesen Bürgschaften besicherten Kredite mit Einverständnis der THA nie in voller Höhe zurückgezahlt wurden. Der Kommission ist weder mitgeteilt worden, in welcher Höhe diese Kredite getilgt wurden, noch ob diese Bürgschaften tatsächlich in Anspruch genommen wurden.
- (13) Maßnahme C: Aus den vorliegenden Angaben ergibt sich, dass das Unternehmen im Zuge der Privatisierung finanzielle Unterstützung für die Beseitigung von Altlasten erhielt, und zwar vermutlich von der THA. Über Höhe und Art dieser Hilfe liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor.
- (14) Maßnahme D: Im Dezember 1991 gewährte das Land Thüringen der Gesellschaft Investitionszuschüsse in Höhe von 1,825 Mio. DEM.

- (15) Maßnahme E: Am 5. Oktober 1992 bewilligte die THA ein Darlehen in Höhe von 4,2 Mio. DEM.

- (16) Maßnahme F: Ein weiteres Darlehen in Höhe von 1,8 Mio. DEM stellte die THA am 1. Dezember 1992 bereit.

- (17) Maßnahme G: Den übermittelten Angaben ist zu entnehmen, dass zugunsten der Kreis- und Stadtparkasse Jena Grundschulden über 10 Mio. DEM eingetragen wurden. Dies lässt den Schluss zu, dass die Sparkasse als Anstalt des öffentlichen Rechts dem früheren Unternehmen Kahla I Kredite bewilligt hatte. Die Kommission wurde allerdings weder über die vermutlich ausgereichten Kredite noch darüber informiert, ob diese Grundschulden ausgelöst werden mussten.

- (18) Angesichts dessen dürfte Kahla I von der öffentlichen Hand mindestens 109,425 Mio. DEM an finanzieller Unterstützung erhalten haben⁽³⁾. Die Kommission geht jedoch davon aus, dass die von Deutschland übermittelten Angaben über Finanzierungsmaßnahmen der öffentlichen Hand zugunsten von Kahla I unvollständig sind.

- (19) Trotz dieser finanziellen Unterstützung wurde am 29. September 1993 das Gesamtvollstreckungsverfahren über das Vermögen der Gesellschaft eröffnet.

- (20) Am 27. September 1993 entschied die THA, auf die Inanspruchnahme der von der Gesellschaft erbrachten Sicherungen für die im Zusammenhang mit Maßnahme B geleisteten Bürgschaften zu verzichten.

- (21) Im Privatisierungsvertrag war festgelegt, dass im Falle der Veräußerung des Grundvermögens der Gesellschaft vor dem 31. Dezember 1996 die THA bzw. deren Nachfolger, die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben („BvS“), bis zu 50 % der aus dem Verkauf erzielten Erlöse erhalten würde. Am 18. Juli 1994 verzichtete die THA auf ihre diesbezüglichen Ansprüche.

- (22) Deutschland erklärt, dass Kredite in Höhe von 41,2 Mio. DEM als Bestandteil der Konkursmasse gemeldet wurden. Der Kommission wurde nicht mitgeteilt, um welche Kredite es sich dabei handelt und ob sie getilgt wurden.

2.2.2 Finanzierungsmaßnahmen zugunsten von Kahla II

- (23) Im Zusammenhang mit dem Verkauf an G. Raithel wurden ab 1994 und noch bis 1996 folgende Finanzierungsmaßnahmen zugunsten von Kahla II durchgeführt:

- (3) Die mutmaßlich von der Sparkasse im Zusammenhang mit Maßnahme G bewilligten Kredite bleiben unberücksichtigt, weil keine gesicherten Erkenntnisse über deren Höhe vorliegen und als einziger Anhaltspunkt nur die zur Kreditsicherung eingetragenen Hypotheken herangezogen werden können. Die aus der Verwertung des Grundbesitzes von Kahla I erzielten 3,4 Mio. DEM, die Kahla I von der THA aus den Erlösen zur Verfügung gestellt wurden, sind in dieser Summe enthalten.

- (24) Maßnahme H: ein mutmaßlich im Rahmen eines Programms für KMU im Zusammenhang mit der Gründung der mutmaßlich neuen Gesellschaft gewährter Zuschuss in Höhe von 2,5 Mio. DEM.
- (25) Maßnahme I: In den vorliegenden Auskünften wird auf ein Darlehen in Höhe von 2 Mio. DEM Bezug genommen, das mutmaßlich ebenfalls im Zuge der Gründung der mutmaßlich neuen Gesellschaft aus dem Europäischen Wiederaufbauprogramm („ERP-Kredit“) gewährt wurde. Deutschland allerdings bezeichnet diese Maßnahme auch als Darlehen in Höhe von 1,8 Mio. DEM der Bayerischen Vereinsbank, das mit einem aus dem Europäischen Wiederaufbauprogramm bewilligten Darlehen refinanziert wurde. Dieses zweite Refinanzierungsdarlehen wurde mutmaßlich mittels einer Grundschild auf das Grundvermögen der Gesellschaft besichert. Über die genaue Höhe dieses Darlehens herrscht Unklarheit, und es werden keine Angaben zu dem spezifischen Programm gemacht, in dessen Rahmen es angeblich bewilligt wurde.
- (26) Maßnahme J: Ein Eigenkapitalhilfe-Darlehen („EKH-Darlehen“) über 0,2 Mio. DEM, das im Zusammenhang mit der Gründung der mutmaßlich neuen Gesellschaft im Rahmen einer Beihilferegelung ausgereicht worden sein soll. Zu dem Programm, in dessen Rahmen das Darlehen mutmaßlich bewilligt wurde, werden keine Angaben gemacht.
- (27) Maßnahme K: Laut Kaufvertrag übernahm die TIB im März 1994 gegen Entrichtung von 1,975 Mio. DEM 49 % der Anteile an Kahla II. Diese Beteiligung wurde offenbar noch im selben Monat durch ein partiarisches Darlehen erheblich aufgestockt (siehe Maßnahme L). Allerdings erhielt die Kommission keine Auskünfte über die Höhe der resultierende Anteile der TIB. Am 31. Dezember 1999 beendete die TIB ihre Beteiligung an dem Unternehmen und gab ihre Anteile an Kahla II an G. Raithel und dessen Sohn H. Raithel ab, die dafür [...] (*) entrichteten.
- (28) Maßnahme L: Im März 1994 legte die TIB ein partiarisches Darlehen in Höhe von 6 Mio. DEM aus. Das lässt auf eine erhebliche Aufstockung der TIB-Beteiligung an Kahla II schließen, wobei Deutschland erklärt, dass der TIB trotz dieses Darlehens keine zusätzlichen Stimmrechte gewährt wurden. Das Darlehen war mit 12 % zu verzinsen, wobei die Höhe der Zinsen auf 50 % des Jahresüberschusses begrenzt war. Die Kommission nimmt zur Kenntnis, dass Kahla II erst ab 1996 bescheidene Gewinne zu erwirtschaften begann. Deutschland gibt an, dass das Darlehen am 29. Dezember 1999 zuzüglich Zinsen in Höhe von 1,631 Mio. DEM zurückgezahlt wurde.
- (29) Maßnahme M: Im März 1994 reichte die landeseigene Bayerische Vereinsbank AG Erfurt Investitionskredite in einer Gesamthöhe von 20 Mio. DEM aus.
- (30) Maßnahme N: Für die Investitionskredite von Maßnahme M übernahm das Land Thüringen eine 90-prozentige Ausfallbürgschaft⁽⁴⁾, wobei das Bürgschaftsentgelt zunächst 0,75 % betrug und im Juni 1995 auf 0,5 % herabgesetzt wurde. Forderungen aus Ausfallbürgschaften können allerdings erst geltend gemacht werden, nachdem die von der Gesellschaft gestellten Sicherheiten verwertet und die Verbindlichkeiten in Höhe von 20 Mio. DEM beglichen sind.
- (31) Maßnahme O: Im Oktober 1994 erhielt Kahla II Investitionszuschüsse in Höhe von 3,360 Mio. DEM vom Land Thüringen. Weitere Investitionszuschüsse in Höhe von 1,67 Mio. DEM wurden im Dezember 1996 gewährt.
- (32) Maßnahme P: In den Jahren 1994 und 1996 erhielt das Unternehmen Investitionszulagen von 1,131 Mio. DEM.
- (33) Angesichts dessen dürfte Kahla II wohl mindestens 38,636 Mio. DEM an finanzieller Unterstützung von der öffentlichen Hand erhalten haben⁽⁵⁾.

2.3 Der deutsche Standpunkt zur Notwendigkeit der Notifizierung

- (34) In ihrem Schreiben vom 11. November 1999 vertreten die deutschen Behörden die Auffassung, sie müssten der Kommission keine der vorstehenden Finanzierungsmaßnahmen notifizieren.
- (35) Die deutschen Behörden machen geltend, dass Kahla II im Februar 1994 neu gegründet wurde und demzufolge nicht als Unternehmen in Schwierigkeiten einzustufen ist und dass die unternehmerische Kontinuität von Kahla I nicht fortgeführt wurde. Daher sollten die Finanzierungsmaßnahmen der TIB nicht als Beihilfe betrachtet werden, weil die staatlichen Behörden als marktwirtschaftlich orientierter Investor gehandelt hätten, als sie Kahla II finanzielle Hilfe zusagten. Die übrigen Finanzierungsmaßnahmen zugunsten von Kahla II sind den deutschen Behörden zufolge als De-minimis-Beihilfen anzusehen.

2.4 Marktanalyse

- (36) Sowohl Kahla I als auch Kahla II produzieren Geschirr aus Feinkeramik und Porzellan für den Haushaltssektor. Kahla II expandierte und produziert heute auch für den gewerblichen Bereich, insbesondere für Hotels und für Dekorationszwecke. Die Erzeugnisse werden auch exportiert.

(*) Betriebsgeheimnis, 30—40 % höher als der von der TIB zuerst bezahlte Preis.

⁽⁴⁾ „Richtlinie für die Übernahme von Bürgschaften und Garantien durch das Land Thüringen“ vom 18. Juni 1992 (NN 25/95), genehmigt von der Kommission am 27.12.1996 (SG(96) D/11696).

⁽⁵⁾ Die Ausfallbürgschaften des Landes gemäß Maßnahme N bleiben unberücksichtigt, um eine doppelte Anrechnung auszuschließen.

- (37) Im Sektor Tafel- und Zierporzellan findet ein intensiver Warenaustausch zwischen Mitgliedstaaten statt. Neben einer Vielzahl kleiner und mittelständischer Hersteller in Europa gibt es auch eine Reihe großer Unternehmen. Zu den Letzteren gehören Villeroy & Boch (Deutschland/Luxemburg), Hutschenreuther und Rosenthal (Deutschland) sowie Royal Doulton und Wedgwood (Vereinigtes Königreich), auf die mehr als ein Drittel der Gesamtproduktion in der Gemeinschaft entfällt.
- (38) In der Porzellanbranche bestehen Überkapazitäten. Fertigung und Verbrauch verzeichneten zwischen 1984 und 1991 ein anhaltendes Wachstum, dem in den Jahren 1992 und 1993 Rückschläge folgten. Eine für 1994 erwartete Erholung trat nicht ein. Die Handelsbilanz der letzten Jahre war positiv, doch nahm der Importanteil spürbar zu, besonders bei Haushaltsgeschirr. Der Exportzuwachs kann den Wettbewerbsdruck in diesem Sektor nicht ausgleichen. Vielmehr könnte sich die angespannte Wettbewerbsslage in Verbindung mit dem Kapazitätsüberschuss durch Marktneueinsteiger aus Südostasien und Osteuropa (vor allem der Tschechischen Republik und Ungarn), die von ihren Handelsabkommen mit der Europäischen Union profitieren, noch weiter verschärfen ⁽⁶⁾.

III. WÜRDIGUNG

3.1 Das Unternehmen

- (39) Den deutschen Behörden zufolge handelt es sich bei Kahla II um eine Neugründung, die die unternehmerische Kontinuität der früheren Gesellschaft Kahla I nicht fortgeführt hat. Allerdings kann die Kommission anhand der vorliegenden Angaben nicht feststellen, ob es sich bei Kahla I und Kahla II um selbständige Unternehmen handelt bzw. bis zu welchem Grad Kahla II als die unternehmerische Kontinuität fortführendes Unternehmen oder als Auflösung einzustufen ist.
- (40) Unternehmerische Kontinuität beinhaltet den Erwerb der Vermögensgegenstände der zum Verkauf stehenden Gesellschaft mit dem Ziel, die Wirtschaftstätigkeit des Unternehmens fortzusetzen. Im vorliegenden Fall sind Kahla I und Kahla II auf demselben Produktmarkt und unter derselben Firma tätig und stellen die gleichen Produkte mit denselben Anlagen und Mitarbeitern her (auch wenn die Belegschaftsstärke reduziert wurde). Zudem geht aus den übermittelten Informationen hervor, dass Kahla II neben den Vermögensgegenständen auch die aus Verträgen erwachsenden Verbindlichkeiten übernommen hat.
- (41) Eine zweite Möglichkeit würde darin bestehen, Kahla II als Auffanggesellschaft anzusehen, d. h. als neues Unternehmen, das gegründet wurde, um die Aktivitäten des in Gesamtvollstreckung befindlichen früheren Unternehmens fortzuführen und dessen Vermögen zu übernehmen, wohingegen die Verbindlichkeiten bei der alten, in Gesamtvollstreckung befindlichen Gesellschaft verbleiben. Obwohl sich Deutschland nicht auf diese Ausnahmeregelung beruft, sondern darauf beharrt, dass eine unternehmerische Kontinuität nicht gegeben ist und dass es sich nicht um ein Unternehmen in Schwierigkeiten handelt, gebieten die übermittelten Angaben vielfach die Einstufung von Kahla II als Auffanggesellschaft.
- (42) Angesichts dessen behandelt die Kommission in ihrer vorläufigen Würdigung beide Gesellschaften als selbständige Unternehmen und mahnt bei den deutschen Behörden eindringlich die Übermittlung von Informationen an, die hinlänglich zur Klärung dieser Frage beitragen. Die zu übermittelnden Angaben werden in Randnummer (95) der vorliegenden Entscheidung spezifiziert. Diese Ansicht kann nach Überprüfung der durch Deutschland vorzulegenden Angaben revidiert werden.

3.2 Beihilfen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag

- (43) In Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag ist festgelegt, dass, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, Beihilfen, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar sind, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen.
- (44) Kahla I und Kahla II wurden Finanzhilfen unterschiedlicher Art aus staatlichen Mitteln gewährt, die beiden Unternehmen Vorteile gegenüber ihren Mitbewerbern verschafften. Da die Unternehmen in einem europäischen Produktmarkt tätig sind, auf dem ein starker Wettbewerbsdruck herrscht, drohen finanzielle Vorteile, die den Unternehmen eine gegenüber den Mitbewerbern günstige Position verschaffen, den Wettbewerb zu verfälschen und beeinträchtigen den Handel zwischen Mitgliedstaaten.
- (45) Da Kahla I ein Unternehmen in Schwierigkeiten war, kann die Kommission die Maßnahmen von Deutschland nicht als die eines marktwirtschaftlich handelnden Investors einstufen. Somit sind die Finanzierungsmaßnahmen der öffentlichen Hand als staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag anzusehen.
- (46) Die deutschen Behörden vertreten die Auffassung, dass die Maßnahmen zugunsten von Kahla II keine Beihilfen darstellen. Ihrer Ansicht nach handelt es sich bei Kahla II um ein neues Unternehmen, das sich seit seiner Gründung nicht in Schwierigkeiten befindet. Daher hätten die öffentlichen Stellen — und insbesondere die TIB — bei der Bereitstellung finanzieller Unterstützung als marktwirtschaftlich orientierter Investor gehandelt. Zur Untermauerung dieser Argumentation legte Deutschland eine Studie vor, in der es heißt, dass mit der Beteiligung der TIB die Sicherung von Arbeitsplätzen bei Kahla II angestrebt wur-

⁽⁶⁾ Panorama der EU-Industrie 9—22; NACE (Revision 1) 26.2 und 26.3. Siehe auch die Entscheidung der Kommission im Fall C 35/97, Triptis Porzellan GmbH (ABl. L 52 vom 27.2.1999).

de. Dies steht aber im Widerspruch zum Verhalten eines marktwirtschaftlich orientierten Investors. In der Studie wird festgestellt, dass Kahla II gute Chancen auf Wiederherstellung der Rentabilität hatte, was aber keinesfalls bedeutet, dass das Unternehmen zum Zeitpunkt der Beteiligung gesund war. Darüber hinaus wird in der Studie auf die hohen Risiken verwiesen, die sich für die TIB aus einem Engagement bei Kahla II ergaben. Die Kommission ist daher der Auffassung, dass diese Studie nicht belegt, dass die TIB als marktwirtschaftlich orientierter Investor handelte. Schließlich verweist die Kommission darauf, dass anzuzweifeln ist, ob die TIB — wenn sie denn als privater Investor gehandelt hätte — ihre Beteiligung ausgerechnet in dem Moment aufgegeben hätte, als das Unternehmen Gewinne zu erwirtschaften begann.

- (47) Darüber hinaus nimmt die Kommission zur Kenntnis, dass sich die übermittelten Informationen auf Umstrukturierungsmaßnahmen beziehen, die durchgeführt werden mussten, um das in der vorstehend genannten Studie bewertete Unternehmenskonzept umsetzen zu können. Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen: Personalabbau; Ersatz für die alten Maschinen und Anlagen; Schließung von Produktionsstätten; Investitionen mit dem Ziel, technische Standards und Umweltnormen einhalten zu können, und Aufbau eines Vertriebsnetzes. Maßnahmen dieser Art könnten durchaus eine Umstrukturierung begründen, die aber nicht erforderlich wäre, wenn sich das Unternehmen nicht in Schwierigkeiten befinden würde. Zudem stellt die Kommission fest, dass aus den Bilanzen für die Jahre 1994 und 1995 eindeutig hervorgeht, dass Kahla II trotz Entschuldung und nachfolgender Kapitalspritzen des Landes 1994 bzw. 1995 Verluste in Höhe von [...] (*) erlitt. Erst 1996 wurde ein positives Betriebsergebnis von gerade einmal [...] (*) erwirtschaftet.
- (48) Somit scheint festzustehen, dass Kahla II seit der Gründung und mindestens noch bis 1996 in finanziellen Schwierigkeiten war. Daher hegt die Kommission ernsthafte Zweifel, ob ein marktwirtschaftlich handelnder privater Investor dem Unternehmen ähnliche Finanzhilfen gewährt hätte. Folglich ist die Hilfe, die Kahla II von staatlichen Stellen erhielt, als Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag zu beurteilen.

3.3 Beihilfen, die angeblich durch genehmigte Beihilferegulungen abgedeckt sind

- (49) Bei der Überprüfung einer Beihilfe, die angeblich im Rahmen eines genehmigten Programms gewährt wurde, muss die Kommission, bevor sie das förmliche Prüfverfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag einleitet, überprüfen, ob die Beihilfe von dieser Regelung abgedeckt ist und alle Bedingungen erfüllt sind, die die Kommission in ihrer Genehmigungsentscheidung festgelegt hat⁽⁷⁾. Sollte die Kommission diesbezüglich Zweifel haben, fordert sie den entsprechenden Mitgliedstaat mittels einer Anordnung zur Auskunftserteilung gemäß Artikel 10 Absatz 3 der Ver-

ordnung (EG) Nr. 659/1999 auf, ihr alle zur Beurteilung notwendigen Unterlagen, Informationen und Angaben zu übermitteln.

3.3.1 Beihilfen an Kahla I

- (50) Deutschland hat nicht behauptet, dass Beihilfemaßnahmen zugunsten von Kahla I im Rahmen genehmigter Beihilferegulungen durchgeführt wurden. Trotzdem prüft die Kommission, ob einige der Beihilfen möglicherweise unter eine genehmigte Beihilferegulung fielen.
- (51) Maßnahme A, d. h. der Erlass von Altschulden in Höhe von 68,8 Mio. DEM durch die THA, könnte im Rahmen des einschlägigen THA-Regimes gewährt worden sein. Wegen fehlender Angaben zu den Schulden, auf die sich der Erlass bezieht, kann die Kommission nicht feststellen, ob die Maßnahme tatsächlich vom entsprechenden THA-Regime⁽⁸⁾ abgedeckt ist.
- (52) Maßnahme D, d. h. Investitionszuschüsse in Höhe von 1,825 Mio. DEM, könnte als Regionalbeihilfe eingestuft werden und im Rahmen von Regelungen gewährt worden sein, die von der Kommission genehmigt wurden. Allerdings sind die Regelungen, auf deren Grundlage diese Beihilfemaßnahmen gewährt wurden, nicht im Einzelnen genannt worden. Ohne Angaben zum genauen Zeitpunkt der Ausreichung, zu der Regelung, in deren Rahmen sie angeblich gewährt wurden, und ohne ausreichende Informationen, mit denen sich feststellen lässt, ob die Bedingungen einer genehmigten Beihilferegulung erfüllt sind, kann die Kommission die Vereinbarkeit dieser Beihilfemaßnahme mit dem Gemeinsamen Markt nicht beurteilen.

3.3.2 Beihilfen an Kahla II

- (53) Deutschland macht geltend, dass die Maßnahmen H, I, J, N, O und P im Rahmen von genehmigten Beihilferegulungen gewährt wurden. Die Kommission muss demzufolge prüfen, ob diese Maßnahmen die Bedingungen der entsprechenden Regelungen erfüllen.
- (54) Maßnahme H, d. h. ein Zuschuss in Höhe von 2,5 Mio. DEM, wurde angeblich im Rahmen einer Regelung für KMU⁽⁹⁾ gewährt. Deutschland gibt an, dass Kahla II ab dem Zeitpunkt der Gründung durch G. Raithel die Kriterien für eine Einstufung als KMU erfüllte. Die Kommission stellt fest, dass Kahla II anhand der von Deutschland vorgelegten Daten nicht als KMU einzustufen war. Folglich hegt sie ernsthafte Zweifel, ob der fragliche Zuschuss durch die Regelung abgedeckt war, innerhalb derer

(*) Betriebsgeheimnis.

(7) Rechtssache C-47/91, Italien/Kommission, Slg. 1994, I-4635.

(8) Laut Punkt 3 des THA-Regimes NN 108/91, das zum Zeitpunkt der Privatisierung galt, stellt der Erlass von Altlasten oder Altschulden, deren Ursprung vor dem 1. Juli 1990 lag, keine Beihilfe dar. Jeder andere Schuldenerlass jedoch wäre eine Beihilfe und müsste der Kommission mitgeteilt werden (NN 108/91, SG(91) D/17825 vom 26.9.1991).

(9) N 480/94.

er angeblich gewährt wurde. Wenn zudem eine Mantelgesellschaft, die mit dem Ziel gegründet wird, die Vermögenswerte, die Beschäftigten und die Verbindlichkeiten eines in Gesamtvollstreckung befindlichen Unternehmens zu übernehmen, das die für KMU maßgeblichen Grenzwerte überschreitet, behauptet, dass sie als KMU einzustufen sei, muss die Kommission überprüfen, ob die Voraussetzungen der KMU-Definition erfüllt sind.

- (55) Maßnahme I, d. h. ein Darlehen in Höhe von 2 Mio. DEM bzw. 1,8 Mio. DEM, wurde angeblich im Rahmen des Europäischen Wiederaufbauprogramms gewährt. Ohne genaue Angaben zur Höhe, zum Zeitpunkt der Ausreichung, zu dem Programm, in dessen Rahmen es angeblich gewährt wurde, und ohne ausreichende Informationen, mit denen sich feststellen lässt, ob die Bedingungen einer genehmigten Beihilferegulierung erfüllt sind, kann die Kommission die Vereinbarkeit dieser Beihilfemaßnahme mit dem Gemeinsamen Markt nicht beurteilen.
- (56) Maßnahme J, d. h. ein Darlehen in Höhe von 0,2 Mio. DEM, wurde angeblich im Rahmen eines Eigenkapitalhilfeprogramms bewilligt. Ohne Angaben zum Zeitpunkt der Bewilligung, zu dem Programm, in dessen Rahmen es angeblich gewährt wurde, und ohne ausreichende Informationen, mit denen sich feststellen lässt, ob die Bedingungen einer genehmigten Beihilferegulierung erfüllt sind, kann die Kommission die Vereinbarkeit dieser Beihilfemaßnahme mit dem Gemeinsamen Markt nicht beurteilen.
- (57) Maßnahme N, d. h. die Übernahme einer 90-prozentigen Bürgschaft durch den Freistaat Thüringen. Die Kommission erkennt an, dass diese Bürgschaft auf einer im Jahr 1996 genehmigten Beihilferegulierung beruht⁽¹⁰⁾. Trotzdem braucht die Kommission das genaue Datum der Gewährung dieser Bürgschaft, da diese Regulierung erst seit 1. Juli 1994 in Kraft ist.
- (58) Maßnahme O, d. h. Investitionszuschüsse in einer Gesamthöhe von 5,03 Mio. DEM, die angeblich im Rahmen eines deutschen Gesetzes zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur gewährt wurden. Um die Vereinbarkeit dieser Investitionszuschüsse mit dem Gemeinsamen Markt beurteilen zu können, benötigt die Kommission genaue Angaben über das Programm, innerhalb dessen sie angeblich gewährt wurden.
- (59) Maßnahme P, d. h. Investitionszulagen in Höhe von 1,131 Mio. DEM. Die Kommission erkennt an, dass diese Investitionszulagen nach dem Investitionszulagengesetz von 1994 und 1996⁽¹¹⁾ bewilligt wurden.
- (60) Mithin muss die Kommission in Bezug auf die Maßnahmen A, D, H, I, J, N und O eine Anordnung zur Auskunftserteilung gemäß Artikel 10 Absatz 3 der Verord-

nung (EG) Nr. 659/1999 erlassen. In Randnummer (93) der vorliegenden Entscheidung sind die vorzulegenden Angaben im Einzelnen aufgeführt.

3.4 Ad-hoc-Beihilfen

3.4.1 Beihilfen an Kahla I

- (61) Die Kommission weist zunächst darauf hin, dass angesichts des Fehlens einer offenen und unbeschränkten Ausschreibung nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Privatisierung des Unternehmens Elemente einer staatlichen Beihilfe beinhaltet.
- (62) Bezüglich der Finanzierungsmaßnahmen zugunsten von Kahla I kann keine der Beihilfen, die die THA/BvS nach der Privatisierung des Unternehmens gewährt hatte, d. h. keine der Maßnahmen B, C, E und F, als durch die einschlägigen THA-Regimes abgedeckte Beihilfe bewertet werden, denn diese Regelungen beziehen sich nicht auf Beihilfen, die nach der Privatisierung eines Unternehmens gewährt wurden⁽¹²⁾. In Ermangelung einer Rechtsgrundlage sind die vorstehend genannten Maßnahmen und Maßnahme G als Ad-hoc-Beihilfen zu beurteilen.

3.4.2 Beihilfen an Kahla II

- (63) Als entscheidendes Kriterium für den Ausschluss des Vorliegens von Beihilfeelementen im Zusammenhang mit dem Verkauf der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten an Kahla II und der Übertragung von Beihilfen von Kahla I auf Kahla II gilt die Frage, ob der von Herrn Raithel entrichtete Kaufpreis ein marktüblicher Preis war, da ansonsten die Gefahr einer Beihilfe für den Käufer besteht. Genauso muss der Verkauf in jedem Fall bedingungsfrei erfolgen, weil ansonsten die Gefahr einer Beihilfe für das veräußerte Unternehmen besteht.
- (64) Nach Angaben der deutschen Behörden wurde G. Raithel vom Gesamtvollstreckungsverwalter wegen seiner Erfahrungen auf dem Prozeßmarkt als bester Bieter ausgewählt. Offenbar beruhte die Auswahl in erster Linie darauf, dass der Bestand des Unternehmens gesichert wird, nicht jedoch auf der Erzielung des besten Verkaufspreises. Folglich kann nicht festgestellt werden, ob der Verkauf bedingungsfrei erfolgte. Zudem liegen der Kommission keine Angaben über die Angebote anderer potenzieller Erwerber vor, so dass nicht entschieden werden kann, ob der Kaufpreis von 7,391 Mio. DEM das beste Gebot war.

⁽¹⁰⁾ Die Bürgschaften des Landes Thüringen wurden im Rahmen der „Bürgschaftsrichtlinie des Freistaates Thüringen“ vom 18. Juni 1992, geändert am 14. November 1994 (NN 25/95), gewährt, die von der Kommission am 16. Dezember 1996 genehmigt wurde.

⁽¹¹⁾ NN 47/94 und N 494/A/1995.

⁽¹²⁾ Anliegen der THA-Regimes war es, die THA und ihre Nachfolgeeinrichtungen (BMGB, TLG, BVVG und BvS) bei der Privatisierung von bisher staatseigenen Unternehmen zu unterstützen. Daher decken sie bestimmte Beihilfemaßnahmen ab, die vor und während einer Privatisierung gewährt wurden, aber keine Beihilfen, die nach der Privatisierung eines Unternehmens gewährt wurden, abgesehen von einigen geringfügigen Nachträgen zu den Privatisierungsverträgen, die im Vertragsmanagement (D/52863 vom 16.6.1997) festgehalten sind.

- (65) Darüber hinaus nimmt die Kommission zur Kenntnis, dass die THA und die BvS offenbar die Hauptkreditgeber von Kahla I waren, deren Interessen der Gesamtvollstreckungsverwalter hätte vertreten sollen. Ferner stellt die Kommission fest, dass die THA und die BvS den Verkauf genehmigten und dass der teilweise Verzicht beider Institutionen auf Ablösung der von ihnen ausgereichten Kredite offenbar finanzielle Vorteile für Kahla II bedeutete.
- (66) Folglich kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Verkauf Elemente einer staatlichen Beihilfe beinhaltet und dass Kahla II auch indirekt von staatlichen Beihilfen profitiert hat, die der Vorgänger Kahla I erhalten hatte. Zudem werden folgende Maßnahmen als Ad-hoc-Beihilfen beurteilt:
- (67) Maßnahme K, d. h. die Kapitalbeteiligung der TIB in Höhe von 1,975 Mio. DEM, ist nach Meinung Deutschlands nicht als Beihilfe anzusehen. Die Kommission erinnert an dieser Stelle daran, dass Kahla II zum Zeitpunkt der Gründung als Unternehmen in Schwierigkeiten beurteilt wird und dass anhand der übermittelten Angaben davon auszugehen ist, dass das Engagement der TIB nicht auf dem Bestreben beruhte, eine Marktinvestition zu tätigen, sondern von anderen Erwägungen bestimmt war. Es ist fraglich, dass ein privater Investor diese finanziellen Mittel bereitgestellt hätte.
- (68) Diese Beteiligung war möglicherweise durch eine genehmigte Beihilferegelung⁽¹³⁾ abgedeckt. Die Kommission hat in Bezug auf diese Regelung das förmliche Prüfverfahren eingeleitet, da hier dem Anschein nach ein Missbrauch dieser Regelung vorliegt⁽¹⁴⁾. Zwar ist die Kommission noch nicht zu einer Schlussfolgerung über die Vereinbarkeit dieser Regelung mit dem Gemeinsamen Markt gelangt, doch ist zu beachten, dass gemäß den Bedingungen der Genehmigung durch die Kommission in den Fällen, in denen Großunternehmen Beihilfen im Rahmen dieses Programms erhalten, Deutschland die jeweiligen Fälle einzeln bei der Kommission anmelden muss. Nach den vorliegenden Angaben war Kahla II zu keiner Zeit als KMU einzustufen. Dennoch wurde diese TIB-Beteiligung der Kommission nicht gesondert mitgeteilt. Darüber hinaus sieht die Regelung grundsätzlich Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen in Schwierigkeiten vor. Erhalten Unternehmen in Schwierigkeiten Beihilfen im Rahmen dieses Programms, muss Deutschland die jeweiligen Fälle einzeln bei der Kommission anmelden. Es wurde bereits an anderer Stelle festgestellt, dass die Kommission nunmehr davon ausgeht, dass Kahla II mindestens bis 1996 in Schwierigkeiten war. Dennoch wurde diese Beihilfe zu keiner Zeit notifiziert. Darüber hinaus lässt die Gewährung eines partiischen Darlehens von 6 Mio. DEM durch die TIB darauf schließen, dass diese eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen übernommen hatte, obwohl Deutschland erklärt, dass der TIB keine weiteren Stimmrechte gewährt wurden.
- (69) Angesichts dessen erfüllte die Beteiligung der TIB unabhängig von der möglicherweise gegebenen Vereinbarkeit der Regelung mit dem Gemeinsamen Markt nicht die im Programm verankerten Bedingungen und ist demzufolge als Ad-hoc-Beihilfe zu beurteilen.
- (70) Maßnahme L, d. h. das Darlehen in Höhe von 6 Mio. DEM, das Kahla II von der TIB gewährt wurde, und Maßnahme M, d. h. die von der Bayerischen Vereinsbank Erfurt ausgereichten Kredite in Höhe von 20 Mio. DEM, fußten nicht auf einer genehmigten Rechtsgrundlage. Diese Darlehen müssen ebenfalls als Beihilfen gewürdigt werden, da sie aus staatlichen Mitteln stammen und dem Unternehmen möglicherweise Vorteile verschafft haben, die ein Unternehmen in Schwierigkeiten von einem privaten Investor nicht erlangt hätte. In Ermangelung einer genehmigten Rechtsgrundlage sind sie als Ad-hoc-Beihilfen zu beurteilen.
- (71) Schließlich kann die Kommission nicht ausschließen, dass die TIB de facto Kahla II kontrollierte, und nimmt zur Kenntnis, dass die Übertragung der früher von der TIB gehaltenen Geschäftsanteile auf G. Raithel und dessen Sohn eine Beihilfe beinhaltet haben könnte, falls es sich bei dem für die Geschäftsanteile entrichteten Preis nicht um einen marktüblichen Preis handelte.

3.5 Ausnahmen gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag

- (72) Ausgehend von den obigen Ausführungen sind Beihilfen in Höhe von mindestens 38,8 Mio. DEM zugunsten von Kahla I und Beihilfen in Höhe von mindestens 27,795 Mio. DEM zugunsten von Kahla II von der Kommission als Ad-hoc-Beihilfen zu beurteilen. In Artikel 87 Absätze 2 und 3 EG-Vertrag sind Ausnahmen von der allgemeinen Unvereinbarkeit nach Absatz 1 geregelt.
- (73) Die Ausnahmeregelung des Artikels 87 Absatz 2 EG-Vertrag greift im vorliegenden Fall nicht, da die Beihilfemaßnahmen weder sozialer Art sind noch an einzelne Verbraucher gewährt werden oder der Beseitigung von Schäden dienen, die durch Naturkatastrophen oder sonstige außergewöhnliche Ereignisse entstanden sind und auch nicht für die Wirtschaft bestimmter Gebiete der Bundesrepublik gewährt werden.
- (74) Weitere Ausnahmen sind in Artikel 87 Absatz 3 Buchstaben a) und c) EG-Vertrag geregelt. Da die Hauptzielsetzung der Beihilfen nicht die regionale Entwicklung ist, sondern die Wiederherstellung der langfristigen Rentabilität eines Unternehmens in Schwierigkeiten, gelten lediglich die Ausnahmeregelungen von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag. Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) sieht die Genehmigung staatlicher Beihilfen vor, die der Förderung der Entwicklung bestimmter Wirtschaftszweige dienen, soweit sie die Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändern, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft.

⁽¹³⁾ „Thüringer Industriebeteiligungsfonds“ (N 183/94), SG(94) D/11661 vom 9. August 1994.

⁽¹⁴⁾ C 17/99, ex NN 120/98 und N 804/97, SG(99) D/1972 vom 15.3.1999.

(75) In den Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten ⁽¹⁵⁾ („Leitlinien“) hat die Kommission die Voraussetzungen für die Genehmigung von Beihilfen festgelegt. Die Kommission geht davon aus, dass keine der anderen Gemeinschaftsleitlinien, z. B. für Forschungs- und Entwicklungs-, Umwelt-, KMU- oder Beschäftigungs- und Ausbildungsbeihilfen, auf den vorliegenden Fall anwendbar ist.

(76) Da sämtliche Beihilfemaßnahmen vor Inkrafttreten der überarbeiteten Fassung der Leitlinien gewährt wurden, gelten die Leitlinien vom 23. Dezember 1994 ⁽¹⁶⁾. Dementsprechend wird die Erfüllung der in diesen Leitlinien festgelegten wichtigsten Bedingungen gewürdigt.

3.5.1 Beihilfefähigkeit des Unternehmens

(77) Wie bereits dargelegt, war Kahla I ein Unternehmen in Schwierigkeiten und ging in Konkurs. Ferner vertritt die Kommission den Standpunkt, dass die Neugründung Kahla II entgegen den vorgebrachten Behauptungen von Beginn an und zumindest noch bis 1996, also in dem Zeitraum, in dem die genannten Beihilfemaßnahmen gewährt wurden, ebenfalls ein Unternehmen in Schwierigkeiten war. Staatliche Finanzierungsmaßnahmen an Unternehmen in Schwierigkeiten bergen das Risiko, dass der Hauptbetrag im Fall eines späteren Konkurses verloren geht ⁽¹⁷⁾.

3.5.2 Wiederherstellung der Rentabilität

(78) Die Gewährung von Umstrukturierungsbeihilfen erfordert einen realistischen, zusammenhängenden und weitreichenden Umstrukturierungsplan zur Wiederherstellung der langfristigen Rentabilität des Unternehmens innerhalb eines angemessenen Zeitraums und auf der Grundlage realistischer Annahmen. Dabei gilt es den genauen Zeitraum zu prüfen.

(79) Die Kommission stellt fest, dass für Kahla I kein Umstrukturierungsplan vorgelegt wurde. Daher kann die Kommission nicht davon ausgehen, dass dieses in den Leitlinien festgelegte Kriterium erfüllt ist, und sie kann nicht ausschließen, dass die Beihilfen verwendet worden sind, um über die Jahre aufgelaufene Verluste zu decken oder ein marktverzerrendes Verhalten in Geschäftsbereichen zu entwickeln, die nicht von einer Umstrukturierung und Rationalisierung des Unternehmens betroffen sind. Die

Kommission nimmt zur Kenntnis, dass die Mitbewerber nachdrücklich behaupteten, dass die Beihilfen für Zwecke des Preisdumpings verwendet wurden.

(80) In mehreren Dokumenten, die Kahla II betreffen und der Kommission vorgelegt wurden, werden Umstrukturierungsmaßnahmen beschrieben, die als Umstrukturierungsplan eingestuft werden könnten. Deutschland gibt an, dass die Maßnahmen ein Bestandteil des ersten Unternehmenskonzept waren, das zu einem späteren Zeitpunkt erarbeitet wurde. Aus den genannten Gründen kann nicht geklärt werden, inwieweit diese Maßnahmen tatsächlich durchgeführt wurden. Die Kommission erkennt jedoch an, dass aus den ihr vorliegenden Jahresabschlüssen von Kahla II eindeutig hervorgeht, dass das Unternehmen nunmehr bescheidene Gewinne erwirtschaftet. Um die Erfüllung dieses Kriteriums feststellen zu können, muss die Kommission jedoch genau wissen, welche Umstrukturierungsmaßnahmen zur Wiederherstellung der langfristigen Rentabilität des Unternehmens ergriffen wurden.

3.5.3 Keine unzumutbare Verfälschung des Wettbewerbs

(81) Der Umstrukturierungsplan muss Maßnahmen enthalten, die ergriffen werden, um nachteilige Auswirkungen auf Konkurrenten nach Möglichkeit auszugleichen, da die im Zusammenhang mit der Privatisierung gewährten Beihilfen sonst dem gemeinsamen Interesse zuwiderlaufen und nicht gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag freigestellt werden können.

(82) Zeigt also eine objektive Beurteilung von Nachfrage und Angebot strukturelle Überkapazitäten auf einem relevanten Markt innerhalb der EU, auf dem das Unternehmen tätig ist, so muss der Umstrukturierungsplan einen im Verhältnis zur Beihilfe stehenden Beitrag zur Umstrukturierung der Branche in dem betreffenden Markt durch eine endgültige Reduzierung oder Stilllegung von Kapazitäten leisten.

(83) Die Kommission nimmt zur Kenntnis, dass der Porzellanmarkt gesättigt ist und dass die Porzellanbranche an Überkapazitäten leidet. Die deutschen Behörden haben jedoch keine Angaben zur Kapazitätsentwicklung von Kahla I vorgelegt. Die übermittelten Informationen enthielten auch keine Maßnahmen für einen Kapazitätsabbau. Daher kann die Kommission nicht beurteilen, ob Maßnahmen ergriffen wurden, die ausreichend sind, um nachteilige Auswirkungen auf Konkurrenten nach Möglichkeit auszugleichen.

(84) In Bezug auf Kahla II gibt Deutschland an, dass die Fertigungskapazität bei Haushaltskeramik um 44 % zurückgefahren wurde. Die Kommission nimmt aber zur Kenntnis, dass Kahla II in die Produktion von Hotelporzellan eingestiegen ist, wobei Deutschland allerdings keine Angaben über seine Fertigungskapazität in diesem Sektor übermittelt hat. Folglich kann nicht ausgeschlossen werden, dass Fertigungskapazitäten einfach in einen anderen Sektor verlagert wurden. Es lässt sich also nicht feststellen, ob Maßnahmen ergriffen wurden, die ausreichend sind, um nachteilige Auswirkungen auf Konkurrenten auszugleichen.

⁽¹⁵⁾ ABl. C 368 vom 23.12.1994, S. 12.

⁽¹⁶⁾ In Punkt 7.5 der Leitlinien von 1999 (ABl. C 288 vom 9.10.1999) heißt es: „Alle Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen, die ohne Genehmigung der Kommission und somit in Widerspruch zu Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag gewährt werden, wird die Kommission wie folgt auf ihre Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt hin prüfen: (...) auf Grundlage der Leitlinien, die zum Zeitpunkt der Beihilfegewährung galten“.

⁽¹⁷⁾ Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen in Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften, von der Kommission angenommen am 24. November 1999.

- (85) Schließlich stellt die Kommission fest, dass es in der von Deutschland als Begründung für die TIB-Beteiligung vorgelegten Studie heißt, dass das mit einer solchen Beteiligung verbundene hohe Risiko ausgeglichen werden sollte, indem verhindert wird, dass Mitbewerber aus der Porzellanbranche in Thüringen Beihilfen erhalten. Wäre diese Linie konsequent verfolgt worden — wie die Beschwerdeführer behaupten —, könnte diese Beihilfe für Kahla II zusätzliche nachteilige Auswirkungen auf Konkurrenten gehabt haben.

3.5.4 Verhältnis zu den Kosten und Nutzen der Umstrukturierung

- (86) Umfang und Intensität der Beihilfe müssen sich auf das für die Umstrukturierung notwendige Mindestmaß beschränken und in einem Verhältnis zu dem aus Gemeinschaftsrecht erwarteten Nutzen stehen. Deswegen wird von den Investoren ein Beitrag zum Umstrukturierungsplan aus eigenen Mitteln verlangt. Außerdem muss die Beihilfe in einer solchen Form gewährt werden, dass dem Unternehmen keine überschüssige Liquidität zufließt, die es zu einem aggressiven und marktverzerrenden Verhalten in Geschäftsbereichen verwenden könnte, die von dem Umstrukturierungsplan nicht betroffen sind.
- (87) Da für Kahla I kein Plan vorliegt, können die Gesamtkosten der Umstrukturierung nicht ermittelt werden. Es ist daher nicht möglich zu beurteilen, ob die empfangene Beihilfe in einem Verhältnis zu den Umstrukturierungskosten steht bzw. auf das für die Umstrukturierung notwendige Mindestmaß beschränkt ist.
- (88) Die für Kahla II übermittelten Unterlagen beziehen sich auf Umstrukturierungsmaßnahmen, wobei zwar für einige dieser Maßnahmen Einzelheiten zu den Kosten angegeben werden, aber keine umfassende Kostenaufschlüsselung erfolgt. Da unklar ist, welche dieser Maßnahmen tatsächlich umgesetzt wurden, und eine Gesamtübersicht über die Umstrukturierungskosten nicht vorgelegt wurde, kann die Kommission nicht feststellen, ob die Beihilfe auf das Mindestmaß beschränkt ist.
- (89) Ferner stellt die Kommission fest, dass weder zu Kahla I noch zu Kahla II Angaben über einen Beitrag eines Investors vorgelegt wurden.
- (90) Der Umstand, dass sich ein erheblicher Teil der erhaltenen Maßnahmen auf die Liquidität auswirkt, veranlasst dazu, die Möglichkeit zu erwägen, dass dem Unternehmen möglicherweise durch die Beihilfe zusätzliche liquide Mittel zugeflossen sind, die es zu einem aggressiven und marktverzerrenden Verhalten verwenden könnte, so etwa für Kampfpreise oder den Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen an konkurrierenden Unternehmen. Die Kommission stellt insbesondere fest, dass die Beschwerdeführer speziell diese beiden letzteren Möglichkeiten vorgebracht haben.
- (91) Demzufolge kann die Kommission nicht ermitteln, ob die Beihilfen in dem gewährten Umfang in einem Verhältnis zu den Kosten und Nutzen der Umstrukturierung stehen.

3.5.5 Vollständige Durchführung des Umstrukturierungsplans

- (92) Das Unternehmen muss den der Kommission vorgelegten Umstrukturierungsplan vollständig durchführen. Da kein Umstrukturierungsplan vorliegt, kann die Kommission nicht prüfen, ob diese Voraussetzung der Leitlinien erfüllt ist.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

- (93) Gemäß Artikel 10 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 fordert die Kommission Deutschland auf, ihr innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens alle Unterlagen, Angaben und Daten zu übermitteln, die sie benötigt, um festzustellen, ob die Beihilfen zugunsten von Kahla I und Kahla II, die angeblich im Rahmen genehmigter Beihilferegelungen (Maßnahmen A, D, H, I, J, N und O) gewährt wurden, durch diese Regelungen abgedeckt sind und ob sie die Bedingungen erfüllen, die in den Genehmigungsentscheidungen festgelegt sind. Dies betrifft insbesondere:
- a) Angaben dazu, ob bei der Privatisierung von Kahla I der beste Bieter den Zuschlag erhielt; einen Beleg dafür, dass es sich bei dem Preis um einen marktüblichen Preis handelte;
 - b) den genauen Betrag sämtlicher an Kahla I und Kahla II gewährten Beihilfemaßnahmen, die angeblich durch genehmigte Beihilferegelungen abgedeckt waren;
 - c) den Zeitpunkt der Gewährung sämtlicher an Kahla I und Kahla II gewährten Beihilfemaßnahmen, die angeblich durch genehmigte Beihilferegelungen abgedeckt waren;
 - d) die einzelnen, von der Kommission genehmigten Programme, in deren Rahmen sämtliche angeblich von genehmigten Beihilferegelungen abgedeckten Beihilfemaßnahmen an Kahla I und Kahla II gewährt wurden;
 - e) Angaben dazu, ob die an Kahla I und Kahla II gewährten Beihilfen bis zu den für KMU festgelegten Höchstgrenzen gewährt wurden. Informationen, die ausreichen, um festzustellen, ob Kahla II während eines Teilabschnitts der Firmengeschichte als KMU einzustufen war;
 - f) zur Maßnahme A Angaben über die vorherigen Finanzierungsmaßnahmen, auf die sie sich bezieht.
- (94) Anhand der Angaben muss sich feststellen lassen, ob die angeblich im Rahmen genehmigter Beihilferegelungen gewährten Beihilfen die Bedingungen jener Regelungen erfüllen, auf deren Grundlage sie vorgeblich gewährt wurden. Die Kommission behält sich das Recht vor, das förmliche Prüfverfahren bei den Maßnahmen einzuleiten, die im Ergebnis der Würdigung der von den deutschen Behörden auf die vorliegende Anordnung zur Auskunftserteilung hin übermittelten Angaben als neue Beihilfen einzustufen sind.

- (95) Die Kommission hat ebenfalls beschlossen, bezüglich der an Kahla I und Kahla II gewährten Ad-hoc-Beihilfen (Maßnahmen B, C, E, F, G, K, L und M) das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag sowie nach Artikel 6 und 16 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates einzuleiten.
- (96) Im Hinblick darauf und gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates fordert die Kommission die Bundesrepublik Deutschland auf, ihr innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens alle für die Würdigung der Vereinbarkeit der vorerwähnten Ad-hoc-Beihilfen notwendigen Unterlagen, Angaben und Daten zu übermitteln. Dies betrifft insbesondere:
- a) alle Angaben, die notwendig sind, um zu ermitteln, ob mit Kahla II die Geschäftstätigkeit von Kahla I fortgeführt wurde oder ob beide als verschiedene Rechts- und Wirtschaftseinheiten zu betrachten sind. Dazu gehört auch eine ausführliche Darstellung aller Vorgänge im Zusammenhang mit der Gründung von Kahla II und der Übernahme von Grundstücken, Maschinen, Anlagen, Beschäftigten, Kundenstamm und Auftragsbestand von Kahla I im Jahr 1994, einschließlich aller sachdienlichen rechtlichen und vertraglichen Vereinbarungen, die bisher noch nicht übermittelt wurden.
 - b) den Nachweis, dass es sich bei dem für die Vermögenswerte von Kahla II entrichteten Preis um einen marktüblichen Preis handelte und dass der Verkauf bedingungsfrei erfolgte;
 - c) alle Informationen, die notwendig sind, um feststellen zu können, ob Kahla II als Auffanglösung zu betrachten ist;
 - d) die Frage, ob Kahla II als Tochterunternehmen von Kahla I gegründet wurde;
 - e) die genaue Größenordnung aller an Kahla I und Kahla II gewährten Ad-hoc-Beihilfen unter Angabe des Zeitpunkts der Gewährung, der Höhe und des Zwecks;
 - f) zur Maßnahme G Angaben über die vorherigen Finanzierungsmaßnahmen, auf die sich die Grundschulden beziehen;
 - g) alle vorhandenen Umstrukturierungspläne, die bis jetzt für Kahla I und II eine Rolle gespielt haben könnten. Darzulegen sind Notwendigkeit und Zweck der Beihilfen. Dazu gehören eine Beschreibung der durchgeführten bzw. geplanten Investitionen und alle anderen Umstrukturierungskosten, für die staatliche Beihilfen verwendet wurden, Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen (für Kahla I), Kapazitätsentwicklungen und Angaben dazu, ob der Investor einen Beitrag geleistet hat bzw. leistet;
 - h) den Nachweis, dass die Gewährung eines Darlehens über 6 Mio. DEM im Rahmen von Maßnahme K nicht dazu führte, dass die TIB das Unternehmen kontrollierte; die Frage, welchen Umfang die TIB-Beteiligung nach der Gewährung des Darlehens hatte, und den Nachweis, dass es sich bei dem von der TIB für die Beteiligung an Kahla II entrichteten Preis um einen marktüblichen Preis handelte.
- (97) Anderenfalls wird die Kommission gemäß Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates eine Entscheidung auf der Grundlage der ihr vorliegenden Elemente erlassen. Sie bittet die deutschen Behörden, dem etwaigen Empfänger der Beihilfe unmittelbar eine Kopie dieses Schreibens zuzuleiten.
- (98) Die Kommission erinnert die Bundesrepublik Deutschland an die Sperrwirkung des Artikels 88 Absatz 3 EG-Vertrag und verweist auf Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates, wonach alle rechtswidrigen Beihilfen von den Empfängern zurückgefordert werden können.»
-

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado CE**Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones**

(2001/C 185/06)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Fecha de adopción de la decisión: 28.3.2001**Estado miembro:** Dinamarca**Ayuda:** N 121/2000**Denominación:** Fondo del sector peletero**Objetivo:** Mejorar la calidad de las pieles y desarrollar nuevas aplicaciones**Fundamento jurídico:**

Lov nr. 414 af 13. juni 1990 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. med ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 818 af 3. november 1999

Bekendtgørelse nr. 956 af 10. december 1993 om produktionsafgift på pelsskind

Presupuesto:

Presupuesto total: 16,45 millones de coronas danesas (alrededor de 2,2 millones de euros)

— Seminarios: 2,50 millones de coronas danesas (alrededor de 335 000 de euros)

— I+D: 6,050 millones de coronas danesas (alrededor de 810 000 de euros)

Intensidad o importe de la ayuda:

— Seminarios: no se trata de una ayuda

— I+D: hasta 100 %

Duración: 2000-2009

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Intensidad o importe de la ayuda:

Entre 800 000 pesetas españolas (4 808 euros) y 2 millones de pesetas españolas (12 020 euros) por puesto de trabajo creado. Para las ayudas a las inversiones, 7,5 % (empresas medianas) o 15 % (pequeñas empresas); en las zonas asistidas, intensidad regional con bonificación del 10 % para las PYME

Para la asistencia técnica, 50 %, con un límite máximo de 3 millones de pesetas españolas (18 080 euros)

Duración: 2000-2006**Otros datos:** Informe anual

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Fecha de adopción de la decisión: 28.3.2001**Estado miembro:** Alemania**Ayuda:** N 784/2000**Denominación:** Programa I+D «Microelectrónica»**Objetivo:** Apoyar proyectos de I+D en microelectrónica**Fundamento jurídico:** Haushaltsgesetz; Einzelplan 30, Kapitel 06, Titel 68317 Elektronik

Presupuesto: 28 millones de marcos alemanes (aproximadamente 14 millones de euros) anuales (presupuesto total del programa: 140 millones de marcos alemanes, aproximadamente 70 millones de euros, en 5 años), de los cuales aproximadamente dos tercios se consideran ayuda a empresas y un tercio financiará la investigación en institutos públicos de investigación

Intensidad o importe de la ayuda: Hasta un 50 % para la investigación industrial, más un 10 % regional [letra a) del apartado 3 del artículo 87] y/o un 10 % PYME y/o prima de cooperación del 10 %, en su caso

Duración: Hasta el 1 de marzo de 2005

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Fecha de adopción de la decisión: 28.3.2001**Estado miembro:** España (La Rioja)**Ayuda:** N 625/2000**Denominación:** Ayudas a la economía social**Objetivo:** Creación y consolidación del empleo y refuerzo de la economía social**Fundamento jurídico:** Bases reguladoras de la concesión de ayudas al Programa de Fomento de la Economía Social**Presupuesto:** 36 millones de pesetas españolas (216 364 euros) en 2000**Fecha de adopción de la decisión:** 11.4.2001**Estado miembro:** Países Bajos (todas las regiones de la letra c) del apartado 3 del artículo 87)**Ayuda:** N 627/2000**Denominación:** Sistema de amortización para las zonas de ayuda regional (2000-2006)

Objetivo: Regional

Fundamento jurídico:

Artikel 10 van de Wet op de Inkomstenbelasting 1964

Artikel 8 van de Wet op de Inkomstenbelasting 1969, „Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving”

Presupuesto: 20 millones de florines neerlandeses (9,1 millones de euros)

Intensidad o importe de la ayuda: 2,6 % equivalente neto de subvención/equivalente bruto de subvención

Duración: 2000-2006

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Fecha de adopción de la decisión: 11.4.2001

Estado miembro: España

Ayuda: N 750/2000

Denominación: Plan de consolidación y competitividad de las PYME

Objetivo: Ayudas a la inversión y consultoría para las PYME

Fundamento jurídico: Real Decreto por el que se establecen el régimen de ayudas y el sistema de gestión del Plan de Consolidación y Competitividad de las PYME

Presupuesto: 6 000 millones de pesetas españolas (36,06 millones de euros) anuales

Intensidad o importe de la ayuda: Ayudas a la inversión: 15 % (pequeñas empresas) y 7,5 % (empresas medianas) en las zonas no asistidas; y límite máximo regional más bonificación del 15 % para las zonas asistidas de la letra a) del apartado 3 del artículo 87, y límite máximo regional más bonificación del 10 % para las zonas asistidas de la letra c) del apartado 3 del artículo 87. Ayudas de consultoría: 50 %

Duración: 2000-2006

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Fecha de adopción de la decisión: 11.4.2001

Estado miembro: Alemania (Baviera)

Ayuda: N 124/01

Denominación: I+D Programa «Alta tecnología para el siglo XXI»

Objetivo: Apoyar proyectos de I+D en microelectrónica

Fundamento jurídico: Bayerische Haushaltsordnung i.V.m. Gesetz über die Errichtung der Bayerischen Forschungstiftung und Satzung der Bayerischen Forschungstiftung

Presupuesto: 60 millones de marcos alemanes (30 millones de euros aproximadamente) en promedio anual, de los que 12 millones de euros se consideran ayudas a empresas y 18 millones financiación de la investigación en institutos públicos de investigación

Intensidad o importe de la ayuda: Investigación fundamental: máximo 100 %; estudios de viabilidad: máximo 75/50 %; investigación industrial: máximo 50 %; desarrollo precompetitivo: máximo 25 %, más 10 % puntos para las PYME, más 10 % puntos de conformidad con el punto 5.10.4. a) o b) del marco I+D; en total, incluidas primas, un máximo del 75 % para la investigación industrial y del 50 % para el desarrollo precompetitivo

Duración: Hasta el 31 de diciembre de 2005

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Fecha de adopción de la decisión: 25.4.2001

Estado miembro: Francia

Ayuda: N 316/A/2000

Denominación: La Réunion 2000-2006 — Zonas de actividad y zonas estratégicas

Objetivo: Regional — Ayuda al funcionamiento en forma de reducción de alquileres

Fundamento jurídico: Article L 1511-5 du Code Général des Collectivités Territoriales

Presupuesto: Alrededor de 6,34 millones de euros anuales

Duración: Hasta finales de 2006

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Fecha de adopción de la decisión: 25.4.2001

Estado miembro: Alemania

Ayuda: N 694/2000

Denominación: Investigación en salud — Investigación para los ciudadanos

Objetivo: I+D

Fundamento jurídico: Haushaltsgesetz der Bundesregierung, Einzelplan 30 für den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Kapitel 3005, Titel 68503 sowie Titel 68504, Dispo DF2GF0037

Presupuesto: 1 800 millones de marcos alemanes (alrededor de 900 millones de euros), de los cuales aproximadamente el 10 % en ayuda estatal

Intensidad o importe de la ayuda: Para investigación fundamental, hasta el 100 %, para investigación industrial, hasta un 50 %, para desarrollo precompetitivo, hasta un 25 %. Además, posibles primas a las PYME, a los proyectos en zonas asistidas y a los proyectos de cooperación

Duración: 8 años

Otros datos: Informe anual

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado CE

Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones

(2001/C 185/07)

Fecha de adopción de la decisión: 27.4.2001

Estado miembro: Alemania (Brandemburgo)

Ayuda: N 561/2000

Denominación: Fomento de las pruebas de rendimiento y de otras medidas en las ganaderías de vacuno

Objetivo: Apoyar al sector ganadero

Fundamento jurídico: Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen für die Förderung von Leistungsprüfungen und weiteren Maßnahmen in der Tierzucht

Presupuesto: 1,2 millones de marcos alemanes al año, procedentes del presupuesto de Brandemburgo

Duración: Hasta el año 2006

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Fecha de adopción de la decisión: 27.4.2001

Estado miembro: Alemania, Mecklemburgo-Pomerania Occidental

Ayuda: N 566/2000

Denominación: Construcción y mejora de sistemas de irrigación y drenaje

Objetivo: Medidas de regulación del agua para proteger los suelos y las condiciones de la tierra agrícola

Fundamento jurídico: Richtlinie für die Gewährung von Zuschüssen für die Modernisierung und den Neubau von Beregnungs- und Dränanlagen

Presupuesto: 1,4 millones de marcos alemanes anuales del presupuesto de Mecklemburgo-Pomerania Occidental

Duración: Ilimitada

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Fecha de adopción de la decisión: 27.4.2001

Estado miembro: España (Andalucía)

Ayuda: N 609/2000

Denominación: Ayudas a las empresas de economía social

Objetivo: Realizar inversiones en el sector de la transformación y la comercialización de productos agrícolas y crear empleo gracias a las inversiones

Fundamento jurídico: Proyecto de Decreto que regula las ayudas al sector agrario

Presupuesto: Para el período 2000-2001: 8 000 millones de pesetas españolas (48 millones de euros)

Intensidad o importe de la ayuda: Hasta el 50 %

Duración: Indeterminada

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Fecha de adopción de la decisión: 27.4.2001

Estado miembro: Italia

Ayuda: N 742/2000

Denominación: Modificación del proyecto RIBS — Salvi Services

Objetivo: Mejora de las estructuras productivas

Fundamento jurídico: Articolo 23 della legge 7 de agosto 1997, N. 266

Presupuesto: 48 900 millones de liras italianas (25 254 742 euros)

Intensidad o importe de la ayuda: 25,3 %

Duración: La ayuda se concede una sola vez

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado CE**Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones**

(2001/C 185/08)

Fecha de adopción de la decisión:	23.6.2000
Estado miembro:	Italia (Toscana)
Ayuda:	N 826/2000
Denominación:	Programa de fomento económico de actividades agrarias en el año 2001
Objetivo:	Fomento de la producción agraria de la región y del agroturismo
Fundamento jurídico:	Legge Regionale 14.4.1997 n. 28 come modificata ed integrata dalla legge Regionale 20.3.2000 n. 35
Presupuesto:	Indeterminado
Intensidad o importe de la ayuda:	Variable en función de cada medida
Duración:	Un año
Otros datos:	Las autoridades italianas se han comprometido a presentar a la Comisión ejemplares de los materiales de promoción y de publicidad incluidos en este régimen

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Notificación de una empresa en participación**(asunto COMP/E-2/38.176 — DuBay)**

(2001/C 185/09)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

1. El 21 de junio de 2001, la Comisión recibió de Bayer AG y DuPont Deutschland Holding GmbH und Co. KG una solicitud de declaración negativa y una notificación de exención, conforme al apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE, de un acuerdo por el que se constituye la empresa en participación, DuBay Polymer GmbH, destinada a construir, poseer, mantener y explotar una planta de conversión de materias primas en polímeros de tereftalatos de polibutileno («polímeros PBT») para su uso independiente por cada una de estas empresas en sus actividades descendentes de compuestos de PBT. Cada empresa adquirirá por separado las materias primas y las suministrará a la empresa en participación. Los polímeros PBT producidos por la empresa en participación sólo se suministrarán a Bayer, DuPont y a sus filiales autorizadas.
2. Tras haber realizado un examen preliminar, la Comisión ha llegado a la conclusión de que la empresa en participación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 17.
3. La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre la operación proyectada.
4. Las observaciones deberán llegar a la Comisión en un plazo máximo de diez días desde la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse a la Comisión por fax [(32-2) 299 24 64] o por correo con la referencia COMP/E-2/38.176 — DuBay a la dirección siguiente:

Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Dirección E
Despacho 1/223
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel.
